

La fuerza de la razón sobre las armas

Resistencia civil no violenta y participación ciudadana
en el Oriente Antioqueño, Colombia [2001-2004]

Ana María Jaramillo

**LA FUERZA DE LA RAZÓN
SOBRE LAS ARMAS**

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo del Programa Regional de Becas de CLACSO.

Este libro presenta la investigación que la autora realizó en el marco del concurso de proyectos para investigadores de nivel superior sobre *Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe* organizado por el Programa Regional de Becas de CLACSO con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

Jaramillo, Ana María

La fuerza de la razón sobre las armas : resistencia civil no violenta y participación ciudadana en el Oriente Antioqueño, Colombia : 2001-2004 . - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2010.

EBook. - (Becas de investigación)

ISBN 978-987-1543-57-1

1. Ciencias Políticas. 2. Conflictos. 3. Participación Ciudadana.

I. Título

CDD 303.6

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:
Conflicto Armado / Resistencia civil-no violenta / Participación
ciudadana / Paz / Democracia / Comunidades locales / Acción
colectiva / Colombia / Oriente Antioqueño

Colección Becas de Investigación

LA FUERZA DE LA RAZÓN SOBRE LAS ARMAS

RESISTENCIA CIVIL NO VIOLENTA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
ORIENTE ANTIOQUEÑO, COLOMBIA
(2001-2004)

Ana María Jaramillo*



CLACSO

* Socióloga, Magíster en Historia, investigadora de la Corporación de Región, organización no gubernamental de Medellín, Colombia (investigación en temas relacionados con conflicto, violencias, desplazamiento). Publicaciones recientes: Miedo y desplazamiento: experiencias y percepciones (2004), "Crime (counter) insurgency and the privatization of security- the case of Medellín, Colombia" (2004), Rostros del miedo: una investigación sobre los miedos sociales urbanos (2003).

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Editor Responsable Emir Sader - Secretario Ejecutivo de CLACSO

Coordinador Académico Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO

Colección Becas de Investigación

Directora de la Colección Bettina Levy - Coordinadora del Programa Regional de Becas

Asistentes del Programa Natalia Gianatelli - Luciana Lartigue - Magdalena Rauch

Revisión técnica de textos Ernesto Funes

Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO

Responsable editorial Lucas Sablich

Director de arte Marcelo Giardino

Responsable de contenidos web Juan Acerbi

Web master Sebastián Higa

Logística Silvio Nioi Varg

Arte de tapa Marcelo Giardino

Primera edición

La fuerza de la razón sobre las armas: Resistencia civil no violenta y participación ciudadana en el Oriente Antioqueño, Colombia (2001-2004)

(Buenos Aires: CLACSO, septiembre de 2010)

ISBN 978-987-1543-57-1

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 | piso 5° J | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | <clacso@clacso.edu.ar> | <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <www.biblioteca.clacso.edu.ar>

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Prólogo		9
Introducción		11
Acerca de las dinámicas recientes del conflicto armado en Colombia		17
El movimiento de los alcaldes del Oriente Antioqueño y los acuerdos humanitarios		61
Participación ciudadana en medio de la guerra		75
De las asambleas a los procesos constituyentes		85
La inserción en lo global: el reconocimiento del Oriente Antioqueño como laboratorio de paz		89
A manera de conclusión: Resistir, sobrevivir y soñar		97
Bibliografía		101

PRÓLOGO

Este libro presenta la investigación realizada durante el año 2004 por Ana María Jaramillo en el marco del Concurso CLACSO-Asdi sobre “Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe”. Los resultados finales de esta investigación fueron actualizados y preparados para su publicación en el año 2007.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de actividades que el Programa Regional de Becas de CLACSO viene desarrollando con el objeto de fortalecer la producción académica latinoamericana y caribeña y promover la reflexión crítica sobre los grandes desafíos que enfrentan las sociedades de la región. Esta convocatoria buscó promover estudios y debates relativos a las formas y contenidos de la vida democrática de nuestras sociedades en los albores del siglo XXI. Muy especialmente, sobre las experiencias de resistencia, lucha y movilización así como también sobre las alternativas de gestión, autogobierno o representación orientadas a la construcción de sociedades más justas e igualitarias, fundadas en la auténtica participación colectiva en los asuntos de la vida pública. En este sentido, se pretendía que los proyectos de investigación recibidos abordaran estos fenómenos atendiendo a sus modalidades específicas –es decir, sus identidades, liderazgos, formas organizativas y prácticas políticas- así como también sus potencialidades emancipatorias y

las limitaciones y obstáculos que enfrentaban en el contexto de las democracias capitalistas actuales.

Queremos destacar que esta actividad no hubiera sido posible sin la confianza y el apoyo brindado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi) quien auspició la organización de este concurso. Asimismo, dejamos constancia del valioso aporte realizado por los académicos que formaron parte de los Jurados que asumieron la tarea de evaluar y seleccionar los trabajos presentados: Norma Fuller (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú), Marco Antonio Gandásegui (Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, Panamá) y Robinson Salazar Pérez (Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), México). Agradecemos también a los directores de los Centros Miembros de CLACSO que respaldaron las presentaciones y facilitaron la tarea de los investigadores en sus respectivas instituciones.

Muy especialmente agradecemos a los investigadores ganadores del concurso en las categorías Nivel Superior y Consolidación Académica por el aporte que hicieron al programa. En orden alfabético sus nombres son: Andrea Andújar, Gustavo Eduardo Córdova Eguívar, Isidoro Cheresky, Ana María Jaramillo, James William Joseph Argus, Raudelio Machín Suárez, Dunia Mokrani Chávez y Juan Carlos Peña Márquez.

Finalmente destacamos la colaboración de los colegas de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO que participaron en esta iniciativa. En particular a Natalia Gianatelli y Ernesto Funes, por su colaboración en la preparación de este libro. Extendemos este agradecimiento al equipo de Producción Editorial de CLACSO, quien tuvo a su cargo la revisión técnica, el diseño y la diagramación de este libro.

Programa Regional de Becas

Buenos Aires, junio de 2010

INTRODUCCIÓN

“El único héroe capaz de cortar la cabeza de la Medusa es Perseo que vuela con sus sandalias aladas; Perseo que no mira el rostro de la Gorgona sino su imagen reflejada en el escudo de bronce”

Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio, 1989

En un contexto de agudización y degradación del conflicto armado que desde hace varias décadas vive Colombia, ante la ausencia de un monopolio de la fuerza por parte del Estado, la intensificación de la disputa entre guerrillas y paramilitares por el control de territorios, numerosas y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violaciones a los derechos humanos, han tenido lugar diverso tipo de experiencias de resistencia civil no violenta en diferentes puntos de la geografía colombiana.

Se trata de acciones colectivas que han tenido como protagonistas a comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y también habitantes de las ciudades que, de muy diversas maneras, han expresado su rechazo a los atropellos cometidos por los protagonistas de la guerra irregular que se libra en Colombia.

Dichas experiencias presentan, entre sus rasgos más sobresalientes: una activa participación de algunos de los grupos de población más

afectados por el conflicto armado, un fuerte sentido de pertenencia a sus localidades o comunidades, el soporte en procesos de organización y de movilización, una importante labor de acompañamiento por parte de la Iglesia Católica y por los Evangélicos, representantes de la comunidad internacional y organizaciones no gubernamentales (ONG), y la presentación de numerosas denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (Hernández , 2004:26) y (Hernández Lara, 2002)

Varias de estas experiencias han alcanzado renombre nacional e internacional. Es el caso de las comunidades de paz en la región de Urabá, en el noroccidente del país, y de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, en el suroccidente.

En 1997 y 1998 se formaliza la constitución de las comunidades de paz en San José de Apartadó (Urabá) y en el bajo y medio Atrato (departamento del Chocó), con la participación de diversas comunidades campesinas, y como una forma de respuesta al acoso de guerrillas, autodefensas y Ejército. La particularidad de la resistencia está dada por su tentativa de constitución en comunidades autónomas con asiento en un territorio bien delimitado, y el compromiso explícito de sus habitantes, mediante pacto público, de no involucrarse con los actores armados legales o ilegales. Para formar parte de estas comunidades se deben cumplir con normas que permitan preservar su neutralidad: no portar armas de fuego, no dar ningún tipo de ayuda táctica ni logística a las partes en conflicto, no ofrecer ni manipular información alguna, estar comprometido con una salida política y negociada al conflicto, reconocer y promover la organización interna y entre las comunidades de paz para fortalecer su autonomía y desarrollo (Ramírez y Serna, 2004).

En el Cauca han sido las comunidades indígenas paéz y guambiana, los artífices de variadas acciones colectivas de resistencia civil no violenta. En 1998 se conforma la Guardia Indígena, una especie de ejército destinado a la defensa de los territorios que habitan, y de su autonomía. Está conformada por hombres y mujeres elegidos por estas comunidades para mantener el orden, la disciplina y el control en los resguardos indígenas. Se identifican por una pañoleta roja que tienen en el cuello y por su bastón de mando, y una varita negra adornada con borlas de colores según su rango en la organización. No portan armas, pero tienen una estructura jerárquica disciplinada, casi militar, y una sólida convicción de que en su tierra mandan los indígenas y nadie más (León, 2004).

La movilización de esta Guardia Indígena ha sido fundamental para la liberación de secuestrados -como el alcalde de Toribío y otros cuatro indígenas privados de su libertad por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-, el impedimento a las

incursiones de los grupos armados en sus territorios o el reclutamiento forzado de jóvenes en sus filas, la prevención de agresiones y masivos desplazamientos forzados de sus comunidades y de campesinos, y el desmantelamiento de laboratorios de cocaína. Este tipo de acciones los hicieron merecedores del Premio Nacional de Paz para el 2004, junto con los cacaoeros del Bajo Cagúan.

Estas acciones a su vez han contribuido a darle forma al Movimiento Por la Paz que, desde la década de 1990, ha promovido numerosas movilizaciones, el impulso a diálogos regionales de paz, campañas contra el terrorismo y grandes marchas por la vida en las principales ciudades, y diversas acciones de concertación y articulación en torno a la paz, como la Red de Iniciativas contra la Guerra y por la Paz (Redepaz), Mandato Ciudadano por la Paz, Asamblea por la Paz, Planeta Paz, No Más, Colombia Va, Paz Colombia y Ruta Pacífica de las Mujeres¹.

1 En el balance que presenta García-Durán (2004) sobre la trayectoria del movimiento por la paz, destaca varios ejes comunes: rechazo a las violaciones de derechos humanos, apoyo a una solución negociada del conflicto armado, resistencia a los abusos cometidos por los actores armados, y construcción de alternativas de paz y desarrollo. Entre los factores que han favorecido su consolidación, García menciona la injerencia de la Iglesia Católica, de organizaciones no gubernamentales, de la izquierda democrática y de la intelectualidad; con valiosos aportes al análisis de conflictos, violencias y acerca de las posibilidades de construcción de la paz, el apoyo de entidades internacionales y las formas de cooperación de acciones nacionales con otras de orden más global, entre las cuales se encuentra el Foro Social Mundial y la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en San Vicente del Caguán en febrero de 2002, durante el período de Andrés Pastrana (1998-2002), y el ambiente de polarización en torno a la viabilidad o no de las negociaciones de paz con la guerrillas, incide en un declive de este movimiento, al igual que la dificultades para garantizar su sustentabilidad y encontrar salidas a ciertos ámbitos críticos en sus relaciones con la sociedad, como la falta de consenso y escasa claridad discursiva con relación al uso de la violencia; un manejo mediático de la paz que ha implicado en muchos casos la invisibilidad de experiencias concretas en diferentes regiones y localidades; una relación ambigua con el ámbito político y el Estado, y los retos no siempre fáciles que plantean las relaciones con los actores internacionales (García Durán, 2004; Pecaú, 2003). Esta crisis que atañe principalmente a las expresiones nacionales del movimiento, transcurre en paralelo con el florecimiento de expresiones locales y regionales de iniciativas de paz, entre las cuales se cuentan diversas formas de resistencia civil no violenta que adquieren mayor relevancia, desde fines de los años noventa con la propuesta de neutralidad activa por parte de los indígenas de Antioquia (Green, 2003), la emergencia del movimiento de mujeres contra la guerra, y las importantes experiencias desarrolladas por comunidades campesinas y poblaciones indígenas en el sur del país (departamentos de Cauca, Nariño y Caquetá) que, como subraya García-Durán (2004:10), “son las que más han recurrido a nuevas formas de acción colectiva, que han dado en llamar ‘de resistencia civil’, para defender sus vidas, su patrimonio cultural y su dignidad, y para expresar su repudio a toda acción de grupos armados sobre sus territorios. Cantos y danzas tradicionales, cordones humanos, despliegue de banderas blancas, en algunas oportunidades han sido eficaces contra el fuego de las armas y para ahuyentar temporalmente la guerra de su entorno”. Ver también (León, 2004; Acosta, 2003; Caldón, 2003).

El propósito de este ensayo es una aproximación a la experiencias de resistencia civil no violenta en la región del Oriente Antioqueño, durante un período de intensificación de la confrontación armada, (1998-2003). Este interés responde a la pertinencia que reviste la aproximación a una experiencia en la cual el ejercicio de la resistencia se logra poner en relación con la creación de espacios y procesos de participación, y con la gestación de un proyecto de desarrollo y paz de alcance estratégico, el Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño, con el respaldo de la Unión Europea.

¿Cómo es que en esta región se generan condiciones que hacen posible acciones colectivas de resistencia civil no violenta? ¿Cuales son sus alcances y sus limites? ¿Quienes son sus protagonistas? ¿De qué manera contribuyen a la construcción de formas de participación democrática?

Antes de intentar algunas respuestas, preciso el sentido que le asigno a la noción de “resistencia civil no violenta”.

En el lenguaje histórico-político y en un sentido estricto, el concepto de resistencia remite a todos aquellos movimientos o formas de oposición activa y pasiva que se dieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación alemana, en los países ocupados por la Wehrmacht, en los países administrados por Alemania, y en los países satélites (Bobbio, 1997).

Sin embargo, Michel Randle (1998) al examinar las características de los acciones de resistencia que han tenido lugar desde la época de posguerra en Europa y en países de África, Asia y América Latina, aporta en la consideración de la resistencia civil como un método colectivo de lucha política que funciona a base de movilizar a la población civil para que retire el consenso, y procure socavar las bases del poder oponente mediante la acción no violenta (Randle, 1998:25). Esto es lo que diferencia a la resistencia civil de la disidencia individual, y de la resistencia civil armada.

En la resistencia civil no violenta se puede apelar a diversas estrategias, de acuerdo con las circunstancias concretas. Para el caso de Colombia, como observa María Teresa Uribe, cobran importancia ciertas modalidades que pueden implicar desde una aparente acomodación a órdenes autoritarios, apelando al silencio hostil o los rechazos pasivos, hasta la resistencia mas directa o la combinación de varias estrategias, dando lugar a modelos híbridos consistentes en una aceptación parcial y selectiva de los diversos órdenes en competencia que gravitan sobre los pobladores situados en las áreas de conflicto, pero sin que ello signifique un enfrentamiento directo o un rechazo público hacia alguno de los órdenes en disputa (Uribe, 2002).

Estas formas de resistencia civil no violenta también pueden ser analizadas desde la perspectiva de la acción colectiva, por tratarse de iniciativas que comprometen a un conjunto de individuos en busca de un fin en común (Tilly, citado en: García, 2004); y desde la construcción de democracia por los procesos de deliberación y toma de decisiones a los que han dado lugar. Aquí es donde el entendimiento de la democracia en el sentido planteado por Lazarte (2001:313), como una forma de relación social en la que los hombres puedan vivir juntos siendo diferentes y sin tener que apelar al uso de la violencia para resolver los conflictos, cobra una particular significación.

Es necesario tener en cuenta que las experiencias de resistencia civil no violenta en Colombia no son ajenas a una tradición que se ha forjado en América Latina en contra de las dictaduras militares, y en el contexto de las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, durante los años ochenta.

Tampoco se puede pasar por alto la importancia que desde la década de los noventa ha cobrado la resistencia como un rasgo distintivo de los nuevos movimientos sociales en América Latina (Aguilar, 2004; Berrón y Freire, 2004; Amin y Houtart, 2003; Quijano, 2004), aunque la misma se encuentra asociada a un rechazo a los tratados de libre comercio (TLC), la reestructuración de la deuda externa, las privatizaciones, la sobre explotación de los recursos naturales, y al desplazamiento de tropas de países centroamericanos para su participación en la guerra de Irak .

También la resistencia ha adquirido una connotación como forma de hacer política. Es lo que se ha puesto de manifiesto con la compleja experiencia del Zapatismo en México. Sin la pretensión de una toma del poder, se ha intentado hacer realidad el propósito de “mandar obedeciendo”, mediante el impulso a proyectos alternativos de vida desde los cuales se pugna por una defensa de la soberanía popular, el reconocimiento de la diferencia, y de "un mundo en el que quepamos todos" (Álvarez, 2003).

Ahora bien, en las formas de relación que se han venido construyendo entre acciones colectivas de resistencia civil no violenta y participación democrática han incidido una ampliación de los regímenes democráticos en el continente, y los logros en la descentralización del Estado y en la institucionalización de la participación como salida a la crisis del estado desarrollista que, entre los años cuarenta y setenta, tuvo un papel de primer orden en América Latina. (Velásquez, 2003).

Así mismo, la realización de campañas y los foros sociales a nivel continental y mundial, han favorecido la generación de una cultura política democrática, en donde la participación y la deliberación en torno a asuntos de interés común ocupan un lugar central. Es lo que ha

ocurrido en Porto Alegre con la realización del Foro Social Mundial, y con los avances en la conformación de redes virtuales que han venido operando como medio de conocimiento y de concertación de acciones comunes de gran impacto, que permiten superar una dimensión meramente anclada en lo local.

No obstante estos avances, lo predominante es un déficit en materia de ciudadanía social -notorio en el aumento de la pobreza y el agravamiento de los desequilibrios en la distribución de la riqueza-, que ha venido acrecentando un sentimiento de desencanto con la misma democracia con el riesgo de una vuelta hacia atrás, en la imposición de regímenes autoritarios (PNUD, 2004). Sin embargo se ha ido labrando una tradición que en determinadas circunstancias, como las planteadas por la guerra, se pueden convertir en un factor que impulsa a la población civil a resistir a los intentos de implantación de órdenes autoritarios.

Este ensayo consta de tres partes. La primera se centra en el contexto referido a la evolución reciente del conflicto armado en Colombia, y su expresión en la región del Oriente Antioqueño, teniendo en cuenta características sociodemográficas y de movilización social y política, el proceso de inserción de los actores armados, y sus estrategias. En segunda instancia se analizan las acciones de resistencia civil no violenta llevadas a cabo por parte de la población y los alcaldes del Oriente. En tercer lugar se consideran las formas de participación que se generan a partir de estas experiencias, y la constitución del Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño, que abre una ventana para la inscripción de esta experiencia regional en un contexto global de mundialización de las resistencias y de lucha por la democracia.

ACERCA DE LAS DINÁMICAS RECIENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

En el contexto latinoamericano, Colombia se destaca por la persistencia de un conflicto armado que, a diferencia de Guatemala, El Salvador y Honduras, aún no logra ser resuelto por la vía de una negociación política, no obstante los intentos por hacerlo por parte de sucesivos gobiernos a partir de los años ochenta. Empero, desde los años sesenta y hasta el presente, se han producido importantes transformaciones en las dinámicas del conflicto, así como en la búsqueda de alternativas de solución al mismo.

En los comienzos del Frente Nacional (1958-1974) -el pacto bipartidista mediante el cual se pone punto final a la violencia de los años cincuenta¹ - surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

¹ Por Violencia (con mayúscula) se entiende uno de los periodos más cruentos en la historia del país, que se extiende desde 1946 a 1960. "Lo que en su origen fue una clásica guerra de partidos por la toma del poder, y sin que en ningún momento el enfrentamiento haya perdido su carácter partidista, fue revistiendo de modo simultáneo otras dimensiones: una revancha social de las elites después del gran miedo que siguió al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y a la insurrección del Bogotazo, luego un proceso de acumulación primitiva en la regiones de economía cafetera en beneficio de una burguesía media que se valía de la violencia para controlar los circuitos de producción y de comercialización; enseguida, una guerra fratricida entre campesinos de los dos partidos, con niveles de atrocidad comparables a los de la guerra civil española y finalmente, una resistencia campesina tardía que oscilaba entre formas políticas y un bandolerismo a gran escala" (Pecaut, 2003: 20).

(FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)². Dicho surgimiento, a más de la influencia de la revolución Cubana y de la estrategia de construcción de focos guerrilleros en América Latina, también es promovida en el país por el radicalismo de sectores urbanos salidos de las clases medias, que hacen un llamado a la destrucción de un régimen percibido como obstáculo para el advenimiento de la modernidad en todos los campos -sociales, políticos, culturales-; y por otra parte, por la persistencia de la violencia en las zonas rurales, y por la disponibilidad relativa de una parte de la población campesina para vincularse a la movilización armada (Pecaut, 2003:20). No obstante las diferencias ideológicas y programáticas entre las nacientes guerrillas del ELN, el EPL y las FARC, éstas coinciden en una estrategia de inserción en zonas de colonización campesina, y en la realización de cierto tipo de acciones militares, como las tomas guerrilleras a localidades alejadas de las ciudades, y emboscadas a patrullas del Ejército.

2 En el proceso de constitución de las FARC concurren diversos fenómenos: la implantación del Partido Comunista en zonas campesinas, que deriva en la conformación de una organización de autodefensa para resistir al acoso de los conservadores y el Ejército durante la Violencia; la estrategia adoptada por el Partido Comunista de combinación de todas las formas de lucha, y el lanzamiento de la Operación Marquetalia destinada a acabar con las llamadas “republicas independientes”, objetivo preconizado por el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado en el gobierno de Guillermo León Valencia(1962-66). A raíz de ello se produce el desplazamiento de población campesina en lo que se conoce como las “columnas de marcha”, que lleva a la ocupación de la zona del San Vicente del Caguán (escenario de las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana varias décadas después). En septiembre de 1964, se reúne en Riochiquito la primera conferencia de la guerrilla. Luego, en 1966, e inmediatamente después de las operaciones del Ejército y la realización de la Conferencia Tricontinental de La Habana, se realiza una segunda conferencia que proclama el nacimiento de las FARC bajo el anuncio de iniciar “una guerra prolongada por el poder” (Pecaut, 2003: 65). El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene una historia diferente. Su nacimiento se relaciona con la estrategia de constitución de focos guerrilleros en América latina emulando el ejemplo de la revolución cubana.. Con tal fin se procede al entrenamiento de la “brigada por la liberación nacional José Antonio Galán”. Una vez que regresan al país emprenden la tarea de creación de un foco guerrillero en san Vicente de Chucurí, zona rural de Santander con una tradición de resistencia liberal en los años cincuenta. El 7 de enero de 1965, con la toma de Simacota, se dan a conocer al país. Luego en 1965, con la vinculación del sacerdote católico Camilo Torres, adquieren un renombre internacional. La conformación del Ejército Popular de Liberación (EPL), representa el intento de aplicación de la vía china. Los partidarios de la estrategia de conformación de una guerrilla acorde con la estrategia de guerra prolongada sustentada en la constitución de zonas de apoyo, se agrupan en el Partido Comunista Marxista Leninista, que orienta la conformación del EPL. En 1967 un grupo de cuadros entre los cuales se cuenta disidentes del Partido Comunista, intelectuales y sindicalistas le dan inicio a este proyecto en los valles del río San Jorge y del Sinú, departamento de Córdoba (hoy zona de control de las autodefensas). En 1991 se produce la desmovilización de este grupo, en el marco de un proceso de negociación con el gobierno de Virgilio Barco.

Aunque en sus inicios la insurgencia es vista como un fenómeno marginal, propio de las zonas rurales más abandonadas por el Estado, empieza a adquirir dimensiones insospechadas a partir de la década de 1980, con una expansión a zonas más integradas a la economía y la política nacional ³. Esto se facilita por la obtención de recursos económicos derivados de los nexos que establecen con la economía de la coca⁴, la extorsión a las compañías multinacionales que realizan obras de infraestructura en sus zonas de influencia -como acontece con la Occidental Petroleum Company, y con la construcción del oleoducto en el Arauca, en el área de influencia del ELN- y con los secuestros. De este modo, la guerrilla empieza a sentar las bases para el desarrollo de una “guerra de movimientos”, gracias al control de territorios de valor estratégico por la concentración de actividades económicas, las facilidades que brindan para su desplazamiento, y la cercanía a las ciudades. El resultado es la conformación de territorialidades bélicas, cuyas marcas y fronteras poco tienen que ver con la división político-administrativa, y la afectación de sectores de población civil que habían estado al margen del conflicto armado (Uribe, 2003).

Pero esta expansión de las guerrillas va a tener un gran costo político para éstas, al facilitar el predominio de la lógica militar en detrimento de la lógica política -lo que afecta especialmente al Partido Comunista en su relación con las FARC-, y un desdibujamiento de la imagen del guerrillero como rebelde, al quedar asociado con la delincuencia común y la violación de los derechos humanos, tradicionalmente atribuidos al Ejército, la Policía y los organismos de inteligencia.

Este accionar de la insurgencia acarrea la reacción de élites locales y carteles de la droga, quienes, en alianza con políticos influyentes nacional y regionalmente, y en complicidad con esferas e instancias del Estado -principalmente de las Fuerzas Armadas-, no demoran en ejecutar acciones de retaliación en contra de los secuestros, extorsiones y amenazas de que son víctimas, conformando grupos de autodefensa

3 En 1978 la guerrilla disponía de diecisiete frentes implantados en un número reducido de municipios periféricos. En 1985 posee una cincuentena de frentes que operan en ciento setenta y tres municipios. En 1991, ochenta frentes afectan trescientos cincuenta y ocho municipios. En 1994 dispone de ciento cinco frentes que ejercen influencia en quinientos sesenta y nueve municipios, más de la mitad del total de municipios del país (Pecaut, 2001).

4 La expansión de la guerrilla a comienzos de los años ochenta no puede explicarse si no se toman en cuenta los ingresos ligados al control de territorios de cultivo y transformación de la coca. El gramaje (impuesto del 10% cobrado a los cultivadores), las tasas sobre los colectores y los transportadores, les aseguran ingresos considerables (Cubides, citado en: Pecaut, 2001).

que llevan a cabo acciones de “limpieza”⁵ en zonas de influencia guerrillera, lo que a su vez acentúa la pérdida del monopolio estatal de la violencia organizada y un agravamiento del panorama de los derechos humanos. Estos grupos se extienden por diversas regiones del país en varias etapas: Incursión, para liberar amplias zonas bajo la influencia guerrillera y consolidación en donde, según ellos, se trata de llevar riqueza a las regiones bajo su control por medio de la entrega subsidiada de tierras, la generación de empleo, la concentración de la población en áreas urbanas y una tercera fase de legitimación, mediante la cual las regiones “liberadas” dejen de ser ruedas sueltas del Estado y se logre la instauración de un Estado “modernizante” con el concurso del sector privado (González, 2002).

Es de advertir que en Colombia el fenómeno de las autodefensas tiene antecedentes históricos que se remontan a la existencia de ejércitos privados con un importante papel en las guerras civiles del siglo XIX; a las policías privadas con que los terratenientes pretendieron neutralizar los conflictos agrarios en las primeras décadas del siglo XX; mucho más nítidamente las llamadas “contrachusmas”, “guerrillas de paz” y los “pájaros” de los años cincuenta⁶; y luego, en los años setenta, a la conformación de “Escuadrones de la Muerte” bajo el influjo de la doctrina de seguridad nacional y la estrategia de lucha anticomunista con el apoyo de ganaderos y propietarios de tierra (Sánchez, 2000).

El accionar de diversos actores armados ilegales (guerrillas, autodefensas, bandas delincuenciales, grupos de “limpieza”) apoyados en redes de poder, y los intercambios que con frecuencia se establecen entre estos grupos para la entrega de personas secuestradas, la compra de armamento, o la vigilancia de laboratorios o zonas de cultivo de coca, torna más difusos los límites entre violencia política y criminalidad común, y hace más compleja la caracterización de los actores armados, ya sea guerrillas o autodefensas, por la manera como se entremezclan motivaciones de orden político, económico, militar y de control social sobre la población en los territorios donde logran ejercer un dominio territorial.

5 Así se denominan en Colombia a las acciones desarrolladas por agrupaciones armadas que en las ciudades y en las áreas rurales, especialmente en las cabeceras municipales, se dedican al exterminio de personas consideradas desechables, como atracadores, ladrones, viciosos, prostitutas, entre otros. Aunque en principio fue un fenómeno atribuido a integrantes de la Policía y civiles de ultraderecha, es asumida como una estrategia por parte de los grupos de autodefensa. Ver al respecto (Uribe y Vásquez, 1995).

6 En la época de la Violencia se hizo común este apelativo para referirse a mercenarios que iban de un lugar a otro para hacer “trabajitos”, es decir, asesinatos consumados por encargo de jefes políticos locales, especialmente los conservadores. Ver al respecto (Ortiz, 1985).

Hacia los años ochenta el poder logrado por las guerrillas y sus impactos en la vida de la nación impulsa a los gobiernos a la búsqueda de una solución negociada. El primero en hacerlo es el presidente Belisario Betancur (1982-1986) mediante la apertura de un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, que en 1984 da sus primeros frutos con los Acuerdos de La Uribe, gracias a los cuales se logra un cese al fuego y el lanzamiento de la Unión Patriótica, movimiento auspiciado por las FARC con la participación de algunos de sus comandantes, junto con dirigentes del Partido Comunista. Pero los militantes de este movimiento se convierten en el blanco de narcotraficantes y paramilitares en alianza con fuerzas del Estado, dando al traste con este experimento político. Luego, con la toma del palacio de justicia por parte del Movimiento Diecinueve de Abril (M19), se cerró cualquier posibilidad de negociación del conflicto armado⁷.

En los gobiernos liberales de Virgilio Barco (1986-1990), de César Gaviria (1990-1994) y de Ernesto Samper (1994-1998), aunque se introducen variantes para darle un nuevo impulso a la negociación, no hay logros significativos con las FARC y el ELN. Pero la exitosa culminación de los procesos de negociación con el Ejército Popular de Liberación (EPL), con el grupo Quintín Lame y con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) (disidencia del ELN)⁸, demuestran los logros por la vía de la negociación y de la participación en la vida política, como se pone de presente, con el destacado papel de un grupo de desmovilizados del M19, con Antonio Navarro Wolf como su principal figura, en la Asamblea Constituyente que culmina con la proclamación de una nueva constitución política para el país, el 4 julio de 1991.

Pero el inicio de este proceso constituyente coincide con el bombardeo a Casa Verde, la sede central del Secretariado de las FARC, ubicada en el municipio de La Uribe perteneciente al departamento del Meta en diciembre de 1990. En respuesta a esta acción, esta agrupación lleva a cabo una ofensiva militar que no deja dudas acerca de su poderío. Así lo demuestran las acciones en las que participan centenares de combatientes,

7 Si bien Colombia es el primer país que inicia conversaciones de paz con la guerrilla, mucho antes que los procesos de paz en Centroamérica, donde la insurgencia armada fue muy importante, las negociaciones de paz fracasan y la guerra se intensifica, mientras que en Nicaragua, Salvador y Guatemala éstas concluyen con éxito (Romero, 2004).

8 Estas agrupaciones corresponden a una segunda generación de agrupaciones guerrilleras, cuyos métodos, perspectivas y lenguajes corresponden a una “subversión de la subversión”, es decir, a una renovación del movimiento insurgente favorecido por la relación con las luchas agrarias en la década de 1970, y la emergencia de movimientos sociales no como un hecho aislado y marginal, sino con presencia en la vida nacional (Pizarro, 1992).

y los ataques a guarniciones, en los que se llega a hacer prisioneros a por lo menos medio centenar de soldados y policías. Todo ello da la impresión de una transformación en las dinámicas bélicas, de una "guerra de guerrillas" a una "guerra de movimientos" (Pecaut, 2003).

También los grupos de autodefensas, después de haber superado una crisis interna, avanzan hacia su consolidación, con un proceso organizativo y político liderado por Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), que adelantan una intensa labor de "limpieza" de sectores de la población considerados como base de apoyo de la guerrilla. En 1997 Castaño proclama a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como actores políticos, y un ambicioso plan estratégico de expansión, con el propósito de recuperar el control de zonas de influencia de la guerrilla en el país.

La agudización de la confrontación entre guerrillas y autodefensas y el mismo Ejército determina la configuración de zonas en disputa⁹ que abarcan importantes porciones del territorio nacional, y una utilización intensiva del terror como estrategia para ejercer control sobre la población y la "limpieza" de los territorios que aspiran a controlar. A partir de este momento, se produce un notorio incremento en las violaciones a los DD.HH. y el DIH, y una agudización de la crisis humanitaria asociada al fenómeno del desplazamiento forzado de población, al igual que una expansión del conflicto armado allende las fronteras -con la presencia de refugiados-, y la incursión de guerrilla y autodefensas para la realización de acciones delictivas, principalmente secuestros¹⁰.

Estos cambios dan cuenta de una generalización de la confrontación armada, que llega a ser considerada por algunos analistas como equivalente a una guerra civil (Ramírez, 2000; Giraldo, 2001). Sin embargo la apelación a este concepto tampoco logra dar cuenta de la compleja situación que se vive en un país en donde el Estado continua ejerciendo autoridad sobre grandes porciones del territorio, y los actores ilegales se ven en mayores dificultades para hacer de sus acciones

9 María Teresa Uribe, retomando el concepto de Michel Foucault de estados de guerra, ha propuesto la noción de zonas en disputa para referirse a aquellas porciones de territorios "donde el poder institucional no es soberano y donde prevalece en sectores amplios de población la voluntad manifiesta de no someterse al orden estatal y de resistirse a su dominio y control manteniendo abierta la posibilidad de confrontarlo o combatirlo con las armas en la mano, así como de agrupar a los sujetos sociales de su entorno en bandos capaces de matar o morir" (Uribe, 2003: 251).

10 La crisis humanitaria del desplazamiento forzado en Colombia, y el número cada vez mayor de refugiados que salen del país, constituyen el ejemplo más crítico de los cambios en la naturaleza de la migración forzada en las Américas. En la actualidad hay tres millones de desplazados internos en Colombia, y otros 234.000 colombianos se han refugiado en países vecinos, como Ecuador, y en países más distantes, como Canadá (Acnur, 2003; Codhes, 2002).

referentes de validez general, a los cuales gran parte de la población pueda adherir (Pecaut, 2001 y 2003; Zuluaga, 2004), como lo evidencia la emergencia de experiencias de resistencia civil no violenta en ámbitos urbanos y rurales.

Desde el inicio de su gobierno el presidente Andrés Pastrana¹¹ opta por la estrategia de negociar con las FARC, y descarta a las autodefensas. Con tal propósito se define la creación de una zona de desmilitarización de encuentro de 42.000 Km.² que abarca los municipios de San Vicente del Caguán, La Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y San Vicente, en los departamentos de Meta y Caquetá, conocida también como “zona de despeje”, y destinada al desarrollo de las negociaciones. También se establecen contactos con el ELN para dar inicio a una negociación, que en principio no contempla el despeje de territorios sino la facilitación de contactos con la sociedad civil, orientada a la realización de una convención nacional. En la misma se debían abocar temas considerados de vital importancia, como los derechos humanos, la impunidad, los recursos naturales y la política energética; democracia, estado de las Fuerzas Armadas y corrupción.

Pero los acercamientos con el ELN son saboteados por las AUC, que también promueven la realización de un encuentro con representantes de la sociedad civil en el Nudo de Paramillo -sede de su cuartel general-, en donde se comprometen a respetar a la población civil. Las FARC, por su parte, llevan a cabo una ofensiva que culmina el veintiocho de diciembre de 1998 con la toma del campamento central de las AUC, y la exigencia al gobierno para proceder al desmonte del paramilitarismo.

Aún con los nuevos intentos que, en el transcurso de 1999, se emprenden para el avance de los procesos de negociación, tampoco se obtienen mayores resultados. Las guerrillas de las FARC y del ELN insisten en sus acciones militares como medio de presión para obtener mayores concesiones a la hora de las negociaciones. Además, las FARC establecen nuevos condicionamientos para el manejo de la “zona de despeje”. Igualmente, el ELN propone una zona de conciliación para la realización de la convención nacional en un territorio conformado por cuatro municipios del Magdalena Medio (Bolívar, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Morales). Pero esta propuesta es vista por las AUC como una amenaza para la consolidación de su proyecto nacional, dada la importancia estratégica de esta región, en la que también ellas tienen presencia. Así que, en asociación con administraciones municipales de la posible zona de conciliación y de

11 Misael Pastrana, de filiación conservadora, logra inclinar la balanza a su favor, en una cerrada competencia por la presidencia con el candidato liberal Horacio Serpa para el período 1998-2002, gracias a la divulgación de una fotografía suya en compañía del máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, lo que hacía esperar una reapertura de las negociaciones de paz.

ganaderos, negociantes y organizaciones del mismo Estado lanzan una ofensiva en la que se combinan las acciones “limpieza”, la intimidación de la población, el impulso del movimiento “no al despeje”, y una tentativa de asalto al campamento central de la cúpula del ELN, en la serranía de San Lucas (Romero, 2003).

En medio de estas dificultades, el gobierno de Pastrana acuerda con las FARC la realización de una gira por Europa, con la finalidad de obtener respaldo político y financiero al proceso de negociación. Sin embargo, los mecanismos de presión utilizados por las FARC -la “ley 002” mediante la cual esta guerrilla establece el “cobro de impuestos para personas con un patrimonio superior al millón de dólares”, y la “ley 003” para castigar a los funcionarios y políticos corruptos- abona a un ambiente de escepticismo y a las ya consabidas acciones de respuesta por parte de las AUC, como el secuestro de varios congresistas “en protesta contra la equivocada política de paz de Pastrana” (González, 2002: 91).

De otra parte, la aprobación del “Plan Colombia”¹² va a ser considerado por la guerrilla como un serio obstáculo para el proceso de paz, dado el apoyo que de allí se deriva para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la implementación de una política antidrogas, con la fumigación de cultivos de uso ilícito. Ante la posibilidad de estas fumigaciones, las FARC promueven la realización de un paro armado en el departamento del Putumayo, en el sur del país (epicentro de una movilización del campesinado cocalero desde 1996), lo cual genera una crisis humanitaria, con el desplazamiento forzado masivo de población y una crisis alimentaria de grandes proporciones por la paralización, por varios meses, de las actividades económicas (González, 2002).

El presidente Pastrana, en su afán por avanzar en las negociaciones con las FARC y con base en las recomendaciones de una comisión de personalidades, suscribe el acuerdo de San Francisco de la Sombra en octubre del 2001, en el que se sientan las bases para el rediseño de la agenda hacia la solución política. Paradójicamente, como anota González Posso (2004: 52) aunque este constituía el punto más avanzado en veinte años de búsqueda de un pacto de paz con las FARC, se produce en el momento de más bajo respaldo político para el gobierno.

A esto se agrega una acción de las FARC que suscita el rechazo nacional (secuestro y posterior asesinato de la ex-ministra de Cultura)

¹² El “Plan Colombia” es el nombre que adopta la estrategia de cooperación de los Estados Unidos con Colombia para la lucha contra el narcotráfico, que representó un aporte de 645 millones de dólares en el 2001 y de 904 millones en el 2002, destinados en principio a combatir los cultivos de coca y amapola. A comienzos del 2003 se aprueba una ayuda adicional por 110 millones de dólares, a modo de retribución por su apoyo a la guerra de Irak. Sin embargo, en el nuevo contexto de la guerra contra el terrorismo, se han hecho ajustes tendientes a brindar un mayor apoyo a las Fuerzas Armadas.

que precipita una crisis de las negociaciones, a las que se le trata de encontrar una salida con la mediación de las Naciones Unidas, a través de la gestión de su representante, James Lemoyne. En el instante que vencía el plazo para la prolongación de la zona de despeje, el ocho de enero de 2002, las FARC reconocen que sí estaban dadas las condiciones para el inicio de las negociaciones en este lugar, y se muestran dispuestas a acordar un cronograma para alcanzar un cese al fuego. Pero otra acción de un frente de las FARC-el secuestro de un avión con un congresista liberal- hace que el presidente Pastrana tome la decisión de poner fin a las negociaciones con las FARC.

Es del caso señalar que esta ruptura definitiva del proceso de negociación con las FARC se produce en el nuevo contexto de lucha global contra el terrorismo, de un clamor generalizado contra la inseguridad, y de un ambiente cada vez más polarizado en contra de la guerrilla. Todo ello favorece el ascenso al poder de Álvaro Uribe, vehemente opositor a la estrategia de negociación desarrollada por Pastrana, y partidario de una estrategia de “mano dura” contra la subversión.

En efecto, una vez que Uribe inicia su mandato centra la atención en la implementación de la estrategia de la “seguridad democrática”, que se fundamenta en una definición del terrorismo como la principal amenaza para la democracia en Colombia. En atención a la defensa del Estado de Derecho y la protección de todos los ciudadanos se definen unas líneas de acción orientadas a lograr una consolidación gradual del control estatal sobre la totalidad del territorio, un buen funcionamiento de la justicia y apoyo a las autoridades, la eliminación del comercio de drogas ilícitas, una presencia integral del Estado en los territorios fronterizos, la modernización de las Fuerzas Armadas¹³, y la transparencia en la administración de los recursos. Para hacer esto realidad se demanda de una activa participación y colaboración de la sociedad con las autoridades, y en especial con la Fuerza Pública (Presidencia de la República, 2002).

Transcurridos dos años de aplicación de esta estrategia, el gobierno Uribe se muestra satisfecho con los logros obtenidos en el control de las principales vías que antes eran objeto de atentados y retenes, una disminución del secuestro, de las tomas guerrilleras y las masacres, y una presencia de las fuerzas militares y de policía en áreas sometidas al control de la guerrilla. Pero esta ofensiva no se traduce en golpes decisivos a las FARC, que opta por un repliegue hacia sus zonas de influencia,

13 Uribe le da continuidad a un proceso de modernización que se había iniciado en 1993 durante el gobierno de César Gaviria, y que luego se intensifica en el gobierno de Pastrana, con el aumento de presupuesto militar, que en 1990 era uno de los más reducidos de América Latina, y con el reclutamiento de soldados profesionales, y modificaciones en el régimen interno de las distintas armas (Pecaut, 2003a).

en espera de un mejor momento para pasar nuevamente a la ofensiva y demostrar el fracaso de este gobierno en su intención de derrotarlos estratégicamente por la vía militar.

De todos modos, el tema de las negociaciones con los actores armados ilegales mantiene su vigencia, aunque ahora la contraparte no es la guerrilla sino las autodefensas, que dan un giro en su estrategia militar y política, al manifestar su disposición a emprender el camino de una negociación que redunde en su desmovilización y en su inserción a la sociedad, con la expectativa de no ser extraditados o condenados a penas mayores en razón de las atrocidades cometidas, y de sus vínculos con el narcotráfico.

En diciembre de 2002, las AUC anuncian un cese al fuego unilateral. En respuesta, Uribe conforma una comisión exploratoria, y se define una posible agenda de negociación. Tras varios meses de conversaciones en los campamentos del Alto Sinú -noroeste de Colombia- se le recomienda al gobierno de Uribe continuar con un proceso de negociación, concentrar las fuerzas de las autodefensas para garantizar una verificación del cese al fuego, y la definición de mecanismos judiciales que allanen el camino de la paz. De acuerdo con estas pautas, el 15 de julio de 2003 el Alto Comisionado para la Paz y el Estado Mayor de las AUC firman el acuerdo de Santa Fe de Rialito, en el que se estipulan los pasos a seguir en el proceso de movilización. Paradójicamente, con la adopción de un modelo de negociación parcial con un actor armado ilegal, Uribe mantiene una continuidad con el anterior gobierno de Andrés Pastrana y los que le antecedieron a partir de los años ochenta, en los intentos de negociación con grupos armados ilegales.

Pero tampoco este proceso logra generar un consenso a nivel interno y en la comunidad internacional, ante las críticas formuladas por sectores de opinión frente a un proceso de negociación que, entre otras falencias, no cuenta con un marco jurídico como garantía de no-impunidad, y de aplicación de los criterios de verdad, justicia y reparación a las víctimas. En el momento de elaboración de este ensayo, hay expectativa por la presentación de una nueva versión de un proyecto de alternatividad penal, cuya discusión y aprobación tendrá incidencia decisiva en el carácter y el rumbo de la negociación con las autodefensas, y sentará un precedente para posteriores negociaciones con la insurgencia.

EL ORIENTE ANTIOQUEÑO

Las dinámicas de la guerra y la paz no responden a un patrón único, y presentan importantes variaciones en relación con particularidades regionales y locales, en correspondencia con su propia historia y sus particularidades sociales, culturales, institucionales y políticas. Por ello

considero conveniente la referencia a algunos de estos aspectos, con énfasis en las dinámicas recientes, que ayudan a la comprensión de las circunstancias en las cuales se generan las experiencias de resistencia civil y de participación democrática.

El Oriente Antioqueño pertenece al departamento de Antioquia, una de las regiones más integradas a la nación¹⁴. A ello contribuye su ubicación geográfica en el eje andino, la variedad de actividades económicas (minería, industria, comercio, producción cafetera), el importante papel de partidos políticos, la Iglesia Católica y las élites locales en la construcción de un proyecto de cohesión de la región, asociado a la llamada “antioqueñidad”. Este proyecto está basado en la adopción de valores y prácticas afincadas en el trabajo material como regenerador de costumbres y como vía para el enriquecimiento, a la familia monogámica como paradigma del orden social, la frugalidad en los modos de vida, y una predicación religiosa que refuerza el modelo de control (Uribe, 1999).

Los vínculos familiares han sido claves en la construcción de redes sociales y parentales -que han servido de soporte al funcionamiento de organizaciones sociales y de las redes clientelistas-, y de diversas formas de solidaridad entre la población civil, en particular con las gentes que se han visto forzadas a desplazarse.

Aunque el Oriente Antioqueño se consolida como la región más representativa del modelo de la antioqueñidad, esto corresponde a una parte del territorio, lo cual ha incidido en la segregación de zonas más alejadas del centro, y en desigualdades económicas y sociales que con el transcurso del tiempo se han acentuado.

El Oriente antioqueño está situado entre el Valle de Aburrá (donde se localiza Medellín, la capital del departamento), y la llanura aluvial del río Magdalena por donde transita, de sur a norte, la arteria fluvial más importante del país. Abarca una extensión de siete mil veintiún km² (11% del territorio del departamento); su relieve y clima varían, desde vertientes cálidas y húmedas hasta altiplanos y vertientes frías, con alturas que llegan a los 3.350 mts. sobre el nivel del mar. Esto le confiere un valor importante en riqueza y diversidad de recursos naturales.

14 Esta referencia a la existencia de territorios incluidos, tiene que ver con el proceso histórico de construcción de la nación que ha dado lugar a la conformación de una franja de regiones en donde se ha logrado una mayor presencia de los poderes institucionales, y funcionamiento de referentes simbólicos comunes de pertenencia a la nación, formas de representación e identidades colectivas, en contrapunto con territorios que escapan a estos controles y en donde operan otros mecanismos de dominación y referentes de pertenencia (Uribe, 2003). Sin embargo, no se trata de realidades contrapuestas, pues como lo ha demostrado la generalización del conflicto armado en el momento presente, muchos problemas que se consideraban propios de la frontera hoy lo son también del centro.

Tiene una población estimada de 591.516 habitantes; de los cuales el 56.17% (332.235 habitantes) vive en las cabeceras y el 43.83% (259.281 habitantes) en las áreas rurales (Iner, 2001). En esa vasta porción espacial se han conformado distintas territorialidades, merced a la diversidad de grupos culturales que a lo largo de la historia han plasmado sus marcas, y han construido significados diversos de región.

En su configuración como región tiene que ver la competencia entre sus dos ciudades mas importantes, Marinilla (fundada en 1690) y Rionegro (fundado en 1663), con simpatías políticas contrarias (conservadora y liberal, respectivamente) manifiestas con ahínco en el siglo XIX (Corporación Desarrollo para la Paz, 2001). Estas simpatías fueron muy propias del peso diferencial que tenía la aceptación del modelo español, y las formas de colonización y ocupación de las tierras baldías. Marinilla, por ejemplo, se caracterizó por el gran latifundio, y Rionegro, por la generación de importantes volúmenes de producción agropecuaria, actividades mineras y comerciales. De estos centros partieron colonizadores hacia otros puntos de esta vasta región, convirtiéndose en los fundadores de otros municipios que forman parte de la región, y que han sido los más afectadas por el conflicto armado.

El Oriente Antioqueño está conformado por veintitrés municipios, agrupados en cuatro subregiones según algunos patrones semejantes derivados de su constitución histórica, dinámicas socio-económicas, físico-naturales, organizativas e, incluso, vecinales. A pesar de lo artificioso de su delimitación, estas divisiones se han mantenido por cuestiones de planeación, asociación, agrupación, y también como instrumento para la intervención del territorio (Corporación Desarrollo para la Paz, 2001).

La zona mas integrada al centro es el Altiplano: está conformada por Rionegro, la ciudad intermedia más importante de Antioquia, y los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión y San Vicente, con una población de 354.682 habitantes (59.96% del total regional). Allí se concentra casi la totalidad de la actividad industrial resultado de la expansión de Medellín durante la segunda mitad del siglo XX, cuando se instalaron empresas relacionadas con químicos, cauchos, alimentos, papel, metalmecánica, además del desarrollo de la agroindustria de exportación, los adelantos en los niveles de tecnificación pecuaria, la producción agrícola campesina variada y los servicios comerciales, turísticos y financieros. Tiene una densidad promedio de 193,81 habitantes/km², muy superior al promedio departamental de 73,46 hab/km². En esta zona nacen los ríos que abastecen el sistema de embalses. Tiene un gran potencial turístico, y las fincas de recreo ocupan cada vez más áreas de producción campe-

sina, con suelos cuyo potencial agrícola ha permitido considerarlos la huerta del Área Metropolitana de Medellín (Esap, 2000).

La zona de embalses la conforman los municipios de El Peñol, Guatapé, San Carlos, San Rafael, Granada, Concepción y Alejandría, con 86.618 habitantes (Esap, 2000) 14.64% del total regional. Esta subregión se configuró merced a la presión por la tierra y a la expansión de la frontera económica de Rionegro y Marinilla, fortalecidos como centros de poder, así como a la búsqueda de rutas comerciales hacia el río navegable del Magdalena. Parte de ella está en la vertiente (cordillera central hacia el Magdalena), lo que la hace rica en aguas para la producción de energía eléctrica. Allí se concentran el mayor número de centrales del país, en total, unas seis: represa de El Nare (2 etapas), San Carlos, y otras cuatro menores (Tafetanes, Calderas, Playas y Jaguas). Instalar este complejo significó inundar las mejores tierras agrícolas, propiciar el decaimiento de la actividad agropecuaria del minifundio campesino, y un auge de la actividad turística, hoy en vilo por el conflicto armado que ha forzado los desplazamientos de pobladores, el abandono de parcelas cultivables y el golpe sistemático a la infraestructura energética. Después del altiplano, es la segunda zona en densidad poblacional (53,50 hab/km²).

La zona de bosques la conforman los municipios de San Luís, Cocorná y San Francisco, con 50.015 habitantes (8.46%), el menor porcentaje poblacional (Esap, 2000). Esta subregión fue lugar de refugio de indios, negros libres, algunos mineros, cuadrillas de esclavos y libres sin tierra, pobladores que distribuidos en un vasto espacio no tendrían presencia del Estado sino dos siglos después. Es también rica en recursos naturales; sus pobladores combinan actividades agrícolas de autoconsumo, extractivas del bosque y comercio informal en la autópista Medellín–Bogotá.

Con las expectativas generadas por la construcción de la autópista se iniciaron grandes inversiones en tierras hacia la zona del Magdalena Medio antioqueño, con dineros del narcotráfico. Por conservar su carácter de refugio, esta subregión fue escogida por los grupos armados ilegales, no sólo por las condiciones estratégicas que representa, sino por los antecedentes de ausencia del Estado, factor determinante para que se convierta en una de las más críticas en cuestiones de seguridad del departamento de Antioquia (Corporación Desarrollo para la Paz, 2001). Aquí se instalarán diversos grupos de autodefensas en la década de los ochenta, y desde allí comenzará una disputa territorial por la región del Oriente con los grupos guerrilleros, las FARC y el ELN. Como en el resto de la región, la confrontación militar de los últimos años ha impactado negativamente en las actividades productivas.

De la zona del páramo hacen parte los municipios de Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño, con un total de 100.201 habitantes, que corresponden al 16.94% de la región (Esap, 2000). Su configuración comienza con la apertura de frentes de colonización para liberar la presión por la tierra del altiplano, a finales del siglo XVIII. Fueron concesiones de tierra otorgadas a miembros de las élites antioqueñas que amplían sus fronteras de acción económica y política. Sonsón se convierte en el centro de la subregión a fines del siglo XIX, por haberse conectado con la capital por el camino de Mariquita, y haber estimulado la acumulación de riquezas provenientes del comercio y de la colonización que partió de esta zona hacia el sur del país. Dichos capitales permitieron crear unas cuantas industrias locales de importancia a inicios del siglo XX, las que luego se trasladan a Medellín al perder relevancia el camino a la capital, y al volverse importante la zona del Nus (región Nordeste) con la construcción del ferrocarril desde Medellín hasta el río Magdalena.

Hoy es la zona menos articulada al resto de la región del Oriente Antioqueño, pero conserva su riqueza en recursos naturales, una gran extensión en zonas de reserva, una alta proporción de bosques no intervenidos, ecosistemas estratégicos potenciales para el desarrollo de economías alternativas con los modelos de aprovechamiento sostenible, y un gran potencial agrícola representado en cultivos de café, panela, papa, frijol, maíz, frutales, ganado de leche, atendidos por una población eminentemente rural, pero con unos mínimos niveles de desarrollo vial y de servicios. Desde finales de los años noventa se ha visto afectada duramente por el conflicto armado, debido a su ubicación estratégica y por los cultivos de coca y amapola.

Estas dos últimas zonas presentan condiciones de vida inferiores a las de la zona del altiplano, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro No 1
Indicadores demográficos y sociales de los municipios del Oriente

Municipio	Población			NBI % *	Miseria% **	ICV***
	Urbana	Rural	Total			
Abejorral	6840	19075	25915	43.6	15.2	54.5
Alejandro	2547	3397	5944	56.5	28.9	54.0
Argelia	3710	9269	12979	59.9	33.6	47.2
Carmen de Viboral	16847	28699	45546	35.4	12.1	68.2
Cocorná	5636	17126	22762	62.1	33.4	49.0
Concepción	1519	5040	6559	51.7	23.2	52.2
El Peñol	7657	10539	18196	32.9	9.3	65.9
El Retiro	6774	10851	17625	25.9	6.2	69.9

Municipio	Población			NBI % *	Miseria%**	ICV***
	Urbana	Rural	Total			
El Santuario	16494	14720	31214	31.7	9.3	70.2
Granada	4848	12678	17526	46.0	15.3	59.7
Guarne	14922	19782	34704	35.9	10.2	66.5
Guatapé	6227	2783	9060	26.6	5.5	71.5
La Ceja	32419	14523	46942	20.5	3.6	73.6
La Unión	7825	11768	19593	28.5	7.6	68.7
Marinilla	25281	16654	41935	29.4	8.5	72.0
Nariño	2637	12769	15406	50.0	20.2	49.0
Rionegro	59797	31189	90986	17.6	2.9	78.0
San Carlos	6654	14583	21237	53.6	25.0	57.2
San Francisco	1556	8720	10276	76.6	51.7	38.2
San Luis	6461	10516	16977	58.2	32.2	54.0
San Rafael	5956	14643	20599	57.8	31.2	54.9
San Vicente	3206	22931	26137	56.3	26.8	50.3
Sonsón	17484	28417	45901	34.9	11.4	61.9

Fuente: INER. Plan Decenal de Inserción de la Universidad de Antioquia en las Regiones. Región Oriente Antioqueño. Universidad de Antioquia. Medellín, 2001. P. 97.

*NBI: Necesidades básicas insatisfechas. Son pobres aquellos hogares o personas que tienen al menos una de las siguientes características: vivienda inadecuadas, vivienda sin servicios, hacinamiento crítico, inasistencia escolar o alta dependencia económica.

**Miseria: Hogares o personas con más de una de las características del NBI.

***ICV: Pondera el bienestar de acuerdo con factores como el nivel educativo, el desarrollo del capital humano, la calidad de la vivienda, el acceso y la calidad de los servicios públicos, entre los más importantes. Mientras más se aproxime a 100 mejor es la calidad de vida.

El desarrollo desigual de los municipios que forman parte del Oriente Antioqueño no solo tiene que ver con el proceso histórico de conformación de la región, sino también con tendencias recientes. A partir de la década de los años sesenta, esta región sufre un proceso de expansión de las principales industrias de Medellín, debido a un problema de “deseconomías de aglomeración” (Sáenz, 1986: 44) en la capital del departamento; es decir, Medellín quiso resolver en Oriente un obstáculo para su proceso de desarrollo capitalista. El impacto de esta expansión se traduce en el surgimiento de procesos de industrialización, transformación de la estructura agraria, urbanización y la construcción de infraestructura vial y energética; procesos que, en conjunto, estimulan la migración de población rural a las cabeceras municipales en busca de fortuna, o la oferta de parcelas campesinas que se convierten en zonas industriales, residenciales, recreativas, o vías de comunicación.

La descomposición parcial del sistema de explotación campesino de la tierra, y la recomposición de su tenencia y uso en función del

mercado capitalista, son parte de una tendencia que se pronuncia con la construcción de grandes obras de infraestructura desde la década de los setenta: seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas), que generan el 29% de la producción nacional y el 73% del total departamental (ESAP, 2000).

En los perjuicios causados a la región y a la población con las construcciones de centrales hidroeléctricas que han dejado graves daños ambientales y el despojo a los campesinos de tierras cultivables sin el debido resarcimiento, y en la incidencia que ello ha tenido en el movimiento social, hay importantes similitudes con Chiapas, la principal región productora de energía eléctrica en México, y con las luchas en contra de la privatización de los servicios públicos en los años noventa, en Argentina, Perú, Bolivia y Venezuela (Amin, 2003).

Para favorecer el desarrollo industrial se construye una vía rápida que mejora la comunicación entre la región con la capital de la república. La autopista Medellín-Bogotá, atraviesa el Oriente Antioqueño por todo el centro en dirección occidente-oriente, dividiéndola en partes iguales y, aunque jamás se pensó para facilitar la comunicación entre diferentes zonas, comunica el altiplano con la zona de bosques, y descende hasta la planicie del Magdalena Medio. Esta vía se convertirá luego en un blanco de las acciones de los grupos guerrilleros, y para el desplazamiento de población.

Para mejorar la entrada y salida de insumos y de productos hacia el mercado nacional e internacional, se construye el aeropuerto José María Córdoba en el municipio de Rionegro, y una zona franca para fortalecer el desarrollo industrial, por las preferencias arancelarias para facilitar la exportación de los productos de la región.

La realización de estos proyectos, con sus consecuentes cambios en los usos del espacio, ha sido el fruto de una valoración muy instrumental de la región, por su importante ubicación geoestratégica como corredor entre las cordilleras central y oriental del país, así como por su enorme potencial en cuanto a recursos naturales.

Estas transformaciones producen cambios culturales significativos, que en muchos casos confrontan esquemas mentales tradicionales, incidiendo en una crisis de los poderes locales y los vínculos sociales fundamentados en la familia y en el arraigo al terruño. La inundación de territorios para la construcción de las represas hidroeléctricas afecta a la producción agrícola de minifundio, y obliga al traslado de poblaciones enteras y el desplazamiento de población hacia las cabeceras municipales, convertidas en lugares de recepción de gente que acude en busca de empleo. Estos cambios en la composición demográfica de la población favorecen la adopción de estilos de vida más urbanos, con un impacto entre la población joven. Ya para 1997, por ejemplo, la mi-

tad de la población de la zona de embalses se concentra en los cascos urbanos, y de ellos el 49,07% corresponde a jóvenes con diecisiete años de edad, seguido por un grupo de edad entre los doce y los diecisiete años (Iner, 2001).

EL MOVIMIENTO CÍVICO

La forma cómo se llevó a cabo la industrialización y la urbanización, cómo se transformó la estructura agraria, cómo se decidió la construcción de grandes obras de infraestructura y se planificó la región, fueron factores que desembocaron en la movilización cívica en el Oriente Antioqueño desde los años sesenta. En comparación con el resto del departamento, la acción colectiva de la región se evidencia en que, de veinticuatro paros cívicos realizados en Antioquia entre 1960 y 1982, diecisiete fueron en esta región. Esto expresa una tradición y experiencia de movilización y organización nada despreciable, que llevó a considerar a la región como vanguardia en temas de participación (Sáenz, 1986). A pesar de ser una región relativamente industrializada, la participación de las organizaciones sindicales fue escasa. Prácticamente la dirigencia de los movimientos cívicos recae, en la mayoría de las poblaciones, sobre pequeños comerciantes, profesionales, estudiantes, y una buena parte de la base que se moviliza son sectores campesinos (Sáenz, 1986).

Las motivaciones para las movilizaciones se dan básicamente por hechos de impacto en la vida cotidiana, y por esto la protesta se hace en el ámbito local. Sin embargo, los movimientos de pobladores logran establecer nexos esporádicos y coyunturales entre diversos municipios y sectores sociales de distinto carácter para unirse en sus demandas ciudadanas. Se pasa del paro cívico local al paro cívico regional, con un embrionario concepto territorial, unas formas organizativas renovadas para la acción, y unas demandas sociales que desbordan la estructura local.

El auge de los movimientos cívicos se entiende por la afectación de intereses locales. La riqueza en recursos hídricos de la región le habían permitido a la mayoría de sus habitantes resolver el abastecimiento de energía eléctrica desde los años cincuenta, con pequeñas plantas de energía hidráulica manejadas por sus administraciones municipales (Sáenz, 1986: 45). Pero estas empresas fueron absorbidas y controladas por una nueva entidad de carácter departamental. Esto fue apreciado por algunos grupos de poder local como una pérdida de autonomía de la región frente al poder central.

El movimiento cívico del Oriente se plantea en oposición a la empresa departamental, y en demanda por una disminución en las tarifas de energía. La población se resiste a aceptar el pago de altas tarifas (con

aumentos hasta de un 200%) en el momento en que se convierte en la principal generadora de energía del país, y que han tenido que sufrir el impacto ecológico y social de la implantación de las centrales (Arcila, 1986:53).

Al no haber respuestas favorables de las instancias gubernamentales, ni tener intermediarios políticos de la región con injerencia en el ámbito departamental y nacional que atendieran sus demandas, los pobladores buscan nuevas formas de participar y protestar por fuera de las estrictamente político-partidistas. Apelan a los paros cívicos y a otras formas de presión, tan variadas como la creatividad de los pobladores. En 1963, en la zona del altiplano, los habitantes de Marinilla y Rionegro realizan el primer paro en contra de la Empresa Departamental Electrificadora de Antioquia (EADE) por el alza de tarifas de energía. Ambos municipios forman juntas cívicas o juntas pro defensa del pueblo “porque los movimientos cívicos son de resistencia, de defensa de la gente que se ha sentido agredida y lo que hace es defenderse y responder” (Sáenz, 1986: 48-49). En 1965, los habitantes de Sonsón constituyen su junta pro-defensa de la autonomía municipal contra Acuantioquia, y así sucesivamente se generaliza en la región la reacción contra los institutos descentralizados o entidades del gobierno departamental que asumen el control de los municipios, en detrimento de la autonomía de las localidades.

Al problema de las tarifas se suma el del mal manejo de las directivas de las Empresas Públicas de Medellín con respecto a las comunidades. En la zona de embalses se dieron fuertes movilizaciones, concretamente en los municipios de El Peñol y Guatapé en los años 1968, 1969 y 1970, para exigir indemnizaciones por la construcción de la represa, pagos justos por la tierra, e instalación de servicios públicos. En 1978, para exigir la construcción del nuevo pueblo de El Peñol, pues Empresas Públicas de Medellín pretendía indemnizar a todos los pobladores (con los montos que ella consideraba justos) para que dejaran la tierra y buscaran su propia solución. El movimiento exigió una solución colectiva, en sus tierras, al lado de las ruinas del antiguo y sepulto pueblo del viejo Peñol. Este movimiento logró su objetivo.

En 1972, un movimiento de carácter regional une a los pobladores de las zonas por donde transita la autopista en contra de la valorización que se pretendía cobrar a los campesinos situados a lado y lado de la nueva vía. Los montos cobrados crearon una situación paradójica, pues los campesinos tenían que vender sus parcelas para pagar la valorización de una tierra que perderían. Ese movimiento hace que el Ministerio de Transporte replantee la medida. Con el tema de la energía (alzas de tarifas y mal servicio) las soluciones siempre son coyunturales, así que el movimiento resurge de tanto en tanto, para buscar soluciones de fondo. Por esa razón se consolida un movimiento regional

contra la Electrificadora de Antioquia que entre 1981 y 1986 realiza tres paros regionales en diecisiete de los veintidós municipios (Sáenz, 1986: 49). Esto sirve de ejemplo a todas las localidades, que ven en la protesta, la movilización y los paros, medios de presión para obtener la dotación de aulas escolares, para mejorar el transporte veredal, y evitar el cobro de determinados impuestos.

Los paros cívicos regionales de los años ochenta están antecedidos de asambleas locales, asambleas regionales o marchas en los municipios. A veces los poderes locales se sienten desplazados por los movimientos cívicos, lo que genera un ambiente tenso entre la población y las administraciones municipales, presionadas desde la capital para guardar el orden en los municipios y desactivar la participación local en las movilizaciones regionales. Por esto, se dan confrontaciones entre el movimiento y el poder local: “Los alcaldes han tenido un papel de agentes de represión ordenada desde el centro. Se han colocado en un lugar subalterno frente a las fuerzas del Ejército. En cuanto a los concejos municipales, muchas veces dicen reconocer la justeza de los reclamos, pero su papel ha fluctuado entre el alineamiento incondicional con el gobierno y las fuerzas represivas o su marginamiento total e incapacidad manifiesta de terciar a favor de los usuarios” (Arcila, 1986:55).

El movimiento cívico se va extendiendo poco a poco en los diversos municipios de la región: “se fueron realizando asambleas, se constituyeron juntas cívicas y se fue decretando, en forma generalizada, el no pago de las cuentas de energía; al mismo tiempo se fueron integrando brigadas de reconexión y se impidió, gracias a la fuerza de las masas, el corte masivo del servicio” (Arcila, 1986: 54). Por estas acciones, se da una fuerte represión al movimiento regional y a sus brazos locales, y a pesar de que sigue vigente el tema de las tarifas -el más crítico y más aglutinador- el movimiento cívico desaparece, porque lo que comienza con represión, detención a los miembros de la Juntas Cívicas, amenazas a sus dirigentes, termina con el asesinato y desaparición de los líderes a lo largo y ancho de la región.

En el transcurso de los años ochenta, y en aquellos municipios que fueron el epicentro del movimiento cívico, se produce la muerte de líderes cívicos, simpatizantes de la Unión Patriótica y concejales de los Partidos Liberal y Conservador y jóvenes, también de la población, son objeto de amenazas. Aunque se difunde la idea de que los responsables son personas desconocidas, las gentes coinciden en señalar a las auto-defensas que operan bajo el mando de Ramón Isaza, jefe de las Autodefensas del Magdalena Medio, y de la misma fuerza pública que actúa de manera encubierta (Instituto de Estudios Políticos, 2001).

El último sobreviviente de esta generación de líderes cívicos, Ramón Emilio Arcila, candidato a la alcaldía de Marinilla, fue ase-

sinado el 31 de diciembre de 1989 en una heladería en el parque principal de esta localidad. A raíz de este atentado, el comercio y la ciudadanía declararon un paro cívico de setenta y dos horas, durante el cual se denunció la existencia de una lista de amenazados por un grupo de desconocidos.

Transcurridos algo más de dos décadas después de este período de movilización social, se mantiene un sentimiento de inconformidad con los altos costos de las tarifas de energía. A ello se suma la inconformidad con los elevados costos del impuesto de valorización, la preocupación por el deterioro al medio ambiente causados por la deforestación de las zonas de selva con la explotación de la madera, y la concentración de la propiedad territorial, que ha ocasionado el empobrecimiento de pequeños y medianos propietarios.

En opinión de líderes sociales con los que he establecido contacto, las empresas privadas que tienen asiento en la zona del altiplano no han hecho una inversión social que compense los perjuicios que se han sufrido en las poblaciones afectadas por la construcción de obras de desarrollo, y por el conflicto armado. Aunque reconocen que entidades como ISA e ISAGEN han apoyado el Programa de Desarrollo y Paz (Prodepaz) y proyectos de desarrollo, consideran que falta mucho para saldar la deuda histórica contraída con el Oriente Antioqueño.

LA POLÍTICA PARTIDISTA

En el Oriente Antioqueño, los partidos tradicionales han sido un referente para los grupos de poder y sectores de la población. Las redes clientelistas encuentran un asidero en vínculos de orden familiar y vecinal; los apellidos del candidato son una importante carta de presentación ante los electores. Además ha sido de mucho peso el papel de la Iglesia Católica, con su favoritismo por los candidatos del Partido Conservador. En época de las elecciones y hasta bien entrado el siglo XX, no era necesario hacer mucho proselitismo, era suficiente contar con la buena voluntad del párroco y de cuatro o cinco notables para obtener una votación adecuada (Melo, 1989).

El Oriente Antioqueño se ha distinguido por un predominio del Partido Conservador, a excepción de Rionegro, un bastión del liberalismo. Los votos conservadores fueron decisivos para hacer contrapeso a la influencia del partido liberal en otras subregiones del departamento. Hay que advertir que, no obstante la competencia entre ambos partidos, en Antioquia y a diferencia de otras regiones del país se mantuvo una paz electoral y política gracias a los acuerdos entre las élites políticas regionales, aunque en la época de la violencia de mediados de siglo XX, no se logra mantener este clima de entendimiento.

Durante la vigencia del Frente Nacional (1958-1978), que asegura la repartición del poder entre liberales y conservadores, se produce una pérdida de credibilidad en los partidos tradicionales, un aumento del abstencionismo, y algunas simpatías por corrientes de oposición, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) y el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Pero el factor que en mayor medida favorece una pluralización política son los procesos de descentralización político-administrativa, que abren posibilidades de participación de la gente en la vida local y una apertura política que le da un mayor juego a entidades regionales y locales, y permite la elección popular de sus mandatarios. Aunque la resultante es una transferencia de competencias desde el nivel central, sin las posibilidades de que dichos mandatarios intervengan en las esferas de decisión -que continúan centralizadas-, se alteran de alguna manera las formas tradicionales para la distribución del poder, con la elección popular de los mandatarios locales, y en un impulso a prácticas de participación ciudadana.

En el Oriente Antioqueño estas tendencias renovadoras tienen una expresión en lo cívico como opción alternativa al clientelismo tradicional, asociado a los candidatos liberales y conservadores. En 1988 llega a la alcaldía del municipio del Peñol un representante del movimiento cívico Acción Peñolita, un hecho sin precedentes en la historia política de ésta región.

Cuadro N° 2
**Tendencias hacia la pluralización partidista del
Oriente antioqueño, 1988-2000**

Períodos	Conservador		Liberal		Coalición		Movimiento Cívico	
	N° de alcaldes	%	N° de alcaldes	%	N° de alcaldes	%	N° de alcaldes	%
1988-1990	17	73.9	3	13.0	1	4.3	2	8.7
1990-1992	16	69.6	5	21.7	1	4.3	1	4.3
1992-1995	17	73.9	6	26.1	-	0	-	0
1995-1998	15	65.2	5	21.7	2	8.7	1	4.3
1998-2000	13	56.5	5	21.7	3	13.0	2	8.7
Total	78	67.8	24	20.9	7	6.1	6	5.2

Fuente: ESAP. El Impacto de la descentralización en los municipios del departamento de Antioquia. Subregión Oriente. Tomo III. Medellín, 2000. P. 132.



Aunque, como se puede apreciar en el anterior cuadro, la presencia de los movimientos cívicos no conlleva un cambio fundamental en el predominio bipartidista, la misma fue vista como una amenaza para el mantenimiento de los poderes locales, agenciados por jefes políticos que recurren a la violencia como el recurso más expedito para eliminar a quienes no estaban sometidos a su control. Entre los líderes asesinados en el marco de la “guerra sucia” a la que se hizo alusión se cuentan militantes de la Unión Nacional de Oposición promovida por el Partido Comunista¹⁵. Pero este momento coincide con un proceso de expansión de la guerrilla.

EL CONFLICTO ARMADO

El proceso de inserción de la guerrilla en el Oriente Antioqueño se remonta a los años ochenta, con la tentativa del ELN de impulso a un mo-

¹⁵ De todas formas lo cívico mantiene su vigencia como manera de hacer visible una diferencia con el estilo tradicional de hacer política y de defensa de los intereses comunes a los habitantes de los municipios, aunque ello se ha convertido en rasgo común de los candidatos, tanto de los partidos Liberal y Conservador, como de fuerzas independientes.

delo societal¹⁶ apoyado en la creación de una base campesina liderada por los hermanos Carlos y Alirio Buitrago y por un sacerdote católico, Bernardo López Arroyave, en zona rural de San Luis y Cocorná. Pero este intento se frustra ante el asesinato de estos dirigentes por cuenta de grupos de autodefensa, que desde los años ochenta se desplazan desde el Magdalena Medio hacia estos municipios para impedir la presencia de la guerrilla.

El ELN se repone de este revés, y desarrolla una estrategia de expansión hacia la zona de embalses (Granada, San Carlos, Peñol, Guatapé, San Rafael), y zona de bosques (San Luis, Cocorná, San Francisco); ubicándose en una posición privilegiada para perpetrar acciones militares en la autopista Medellín-Bogotá (retenes, quema de vehículos), el cobro de extorsión a las empresas localizadas en esta área, y la voladura de torres de energía eléctrica.

Por su parte, las FARC avanzan en un proceso de expansión que se había iniciado con su inserción en la zona de embalses (San Carlos, San Rafael), y continua hacia los municipios de San Francisco, Cocorná y San Luis, y hacia la zona del páramo, de importancia estratégica para el control de los cultivos de coca, y el control de un camino que comunica con el departamento de Caldas y con la zona del altiplano (Iner, 2001).

Además de la guerrilla, en estas zonas hacen presencia narcotraficantes, como Pablo Escobar, con la compra de tierras y el grupo autodefensas bajo el mando de Ramón Isaza, responsable de numerosas masacres y acciones de “limpieza” contra supuestos auxiliadores y de la subversión y de hacerle frente al dominio establecido por las FARC sobre el Magdalena Medio, subregión limítrofe con el Oriente¹⁷.

El accionar de las autodefensas en el Oriente Antioqueño cobra una nueva dimensión en los años noventa, con el proceso de constitución de las autodefensas como fuerza nacional en condiciones de disputarles a las FARC el control que venían ejerciendo en diversas zonas del país. Bajo el mando de Carlos Castaño, las AUC diseñan un plan estratégico para asegurar el control del Oriente Antioqueño, que se em-

16 Lo societal alude a la existencia de una guerrilla que le asigna un peso importante a la acción política en el marco de su estrategia, y a la construcción de una legitimidad basada en las relaciones establecidas con la población y con el territorio (Pizarro, 1992).

17 En su discurso ante el Congreso de la República el 28 de julio de 2004, apenas recién iniciado el proceso de negociación con las autodefensas en Santa Fe de Rialito, se presenta como un campesino honrado y trabajador que se vio obligado a responderle a la guerrilla que amenazaba con arrebatarle lo que con tanto esfuerzo habían logrado conseguir, y después de haber fracasado en sus intentos de protección por parte de las Fuerzas Armadas, hasta que recibió el apoyo de oficiales del Ejército que le proporcionaron las primeras escopetas (Isaza, 2004).

pieza a cumplir con la masacre de catorce campesinos en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral, y continúa en otras veredas localizadas en la zona de embalses (Granada, San Carlos y San Rafael), lo cual obliga al desplazamiento de numerosas familias, y a un repliegue de la guerrilla¹⁸.

La transformación de esta importante región en un territorio arduamente disputado por guerrilla, autodefensas y ejército convierte a la población civil en blanco de sus acciones, y agrava el flujo de población desplazada hacia las cabeceras municipales, entre los que se cuentan los municipios de San Luis, San Carlos, San Francisco, Cocorná, Argelia, Sonsón y Nariño. Según los datos aproximativos de la Red de Solidaridad, estos municipios ocupan un lugar destacado a escala nacional como expulsores y receptores de población desplazada¹⁹.

Al finalizar la década de 1990 (gobierno del presidente Ernesto Samper) la guerrilla retoma la iniciativa y vuelve a dar muestras de su capacidad militar en lo nacional, al infligir golpes a la fuerza pública en el sur del país y en el Oriente Antioqueño, en donde lleva a cabo tomas guerrilleras en San Francisco, Cocorná, San Luis, San Carlos, Nariño, Argelia y Granada, el asesinato de funcionarios públicos, y amenazas a los aspirantes a los cargos de alcaldes y concejales, y a los votantes.

Para garantizar la realización de las elecciones, el gobierno de Ernesto Samper solicita el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) como instancia supervisora. Pero el ELN burla los controles establecidos y secuestra a los veedores en la vía que comunica a Granada y San Carlos. Este hecho obliga a la gobernación de Antioquia a adelantar una gestión de mediación con la intervención de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Conciliación en Antioquia (entidad constituida por reconocidas personalidades para favorecer el proceso de diálogo y búsqueda de la paz con actores armados ilegales), hasta lograr la liberación de todos los funcionarios secuestrados. Poco después, las AUC llevan a cabo varias masacres en represalia contra la población señalada de haber colaborado con la guerrilla.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Oriente Antioqueño consolida su importancia como escenario en donde cada uno de los

¹⁸ Vereda es una categoría que corresponde a una división de carácter administrativo-territorial. Colombia se halla subdividida en 32 departamentos y en 1098 municipios los cuales a su vez se subdividen en corregimientos y en veredas que es la unidad básica. La sumatoria de varias veredas da lugar a un corregimiento.

¹⁹ Desde 1995 y hasta el 15 de marzo de 2004 las cifras de personas que han llegado desplazadas y las que han salido son respectivamente: 3.695 personas y 14.222 en San Carlos; 3.037 y 8.429 en San Francisco; 8.623 y 10.796 en San Luis; 2.699 y 7.792 en Cocorná; 550 y 2.205 en Sonsón; 553 y 9.883 en Argelia; y 352 y 1.712 en Nariño. Por su parte Rionegro ha recibido a 3.217 desplazados y 665 hogares (Presidencia de la República, 2004a).

actores miden fuerzas e intenta ampliar sus posibilidades de control sobre la población civil, ejercer presión sobre el gobierno nacional, y llamar la atención de los medios de comunicación.

Mientras que los frentes Carlos Alirio Buitrago y el bloque José María Córdoba llevan a cabo atentados contra la infraestructura, las AUC intensifican sus actuaciones en contra de la población civil, especialmente a partir la negativa del gobierno nacional para establecer un proceso de negociación. A fines de 1998, las AUC realizan una serie de masacres que obligan al desplazamiento de los habitantes de varios municipios. También recurren al secuestro de la senadora liberal antioqueña Piedad Córdoba, para insistir en el otorgamiento de estatus político, la apertura de negociaciones con ellos, y la exclusión del tema del paramilitarismo en la agenda a pactar entre el gobierno y las FARC.

En repuesta al sabotaje de la AUC a la petición del ELN de una zona de conciliación en el Magdalena Medio, este grupo movilizó a sus frentes más activos, el Domingo Laín en el Arauca, y el Carlos Alirio Buitrago en el Oriente Antioqueño. El 5 abril de 1999 un carro bomba destruye la estación de policía y más de un centenar de edificaciones aledañas en la cabecera del municipio de San Francisco. Seguidamente cometen varios atentados contra las torres de energía, y bloqueos a la autopista Medellín-Bogotá; esta vez con la intención de presionar al gobierno nacional para una reanudación de los diálogos suspendidos con motivo del secuestro de una avioneta que realizaba un vuelo comercial entre Bucaramanga y Bogotá.

A pesar de estas demostraciones de fuerza en el Oriente Antioqueño, el ELN se encuentra debilitado, debido al copamiento por parte de las FARC de sus áreas de operaciones -como en la autopista Medellín- Bogotá-, y el asesinato de varios integrantes del frente Carlos Alirio Buitrago²⁰. A raíz de estos hechos el ELN advierte que por ningún motivo permitirán que “las áreas estratégicas del Oriente Antioqueño en las cuales tenemos amplio respaldo social y campesino, sean arrebatadas por organizaciones sin fundamento histórico” (Periódico El Colombiano, Medellín, 7 de marzo de 2000).

Con el propósito de sabotear cierta aproximación entre el gobierno de Pastrana y el ELN para el establecimiento de una zona de conciliación, las AUC secuestran al hermano de un influyente diputado conservador de Antioquia, uno de los negociadores del gobierno. De igual manera proceden en noviembre de 2000, con el secuestro de siete

20 Cabe señalar que en el trasfondo de las disputas entre ambas agrupaciones en el Oriente Antioqueño están las visiones que en relación con su proceso de inserción se construyen sobre la región, sobre su financiación mediante los cultivos de uso ilícito, y su disposición para establecer diálogos con la población en aras a la realización de acuerdos humanitarios.

congresistas. Pero en esta ocasión la gestión de mediación que adelantan importantes miembros del gobierno para lograr su liberación genera una enérgica respuesta por parte de las FARC, con las tomas guerrilleras de Granada y San Luis.

En medio de este forcejeo se produce un hecho que va a tener una particular significación en el Oriente Antioqueño: un acuerdo humanitario para la liberación, en los municipios de Granada (vereda Santa Ana) y en Urrao (suroeste antioqueño), de cuarenta y tres uniformados secuestrados por las FARC en anteriores tomas guerrilleras realizadas en Granada Cocorná, San Luis y Nariño. Este logro le permite al gobierno nacional contrarrestar un ambiente de escepticismo sobre las posibilidades de una solución negociada al conflicto armado; “ya vimos que es posible llegar a acuerdos, esperemos seguir alcanzándolos en distintas materias”, afirma con un renovado optimismo el Alto Comisionado de Paz (Periódico El Colombiano, Medellín 2001: 18 de junio).

Posteriormente, las AUC y el ELN, con la mediación silenciosa de la Diócesis de Sonsón- Rionegro), y el Asesor de Paz del departamento de Antioquia²¹, acuerdan la liberación simultánea de nueve personas retenidas desde el mes de mayo de 2001, todas familiares de los grupos enfrentados. (un menor familiar de un comandante del ELN, y otros 8 de las Autodefensas). “La negociación fue difícil pero fructificó” dijo una de las personas que participó en la gestión, al resaltar este evento como un paso adelante en la humanización del conflicto armado, “donde los civiles deben permanecer inmunes a las acciones de los grupos enfrentados” (Periódico El Colombiano, Medellín, 2001: 21 de junio).

Estos acuerdos, sin embargo, no revierten la dinámica de la confrontación, que a fines de 2001 se traduce en una nueva ofensiva de las FARC y del ELN, con bloqueos a la autopista Medellín-Bogotá, y la prohibición de entrada de víveres a aquellos municipios en donde el Ejército adelanta operaciones militares (San Carlos, San Luis, San Francisco, Granada y Cocorná); y con otro atentado en el Peñol que ocasiona la muerte de cinco personas, entre ellas un bebé hijo de un agente de policía de la localidad, y una nueva campaña de amenazas contra los alcaldes del Oriente Antioqueño.

En respuesta a ello los alcaldes establecen contactos para el lanzamiento del Movimiento de Alcaldes del Oriente Antioqueño, dirigido a la búsqueda de acuerdos humanitarios para bajarle la intensidad al

21 En algunos departamentos del país, como en Antioquia, se nombran este tipo de funcionarios, con la tarea de favorecer acercamientos con los actores armados ilegales, y la implementación de políticas en materia de convivencia y promoción de una cultura de paz.

conflicto, y no ceder a la pretensión de los actores armados ilegales de que abandonen sus cargos.

Pero esta iniciativa no es vista con buenos ojos por el gobierno nacional, ante la posibilidad de ver aún más disminuido su poder de presión para sentar en la mesa de negociación a la guerrilla y dar a pie a una situación más caótica, con la proliferación de diversas negociaciones, sin un marco de referencia único. Con la ruptura definitiva del proceso de paz, en febrero de 2002, lo que se impone es la confrontación armada.

La reacción de las FARC a la decisión de Pastrana de no continuar con las negociaciones no se hace esperar. A partir de marzo de 2002 emprenden una nueva ofensiva para demostrar su poderío e incrementar el número de personas secuestradas, con miras a la negociación de una “ley canje”, y a generar una crisis de gobernabilidad con una campaña sistemática de amenazas contra la dirigencia política local²².

De nuevo el Oriente Antioqueño vuelve a tener un papel importante como escenario para llevar adelante acciones de sabotajes contra torres eléctricas, redes de transmisión de energía, carreteras, y la voladura de puentes que dejan incomunicados a varias localidades en San Rafael, San Carlos, Guatapé.

El secuestro del gobernador Aníbal Gaviria y su asesor de paz Guillermo Echeverri, el 21 de abril de 2002 cuando presidían una marcha por la paz contra el bloqueo impuesto por las FARC al municipio de Caicedo, agrava aun más la situación. Esta acción le abre a las puertas a una mayor militarización del Oriente Antioqueño.

Al finalizar el gobierno de Pastrana, organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a los bandos en conflicto para que abandonen las prácticas criminales cometidas contra la población civil, en especial los métodos indiscriminados, como la masacre y el desabastecimiento de alimentos o medicamentos (Grupo de seguimiento del Oriente, 2002). Pero esto no genera respuesta positiva ni por parte de la guerrilla ni de las Autodefensas.

Este panorama ha venido presentando algunas variaciones con la ejecución de la “política de seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe. Al Oriente Antioqueño se le considera un lugar clave para demostrar la capacidad del Ejército y la Policía en la recuperación del orden público.

22 A lo largo del 2002 en Colombia doce alcaldes y sesenta concejales fueron asesinados, trescientos noventa y nueve alcaldes pidieron ser relevados de sus cargos, otros trescientos (es decir el 27%) se vieron obligados a refugiarse en un lugar seguro (guarniciones militares y grandes ciudades), y ejercer su mandato a distancia, y unos seis mil concejales fueron objeto de amenazas, de los cuales al menos mil ochocientos han renunciado a sus cargos, de un número total de doce mil (Pecaut, 2003a).

En un primer balance de las operaciones realizado a fines de 2003, el comandante de la IV Brigada reporta una disminución notoria de asesinatos de civiles -sólo cinco en lo corrido del año-, la reactivación del tránsito por la autopista Medellín-Bogotá, la apertura de nuevos locales comerciales, y el retorno de algunos desplazados (Periódico El Colombiano, Medellín, 2003: 27 de julio).

Si bien es cierto que estos resultados son demostrativos de los logros obtenidos en la aplicación de medidas orientadas a garantizar un control de vías estratégicas, es poco lo que representan en términos de un dominio territorial estable por parte de la Fuerza Pública. Como es conocido en el Oriente, los actores armados ilegales se adaptan a la situación, con un reacomodo de sus estrategias. Mientras que la guerrilla se repliega hacia sus zonas de refugio, la autodefensas, a imagen y semejanza de la guerrilla, apelan a la combinación de las formas de lucha: mientras que adelantan un proceso de negociación, a la vez mantienen sus efectivos en las zonas en disputa, y desarrollan una estrategia tendiente al control de las organizaciones sociales, como base para la consolidación de su proyecto político²³.

El repliegue de la guerrilla agrava la situación de la población civil con la extensión de los lugares minados, lo que genera un aumento del número de personas lisiadas y el despoblamiento de veredas en municipios como San Francisco, San Luis y Cocorná. Para no ser sorprendidos, especialmente en la noche, la guerrilla procede a la siembra de minas y el levantamiento de un mapa de los puntos donde quedaron ubicadas. Pero el mapa puede perder su utilidad ante el deslizamiento de la tierra, los derrumbes por tratarse de terrenos montañosos, o cambios de los cauces de las quebradas. Además, las lluvias mojan los morrales y los mapas sufren serios deterioros, sin contar con que el guerrillero portador puede morir o ser capturado (Jaramillo, 2004).

Entre los años 2001 y 2003 se presentan trescientos dieciocho casos de explosiones de estos artefactos, que dejan un total de doscientos treinta y seis víctimas. De ellas, ciento veinte corresponden a civiles, y ciento dieciséis a personal militar. Por municipios, los principales son: San Francisco, Granada, Cocorná, San Luis, Argelia (en el Oriente), Segovia (nordeste) y Medellín. Las cifras nacionales de víctimas, de acuerdo con el Observatorio de Minas y la organización no-gubernamental Landmine Monitor, pasaron de doscientos sesenta y uno en el 2001 a seiscientos treinta y ocho en el 2003, un

23 Al respecto, el asesor de Paz del departamento denunció las presiones ejercidas por las autodefensas contra alcaldes, administraciones municipales y población civil del Oriente Antioqueño. "Vamos a preguntarles por qué están pasando estos hechos" (Periódico El Colombiano, Medellín, 2004: septiembre 3).

aumento del 145% (Periódico El Tiempo, Bogotá, 2004: febrero 18). Esto ha hecho de Colombia el cuarto país del mundo con el mayor número en accidentes con minas antipersonales, siendo sólo superado por Chechenia, Afganistán y Camboya.

La crisis humanitaria que se vive en el Oriente Antioqueño con las minas antipersonales en los municipios del Oriente aviva el interés de la Gobernación de Antioquia y el Laboratorio de Paz del Oriente para promover un acuerdo humanitario que facilite el desminado de territorios, y en solidaridad con la población de Aquitania sitiada por la guerrilla de las FARC, en su guerra contra las autodefensas por el control de cultivos de coca.

La presencia de la fuerza pública en la región tampoco ha logrado poner freno a los asesinatos selectivos, las amenazas que obligan a nuevos desplazamientos de población (Cocorná, San Carlos, San Francisco y San Luis) y las masacres, como la ocurrida en el municipio de San Carlos, en donde las FARC asesinan a varios campesinos que retornan después de haber sido forzados a desplazarse sin su consentimiento²⁴. A esto se suma el abandono de ciento diez y 8.419 predios a agosto de 2004 (Presidencia de la República, 2004).

Lo que ha ocurrido en el Oriente Antioqueño con la generalización del conflicto armado presenta similitudes con otras regiones del país que, sin contar con una tradición de presencia guerrillera, como en las zonas de frontera, han dado muestra de su vulnerabilidad frente a la acción de los actores armados.

LA POBLACIÓN CIVIL FRENTE AL CONFLICTO ARMADO

El curso de la guerra no solamente es la resultante del juego de interacciones estratégicas entre los protagonistas de la guerra, también depende de las formas de representación que se construyen frente a sus protagonistas, sus formas de acción y sobre todo la manera como ello afecta a la población civil y las formas de respuesta que ella construye para adaptarse, resistir o rebelarse.

Con todas las limitaciones que impone el desarrollo de un trabajo de campo en zonas que son epicentro del conflicto armado, la autora de esta investigación establecer relación con líderes de organizaciones sociales e instituciones, y con habitantes de algunos de los lugares claves en la gene-

²⁴ A propósito de este hecho, un editorial de El Tiempo se refiere a los horrores vividos por esta población con el asesinato de su concejal Juan Camilo Cardona; un carro bomba en el parque; varios paros armados; un puente dinamitado que precipitó al embalse Playas a una ambulancia con tres mujeres; otras masacres cometidas por las autodefensas, un intento de toma; bloqueos de alimentos y hasta prohibiciones de que sus habitantes asistan a misa. Todo ello por la guerra territorial entre guerrilleros y paramilitares (Periódico El Tiempo, 2004: julio 15).

ración de acciones colectivas de resistencia civil, y participar en actividades promovidas por el Movimiento por la Paz, que aglutina a diversas fuerzas sociales y políticas, y organizaciones no gubernamentales. Con base en ello se realiza esta aproximación a algunas de las experiencias más representativas de resistencia civil y participación democrática que han tenido lugar.

Una de las características de la guerra irregular que se libra en Colombia ha sido un uso intensivo del terror como estrategia de control sobre la población civil, especialmente en las zonas en disputa, donde aún no se ha logrado ejercer de manera permanente el dominio de uno u otro actor, como es el caso del Oriente Antioqueño. Dichas zonas han sido las más afectadas por las transformaciones que se producen en las dinámicas del conflicto armado, y en las estrategias puestas en práctica por sus protagonistas.

Aunque en un comienzo la presencia de la guerrilla no constituye un motivo de zozobra para la población, esta situación cambia con la irrupción de otros grupos armados.

El no poder transitar como era costumbre por los caminos, el verse obligados a prestar servicio so pena de ser asesinados o desplazados, el hecho de ser sometidos a interrogatorios y señalamientos de personas que recorren el lugar señalando a supuestos cómplices de la guerrilla, abonan a la configuración de ambientes en donde lo que se impone es la desconfianza, y el temor ante la posibilidad de ser amenazados, torturados, masacrados o desaparecidos.

Como lo expresan habitantes de la vereda El Jordán del municipio de San Carlos a unos periodistas que visitan la zona:

La gente no duerme porque siempre hay ruidos raros. Unos días pasa la guerrilla, nos reúne y dice que nos va a proteger de los paramilitares. Después llegan los paramilitares y dicen que nos van a cuidar de la guerrilla. Ellos están armados, ¿entonces uno qué hace? Sólo quedarse ahí, asustado, esperando a ver quién va a ser el próximo muerto (Periódico El Colombiano, 2004: 24 de septiembre)

La instauración de este ambiente de miedo generalizado tiene efectos similares a los referidos por Lechner (1986) durante la vigencia de las dictaduras militares, como la desestructuración de aquellos referentes colectivos que hacían posible que la sociedad pudiera reconocerse a sí misma en tanto orden colectivo, el levantamiento de barreras defensivas, la sospecha y el odio al otro, y un repliegue hacia lo privado.

Aunque hay personas que optan por dejar sus lugares de residencia en busca de mejores horizontes, lo predominante es el desplazamiento forzado. Desde 1997 y hasta el presente el Oriente de Antioquia ocupa un lugar sobresaliente como región expulsora de población que

llega a las cabeceras de los municipios, y luego hacia la ciudad. La existencia de esta población es lo que ha revelado, de la manera mas descarnada, la situación de vulnerabilidad extrema a la que ha sido sometida la población civil, y la pérdida de los derechos fundamentales como la libertad, el derecho al trabajo, a tener una vida digna, y a la participación en la vida política del país (Zuluaga, 2004).

Para la población que permanece en lugares epicentro del conflicto, el diario vivir se caracteriza por una vivencia exacerbada del miedo ante el proceder de actores armados que, con frecuencia, no logran ser distinguidos, ante la semejanzas en la forma de vestir y los frecuentes cambios de bando de la guerrilla hacia las autodefensas, y las alianzas entre autodefensas y ejército.

Si bien la Fuerza Pública se hace presente en zonas donde nunca antes se había hecho presente, esto no se traduce en un mejora de la situación de la población, ante las restricciones establecidas a la compra de víveres y las indagaciones que adelantan para establecer quiénes son los colaboradores de la guerrilla, y las graves violaciones a los derechos humanos “asesinando campesinos y poniéndoles el uniforme de guerrillero o paramilitar” (Entrevista con un líder de San Luis, 2004), o la desaparición de personas después de ser bajada de los buses en los retenes que con frecuencia se realizan en las carreteras o la sacada de las casas, por los actos delincuenciales en los que incurren soldados destinados a la vigilancia de las principales vías²⁵, y por el comportamiento de elementos de la Fuerzas Armadas que “establecen relaciones afectivas con las jóvenes del lugar dejándolas embarazadas y abandonas y colocándolas en riesgo con la guerrilla, que les prohíbe cualquier contacto con ellas”(Entrevista con jóvenes de Argelia, 2004)

El solo hecho de habitar en un territorio marcado como guerrillero²⁶ o paramilitar se convierte en un factor de riesgo para la preservación de la vida: “nos definen paramilitares o guerrilleros según la zona que habitamos, así: en la cabecera somos paras y en las veredas somos guerrilleros” (Entrevista a líder de San Luis, 2004).

Para algunos habitantes de los lugares en donde se realizan operativos militares se viven momentos de gran angustia cuando el Ejército

25 Respecto de esas actuaciones, un analista de las Fuerzas Armadas ha llamado la atención sobre las limitaciones de este tipo de actuación delincencial para el éxito de la labor de inteligencia, para prevenir y contrarrestar las intenciones ofensivas del enemigo, y sobre todo para lograr una legitimación como autoridad (Rangel, 2001).

26 Este tipo de señalamiento es similar al que, durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) viviera la población de aquellos territorios catalogados como “zonas rojas” o “repúblicas independientes”, que se convierten en el escenario de la Operación Marquetalia en 1964, lo que propició su conversión en áreas de refugio de la naciente guerrilla de las FARC (Pizarro, 1992).

se retira de los lugares de donde ha sido erradicada la guerrilla, ante el temor de las represalias por parte de éstas por supuesta colaboración con el enemigo.

Es la experiencia de los habitantes de El Prodigio, un corregimiento de gran importancia por su localización y su tierras fértiles, perteneciente al municipio de San Luis. Allí el noveno Frente de las FARC llevó a cabo una masacre, en represalia contra las gentes del lugar consideradas como colaboradoras de la autodefensas.

No obstante el rechazo frente a este tipo de procedimientos atroces, hay un relación de proximidad con los victimarios, debido a la vinculación a sus filas de gentes de la misma región: “es que hay madres y padres que tienen los hijos a un kilómetro o dos kilómetros delinquiendo. Pero por muy delincuentes que sean, ellos no van a querer que los expulsen, o que se los maten” (Entrevista con ex-alcalde del Carmen de Viboral , 2004). Esta cercanía con los armados se da también con las autodefensas y con el mismo Ejército, por la vinculación de jóvenes en cumplimiento del servicio militar, lo que también se convierte en un factor de riesgo para los familiares expuestos a las amenazas y actos de venganza de la guerrilla.

Se entiende entonces porqué hay una construcción social de los denominados “guerreros” como unos seres humanos que sufren y en consecuencia pueden ser receptivos frente a los padecimientos de la gente perjudicada por las acciones que realizan, y acaso dispuestos al arrepentimiento. Esto mantiene viva la esperanza de obtener buenos resultados gracias al contacto directo, al diálogo “como se haría con cualquiera otra persona, como si se tratara de amigos, de los amigos del monte. Entonces ya lo que se da es un proceso de cercanía, con la expectativa de generar un cambio en su actitud. Es que ellos actúan sin percibir lo que siente el ciudadano de al pie, que está siendo afectado por sus acciones” (Entrevista con líder de San Luis, 2004).

Esta “desmitificación del guerrero” se puede hacer extensiva a autodefensas y soldados. El testimonio de una experimentada líder comunitaria de Aquitania, uno de los principales lugares de cultivo y procesamiento de la coca, cuyos conocimientos en el préstamo de primeros auxilios le permite establecer una relación con los heridos de ambos bandos, es significativo:

Uno creía que los buenos eran la guerrilla y que los malos eran los paramilitares, porque teníamos poco conocimiento de las cosas horribles que ellos (la guerrilla) hacían. Últimamente sí se volvieron más sanguinarios, pero al principio sí eran muy humanos. Ahora que nos ha tocado convivir con los paras, ahora que me tocó atenderles los heridos a ellos, ver esa par-

te cómo sufren, verlos con esas piernas amputadas, entonces uno también conoce la parte humana del otro grupo. Uno ya alcanza a entender las razones de los unos y las razones de los otros. Yo no me hago a ningún lado, sino que en ambos he visto la parte humana (Entrevista con una líder comunitaria de Aquitania, 2004).

Este intento por asumir una postura imparcial, fundada en el reconocimiento de un rasgo común que los iguala a todos, es buen ejemplo de mecanismos de defensa a los que recurren las personas enfrentadas a este tipo de situaciones límite. Pero en el Oriente Antioqueño no se trata solo de acciones individuales sino, ante todo, de acciones colectivas que hacen visible la capacidad de resistencia de la población. A continuación me referiré a experiencias más representativas.

RECONSTRUCCIÓN DE PUEBLOS ARRASADOS

En el accionar de la guerrilla hay un cambio importante con respecto a las tácticas empleadas en los años sesenta y setenta, cuando las tomas guerrilleras tenían como principal objetivo la destrucción la estación de policía, el asalto a la caja agraria, y las arengas a la población. Ahora se procede al arrasamiento del pueblo, mediante la utilización de cilindros de gas o la colocación de carros bomba, causando numerosas muertes, destrozos materiales, y una sensación de terror generalizado.

Esta forma de proceder ha generado un sentimiento generalizado de rechazo y solidaridad con las víctimas, y se ha convertido en un factor de cohesión, al hacer de la reconstrucción del pueblo una tarea común. Es la experiencia de Granada, un municipio localizado en una frontera en la zona de embalses y del altiplano

En diciembre de 2000, un grupo de las FARC accionó un carro-bomba con cuatrocientos kilos de dinamita en el comando de policía, situado en el parque principal cerca del templo, y aledaño a lugares donde se concentra la actividad comercial de un pueblo dedicado a la producción agrícola y al comercio²⁷. Este ataque se prolongó por dieciocho horas, y dejó numerosos heridos y víctimas mortales.

Este evento provoca el abandono del pueblo por parte de familias pudientes, que tuvieron pérdidas económicas con esta toma guerrillera. También se produce la deserción de jóvenes a los estudios que venían realizando, por el temor de recibir represalias, y una nueva ola de desplazamientos. Por parte de los que permanecen se toma la decisión de acometer la tarea de reconstrucción del pueblo, y de prestar ayuda a las víctimas.

²⁷ En años anteriores las FARC habían realizado dos tomas, secuestrado un alcalde, una masacre y varios retenes en la vía Santuario- Granada.

Así se pone en marcha un proyecto integral de reconstrucción que contempla la realización de obras físicas, la recuperación psicosocial de las víctimas más afectadas de la población, y la reactivación de las organizaciones comunitarias. Dicho proyecto es asumido por un comité interinstitucional, una nueva forma de organización resultante de una alianza entre el Estado, la población de Granada, la Iglesia Católica, los comerciantes, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, y granadinos residentes en otros lugares del país.

En estas circunstancias hay un ejercicio de deliberación y de concertación que se plasma en la definición de reglas de juego para facilitar el funcionamiento de espacios colectivos, y una cierta imagen de neutralidad. Al respecto destacamos las siguientes:

No hablar de política partidista: “Es una vieja regla. Hace tiempo que nos hemos propuesto erradicar la politiquería”.

Asistencia voluntaria: “Asistir al Comité es una necesidad. Nos sentimos como en familia. Hay confianza y credibilidad entre los socios”.

Asumir como un deber pronunciarse ante los actos violentos: “Buscamos terminar con el campo de concentración en que vivimos”.

Prudencia y discreción frente a algunos temas, en especial el caso de los acercamientos humanitarios “puesto que es la vida la que está de por medio”.

Emitir la denuncia que “refleje el sentir de la comunidad” (López, 2003).

Esta alusión a los acercamientos humanitarios tiene una particular importancia. Aunque es claro que la guerrilla es la responsable de este atentado, al mismo tiempo se considera que la tarea de construcción no podrá llevarse a efecto sin contar con el asentimiento de la guerrilla, que continúa operando en la región. Es por esto que el comité para la reconstrucción de Granada realiza acercamientos humanitarios que posibiliten la reapertura del Banco Agrario después de dieciocho meses de cierre, y los desbloques del servicio de transporte interveredal e intermunicipal. Otra intervención del comité es con la empresa de teléfonos (EDATEL), para reinstalar el servicio suspendido durante diez meses por ataques a las torres transmisoras. También se logra la reanudación de la compra de café por parte de la Federación de Cafeteros, que había sido suspendida

Aun así, el funcionamiento del comité interinstitucional se dificulta ante las amenazas contra el alcalde, que lo obligan a desplazarse a Medellín por algún tiempo, y el asesinato del gerente del proyecto de reconstrucción, y de varios líderes comunitarios. Es en estas condiciones que la Alianza por la Reconstrucción de Granada logra culminar con éxito este ambicioso proyecto que aporta a la recuperación de confianza entre los habitantes, el retorno de población que se había

marchado a raíz del atentado (unas setenta familias desplazadas), y el funcionamiento de asambleas comunitarias con un buen promedio de asistencia (trescientas personas en cada evento) (Entrevista al ex-alcalde de Granada, 2004).

IMPEDIR LA PARÁLISIS DE INDUSTRIAS Y EL AISLAMIENTO

El desarrollo capitalista del Oriente conlleva la instalación de industrias, que se concentran en la zona del altiplano y en algunas localidades que ofrecen ventajas para los recursos naturales y su cercanía a la autopista. Así es como se pone en funcionamiento la industria de Cementos Rioclaro que se convierte en una importante fuente de trabajo para los habitantes de los municipios de San Luis y Cocorná, pero también un activador de conflicto ante el proceder de la guerrilla. Según las versiones que circulan entre la gente “la guerrilla empezó a exigir “vacuna”(término comúnmente utilizado para referirse al cobro de contribuciones por parte de los armados), pero la empresa se niega a pagar. Entonces los dueños empiezan a llamar a los campesinos, [a] todos los presidentes de acción comunal de San Luis, [y] Puerto Triunfo para decir que no iban a pagar, y así empezaron los estragos” (Marulanda, 1999: 13)

Esta situación se deteriora con la declaratoria de la empresa como objetivo militar por la guerrilla, que acusa a sus propietarios de financiar a los grupos paramilitares que operan en esta región. A raíz de la voladura de veinticuatro torres de transmisión que conducen el fluido eléctrico se procede al cierre de la planta por cuarenta días. Como consecuencia de ello quedan cesantes unos trescientos cincuenta trabajadores directos, se produce una parálisis en las actividades comerciales, se militariza la empresa para contener la acción de guerrilla, y se altera el orden público, ante la presencia de familias de los trabajadores despedidos en el parque principal de San Luis.

La primera reacción a estos hechos es la movilización de los trabajadores de la empresa de cementos Rioclaro, quienes llevan a cabo un paro de protesta contra el accionar del ELN. Este evento desencadena demostraciones de solidaridad de la alcaldía, representantes del comercio, líderes y representantes de organizaciones comunitarias urbanas y rurales, y de empresarios privados propietarios de la empresa en mención. De allí se deriva la constitución de un escenario de encuentro, en donde madura la idea de establecer acercamientos humanitarios, como opción para evitar este tipo de situaciones (Marulanda, 1999).

Como resultado de las conversaciones que se adelantan con el consentimiento del en ese entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, el ELN facilita la reposición de las torres de energía. Este logro allana el camino para establecer contacto con las Autodefensas del

Magdalena Medio, que manifiestan su disposición a no entorpecer un proceso concertado de desarrollo social para la zona, con énfasis en lo comunitario. A partir de este momento se inicia un periodo de calma que favorece la puesta en marcha de un plan de desarrollo, y la creación de una fundación por parte de Cementos Rioclaro para la inversión social en la región. Ante el éxito alcanzado con la movilización de la población y con los acuerdos humanitarios, San Luis se convierte en un referente para los demás municipios del Oriente Antioqueño.

Pero estas condiciones no logran mantenerse por largo tiempo, ante el escalamiento de conflicto armado y la disputa por el control de la autopista. Los frecuentes bloqueos realizados por la guerrilla empeoran las condiciones de vida de la población de San Luis, cuyas posibilidades de sobrevivencia dependen en buena medida del funcionamiento de esta vía para el transporte de la madera que se extrae de los bosques que la circundan, y de productos agrícolas y el funcionamiento de algunos estaderos o fondas²⁸.

En junio de 2001, el ELN lleva a cabo una acción de bloqueo de la autopista Medellín-Bogotá -que, como se recordará atraviesa los 23 municipios del Oriente²⁹- y una restricción de suministro de víveres a San Francisco, San Carlos, San Luis, Granada y Cocorná. Aunque el Ejército adelanta un operativo militar en la zona (la "Operación Estrella"), el alcalde de San Luis no confía en que ello vaya a mejorar la situación; piensa que es mucho más adecuado gestionar un acuerdo humanitario con los actores armados ilegales, que tener que combatirlos militarmente. Además, contempla la posibilidad de gestionar ante el gobierno nacional que se entregue el manejo de la carretera a una organización comunitaria o a una asociación de municipios, que permita el sustento de las familias que viven del comercio que genera la autopista³⁰.

De nuevo el alcalde de San Luis lidera otra propuesta de acuerdo humanitario que, como se verá mas adelante, se convierte en una causa

28 El grueso de la población económicamente activa de San Luis son pequeños propietarios insertos en una economía campesina de subsistencia, extractores y comerciantes de madera (actividad en decadencia), y trabajadores de la empresa explotadora de calizas coloidales y de cementos Rioclaro.

29 La autopista no es la única vía que ha sido blanco de los atentados de la guerrilla. También han sido frecuentes las acciones contra carreteras adyacentes y puentes que comunican a varias localidades y que afectan el comercio y el transporte entre las localidades del Oriente Antioqueño.

30 Estas familias corresponden a población forzada a desplazarse a consecuencia del bloqueo de la guerrilla a la autopista Medellín-Bogotá, luego de las represalias de los paramilitares por considerarlos informantes de la guerrilla. Esto ocurre en el tramo comprendido entre los ríos Calderas y Rioclaro, zona de ubicación de la empresa Cementos Rioclaro. (Periódico El Colombiano, Medellín, 2001:8 de julio).

común de los municipios más afectados por el conflicto en el Oriente Antioqueño. Se debe recalcar el papel destacado que cumplen los municipios más vulnerables a los bloqueos, dada su dependencia de la comunicación con la principal vía de transporte de la región.

FRUSTRAR LAS ACCIONES DE "LIMPIEZA"

En las cabeceras municipales se tiende a reproducir una práctica frecuente en la ciudad en los años ochenta, la "limpieza" de elementos considerados indeseables por tratarse de viciosos o delincuentes, ejecutados por agentes policiales en alianza con los integrantes de grupos de "limpieza". En el Oriente Antioqueño este tipo de acciones forman parte de las estrategias de control de población llevadas a cabo por parte de las autodefensas y de la guerrilla, con el objetivo de una "moralización de las costumbres", y el exterminio de "soplones" o colaboradores del enemigo.

Ante el incremento de personas que desaparecen y luego son encontradas con varios tiros y letreros en donde se les acusa de ser viciosos o "sapos", se genera una alarma entre los habitantes de municipios más afectados, Sonsón y San Luis: "la gente se sentía muy tocada, porque eran muertes selectivas y podríamos decir, indiscriminadas, y morían personas de todo tipo: travestis, drogadictos, delincuencia común, en fin morían también los que tampoco debían nada, pero fueron discriminados" (Entrevista con una líder comunitaria de San Luis, 2004).

En San Luis se procede a la conformación de una comisión para indagar por las personas asesinadas o desaparecidas. Se levanta una estadística donde se establece que un buen número de las personas asesinadas correspondía a muertes selectivas: "iban escogiendo las personas y estos muertos eran de los dieciocho a los veintinueve, treinta años; uno que pasara de cuarenta años, ya se salvó, inclusive se escuchaba el rumor: 'no pues yo ya tengo cuarenta y cinco años, ya me salvé'" (Entrevista con líder comunitaria de San Luis, 2004).

En un intento por evitar que el ELN hiciera realidad la amenaza de acabar con las vidas de treinta y dos jóvenes incluidos en una lista por incurrir en robos y consumo de marihuana, se promueve una reunión del Consejo de Conciliación de San Luis, instancia conformada desde la experiencia de Rioclaro, y de algunas instituciones educativas. Según la versión de una de las personas que participa en este encuentro:

Se invitó a los treinta y dos jóvenes amenazados para que buscáramos a la guerrilla y que nos explicaran por qué los querían matar. Eso sonaba muy descabellado, pero nosotros teníamos como la seguridad de que ver el rostro humano de esos treinta y dos jóvenes y no encontrando ellos a los jóvenes, sino los jóvenes encontrándolos a ellos, eso cambiaba un poco el panorama

y rompía un poquito la lógica de la guerra. El otro elemento que se planteó fue todo un trabajo en el municipio, un plan “padrinos” mediante el cual los profesionales y representantes de las instituciones adoptáramos grupos del colegio, porque ya teníamos la sospecha que por lo que los habían amenazado, era por consumo de drogas (Entrevista con un líder de San Luis, 2004).

El haber logrado evitar las muertes de estos jóvenes, mediante este diálogo con los armados, es valorado como un gran logro de la comunidad, y una oportunidad para demostrar la validez de alternativas de reeducación de una juventud que no encuentra en el municipio opciones de recreación, ni de trabajo.

En Sonsón, un municipio de tradición conservadora, se produce una situación similar a la de San Luis, aunque la labor de “limpieza” adelantada por los paramilitares tiene como propósito acabar con los apoyos que puedan tener las FARC en una zona de mucha importancia como lugar de refugio, corredor estratégico y área de cultivos de coca. Como lo recuerda un líder juvenil:

Las autodefensas del Magdalena Medio llegaron al casco urbano de Sonsón llevando a cabo una carnicería increíble, sobre todo con quienes les habían pagado vacunas (extorsión) a las FARC o al ELN. Cayeron muertos quienes por alguna u otra razón habían estado en convivencia con ellos, jóvenes que, según los paramilitares, habían servido de “campanitas” o de llevar razones; aparecen una cantidad de víctimas en la semana: cuatro, cinco, seis, siete jóvenes muertos. Aparece un control que establece cosas como que los jóvenes que tienen el cabello largo, se lo tienen que cortar, que quienes consumen marihuana no lo pueden hacer, que quienes la venden terminan muertos, o sea, un control sobre la vida cotidiana de parte de las AUC tremendo; después se van hacia la zona rural (Entrevista con un líder juvenil de Sonsón, 2004).

En la cabecera municipal, la población toma la decisión de empezar a interceder para salvar la vida de personas que se sabe han sido retenidas. Es el caso de dos jóvenes que hacían un trabajo comunitario en la vereda Río Arriba, acusados de ser colaboradores de las FARC. La asamblea comunitaria de Sonsón nombra una comisión que habla con el comandante: “ ‘devuélvanos esos jóvenes, por qué los tienen acá’; y el comandante dice: ‘pues ellos, los tenemos acá, porque son familiares o son colaboradores de la guerrilla’, entonces la comisión humanitaria replica: ‘no hay por qué perseguir a estas personas, qué culpa tienen, por qué no les respetan la vida’, y efectivamente las autodefensas entregan a estos jóvenes que se habían llevado” (Entrevista con un ex-personero de Sonsón, 2004).

A más de este tipo de acciones colectivas también hay personas que de manera silenciosa le salvan la vida a personas que se sabe que han sido conminadas a abandonar el municipio so pena de ser asesinadas, escondiéndolas en sus casas y ayudándolas a huir camufladas, o escondidas entre los bultos de víveres.

EVITAR EL RECLUTAMIENTO DE LOS JÓVENES A LOS GRUPOS ARMADOS

Entre las estrategias de los actores armados está contemplado el reclutamiento de jóvenes a sus filas, lo cual encuentra como condiciones favorables la falta de oportunidades de educación y de trabajo³¹, la desarticulación de las familias producida por el mismo conflicto, y ser exitosos en la conquista de las jóvenes del lugar³².

El reclutamiento ha contado con la oposición de organizaciones que trabajan por ofrecer otras alternativas de socialización a los jóvenes, de madres que han preferido desplazarse a la ciudad antes que permitir que los hijos participen de la guerra, y por parte de la Iglesia Católica, que a través de su representante en la región, el arzobispo de la diócesis de Sonsón Rionegro, condena el reclutamiento como una amenaza a la preservación de la familia, y ve en ello una amenaza para el adelanto de la labor pastoral que desarrolla con la población juvenil.

“Es verdad. De muchos municipios van llegando diariamente las noticias de muertes fuera de combate, la mayoría de gente desprevenida, de civiles, de no involucrados en los grupos armados que están en guerra, este es el gran dolor, esta es la triste secuencia de estar en un lugar dominado por el conflicto. Y junto a lo más duro de la realidad, la muerte de los civiles, está lo que sigue: la orfandad, la viudez, el desplazamiento, la pérdida de los esfuerzos por construir un hogar, la desunión de

31 En el Oriente Antioqueño, desde los años ochenta, se hizo notorio el escepticismo entre los jóvenes de las diversas localidades acerca de su futuro, en especial por la falta de oportunidades ante un entorno en permanente proceso de cambios y resignificaciones. Aun hoy en día las expectativas laborales de los jóvenes se acercan más a aquéllas que les permitan obtener un estatus y un reconocimiento más propio de contextos urbanos. La mayoría encuentra en la tecnificación del campo un gran potencial, pero en la práctica este tipo de programas tienen baja demanda, y no les interesa en particular para su realización personal. En subregiones como el Altiplano, la mayoría de los jóvenes prefieren ganarse la vida como empleados de industrias, de comercio o servicios. A pesar de la vocación agrícola de gran parte de los municipios de la región, volver los ojos hacia el campo lo valoran como un retroceso (Iner, 2001)

32 Este factor ha sido identificado como una de las principales razones que ha conducido a jóvenes a formar parte de la guerrilla o las autodefensas. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los mismos grupos armados, que han utilizado a las jóvenes como un señuelo para arrastrarlos a sus filas (Meertens, 2004; Palacios, 2004).

la familia y está, incluso, el que algunos miembros de familia se involucren en la misma guerra, en la mendicidad y aun en la prostitución. El drama de la guerra se ve en la descomposición de la familia, en una región donde es, por tradición, unida". (Periódico El Colombiano, 2002: 22 de diciembre)

La lucha por impedir que los hijos participen en la guerra propicia acciones colectivas que obstaculizan esta actividad. Es lo que ocurre en La Aurora en el municipio de San Luis, cuando los habitantes hacen presencia en el lugar donde se lleva el reclutamiento de jóvenes, y hacen fracasar los planes de las FARC. En represalia, esta agrupación asesina al líder comunal que había encabezado esta acción de resistencia.

Hay que advertir que el rechazo de madres y padres a que sus hijos formen parte de las filas de los armados, motiva a jóvenes del Oriente Antioqueño a rechazar el préstamo de servicio militar, y a promover un movimiento de objetores de conciencia. La negativa a cumplir con la orden de presentación a los respectivos batallones de donde son solicitados, los enfrenta a un dilema:

El Ejército me mandó que tenía que presentarme y como no me presenté, porque me quedó un poco difícil, pues soy un remiso, ésa fue la razón que me mandaron y estoy en una sin salida, cada vez que yo veo un soldado o un policía, creo de que ya me van echar mano y me van a mandar para allá, y esto hace de que a veces me sienta yo mal, de pronto de tener que irme a pagar servicio y dejar a la comunidad así, como engañar a la comunidad, de decirles que yo siempre voy a estar ahí y que la voy a apoyar y a sacar la comunidad adelante y que de la noche a la mañana los deje solos (Entrevista con jóvenes de Argelia, 2004).

Aunque la objeción de conciencia es un derecho consagrado en la constitución de 1991, aún no ha sido objeto de mayores desarrollos, ni tampoco ha contado con un Estado dispuesto a cumplir con los compromisos contraídos internacionalmente con la firma de tratados. Los jóvenes que se niegan a prestar servicio militar, en Colombia, son llevados a la cárcel o tienen una muerte civil o pública, es decir, aquéllos que no tienen libreta militar, no podrán acceder a seguridad social, a un trabajo, un contrato, ni podrán entrar a la universidad.

ROMPER EL CERCO A POBLACIONES

En el afán de ejercer control de territorios de gran valor estratégico por su localización, o la posibilidad de expandir cultivos de coca, se ha

apelado al confinamiento a poblaciones. En el Oriente Antioqueño esto tiene una expresión particular en el drama vivido por los habitantes de Aquitania, corregimiento de San Francisco cercano a Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio, que adquiere una particular importancia por la presencia de los actores armados, y con su conversión en un lugar clave en la producción de coca.

De acuerdo a la descripción de este lugar por parte de una líder comunitaria: “siempre se ha vivido en medio de un gran atraso, pues apenas la carretera le llegó hace doce años y la luz hace cuatro o cinco años”. Pero desde los años setenta, la situación cambia con Pablo Escobar, y luego con la llegada de la guerrilla -el M19 y el ELN-: “En ese tiempo pasaba un grupo armado y a los seis meses otro. Uno no sabía. Ya empezaron a entrar los paramilitares de vez en cuando, pero ninguno se asentaba allá” (Entrevista con una líder comunitaria de Aquitania, 2004).

Este paisaje cambia con la llegada de otro actor, las FARC, que se establece en las veredas donde se concentra la producción de coca (vereda La Miel-Floresta y en Pocitos). Ellos cobraban cinco mil pesos de “impuesto” a cada arroba de hoja de coca que los labriegos vendían a los acopiadores de los narcotraficantes. La gasolina la expendían los comerciantes del pueblo. Esta dependencia de la coca como un eje de la economía local, tal como ha ocurrido en otras regiones del país, acarrea transformaciones en la vida cotidiana, y en un incremento de los homicidios. Con la coca llegaron las armas y las muertes: “fue la misma gente [que] se empezó a matar, cuando hacía mucho tiempo que eso no ocurría”, afirma mi entrevistada.

Pero el control de las FARC no dura mucho tiempo. Las autodefensas se adueñan de la venta de gasolina y de la compra de hoja de coca. Las FARC, replegadas en las afueras, obligan a las personas a abandonar sus lugares de residencia en las veredas donde ejercen control las autodefensas. A consecuencia de ello se genera una ola de desplazamientos de población que llega a las cabeceras de San Francisco y de San Luis. Pese a que en ningún momento la guerrilla imparte una orden de regreso -“porque ellos nunca dicen que uno regrese”- hay quienes desobedecen y retornan, con la expectativa de obtener ingresos sumándose a la población que había sido presionada por las autodefensas para que no abandonaran el lugar.

Bajo el dominio de las autodefensas, el pueblo sufre un deterioro con el aumento de los homicidios a consecuencia de las riñas que, como hacía mucho tiempo, no se habían vuelto a presentar. Además, según recuerda la líder de Aquitania, pusieron a funcionar una zona de tolerancia, cosa que no existían en el lugar. Pero lo peor de todo es la zozobra en la que se vive por estar entre dos fuegos.

Las FARC proceden al minado de los lugares de tránsito obligado para la recolección de la hoja de coca, esperando con ello avanzar en la recuperación del terreno perdido. Como observa un periodista que pudo acceder al lugar: “los movimientos de la gente se limitan a recorrer tres graneros casi vacíos, la iglesia y las dos cantinas desde donde se repite una y otra vez la canción “el raspachín” (el que raspa la hoja de coca). Lo único que esperan algunos es raspar para ahorrar lo necesario para el desplazamiento” (Periódico El Tiempo, Bogotá, 2004: julio16).

Con el temor de ser señalados como colaboradores de las auto-defensas, pero con la decisión de hacerse visibles para dar a conocer lo que está pasando, un grupo de pobladores de Aquitania conforma una comisión que, junto con otras organizaciones, promueven un movimiento de solidaridad con Aquitania, y cuyos objetivos se consignan en un acta de peticiones:

- -Tener un futuro mejor para nuestros hijos y que no estemos en manos de los grupos armados.
- -Legitimidad del Estado y que no estén involucrados con los grupos ilegales.
- -Verificar la zona para revisar minas antipersonales y objetos sin explotar.
- -Retorno con apoyo en seguridad alimentaria, transporte y semillas para iniciar nuevamente.
- -De no existir condiciones para el retorno, proponemos: buscar fincas para capacitación agropecuaria y poder producir alimentos para nuestras familias.
- -Reubicación para las familias que no podamos retornar. Apoyo a familias que hayan retornado voluntariamente (Periódico El Colombiano, Medellín, 2004:13 de septiembre)

En este pronunciamiento hay una combinación de una visión futuro con una postura pragmática mediante la cual se aspira a retornar, pero dejando abierta la posibilidad de adaptación a la vida en otro lugar, sin tener que abandonar el campo ni la dedicación a las actividades agrícolas.

Con éste y los otros intentos a los cuales hice referencia se pone de manifiesto la construcción social de alternativas para tratar de seguir viviendo en sus veredas o municipios, sin que ello implique una adhesión o una sujeción ni tampoco, como en el caso de las comunidades de paz, una especie de confinamiento voluntario, acorde con la observancia de unas reglas establecidas para garantizar la convivencia. .

Aunque estas acciones colectivas de resistencia han tenido lugar en aquellas localidades que de manera mas directa se han visto enfrentadas por las disputas entre los actores armados, cuando se obtienen resultados que proporcionan algún alivio transitorio, son acogidas en otras localidades y se convierten en un punto de apoyo para pensar en un futuro sin guerra, a diferencia del ambiente generalizado de miedo e incertidumbre.

Lo que también le confiere a estas experiencias un especial significación es la posibilidad de articulación con propuestas de mayor alcance: me refiero a la iniciativa de “acuerdos humanitarios”, que proporciona un elemento de cohesión y de identidad regional. Este es el asunto del cual me ocuparé seguidamente.

EL MOVIMIENTO DE LOS ALCALDES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO Y LOS ACUERDOS HUMANITARIOS

A raíz de la ola de amenazas a los alcaldes por parte de las FARC en el 2001, los alcaldes insisten en los acuerdos humanitarios¹ y en el im-

¹ En el Derecho Internacional Humanitario los acuerdos humanitarios se entienden como una herramienta destinada a desarrollar asuntos particulares referidos al cumplimiento de normas establecidas en ese marco, y en el que las partes pueden expresar su voluntad política de respetarlas y hacerlas respetar. También tienen la finalidad de regular aspectos del conflicto armado, es decir, para establecer compromisos destinados a cumplir, hacer cumplir y facilitar el desarrollo de las reglas para proteger a los no combatientes en situaciones de conflicto armado. Según su contenido, estos acuerdos humanitarios pueden resolver algún asunto específico o general que asocia derechos humanos y derecho internacional humanitario, y su carácter puede ser temporal o indefinido. De acuerdo a las partes pueden ser unilaterales, cruzados, o indirectos, que son los firmados con terceros como comunidades o ante la opinión pública; bilaterales entre dos grupos armados o de un estado y un grupo armado, y multilaterales. Así mismo, pueden ser territoriales, es decir, para el cumplimiento de la normatividad humanitaria en un territorio definido, sea éste veredas, barrios, municipios, subregiones o departamentos; sectoriales, que tienen el fin de garantizar condiciones de respeto para un sector social específico (mujeres, la población desplazada, niños y niñas), o pueden ser para una modalidad particular de la confrontación: por ejemplo regular la utilización de minas antipersonales, o suspender conductas como la desaparición forzada, el secuestro, entre otras. Entre estas experiencias de acuerdos humanitarios se destaca la iniciativa de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, una propuesta de acuerdo global recogiendo la experiencia de negociación en Centroamérica, y las iniciativas más puntuales destinadas a la preservación de la vida, la integridad física, la identidad y la libertad de la población

pulso al movimiento de la no violencia promovido por la gobernación de Antioquia, como un componente del “Plan Congruente de Paz” para el departamento.

El 28 de septiembre de 2001, se lleva a cabo una reunión conjunta entre los alcaldes del Oriente, el gobernador Guillermo Gaviria y el asesor de paz de la gobernación, Gilberto Echeverri. Después de un análisis de la situación de orden público en el departamento y en el Oriente Antioqueño, se acuerda plantear los acercamientos humanitarios como alternativa para la superación de la crisis de gobernabilidad. Esta propuesta es acogida con entusiasmo por los alcaldes.

Con el aval de la gobernación de Antioquia, una delegación de los alcaldes del Oriente Antioqueño se aventura a la búsqueda de los armados. El resultado es un acuerdo humanitario con el ELN mediante el cual se logra una tregua unilateral hasta abril de 2002, y un cese en los ataques contra los comandos de policía. El problema es que el ELN manifiesta que en contrapartida, los alcaldes se comprometieron a gestionar “ante los organismos constitucional y legalmente competentes la reubicación de las estaciones de policía de los municipios del Oriente Antioqueño y/o la implementación de una policía comunitaria. En su defecto, la población residente en torno a las estaciones, deberá ser reubicada con garantías”. (Periódico El Colombiano, Medellín, 2001:30 de octubre).

Este pronunciamiento del ELN suscita una enérgica declaración por parte del gobierno de Pastrana, desautorizando cualquier tipo de compromiso por parte de alguna autoridad. A su turno, la Policía manifiesta su desacuerdo con una decisión que califica de inconstitucional y desmoralizante para una institución que también ha sido objeto de

indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz), de comunidades indígenas en Antioquia y de comunidades afrocolombianas en el Atrato Medio (Chocó). Con los gobiernos nacionales se coloca el énfasis en las posibilidades que permitan mantener una perspectiva de diálogo. Es lo que ocurre con el gobierno de Ernesto Samper, en el que se logran los acuerdos de Remolinos del Caguán.. El 15 de junio de 1997 fueron liberados sesenta soldados y diez infantes de marina retenidos por las FARC desde agosto de 1996, tras la toma de la base Las Delicias y combates en el Chocó. La negociación implicó para el gobierno de Samper pactar un despeje territorial de trece mil kilómetros durante veinte días. En aras de aclarar confusiones y problemas en el manejo de esta noción, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia hizo las siguientes precisiones con respecto a su uso y sus alcances: No se puede parcelar o disminuir el marco de protección, conformándose con la exigencia de respetar sólo alguna de las obligaciones o a sólo una parte de la población civil, sino más bien el propender por un compromiso de las partes tanto en materia de DIH ligados a la guerra misma, como en materia de derechos humanos, respecto de la cual el Estado continúa obligado a respetarlos y garantizarlos aún en el marco de un conflicto armado.

numerosos atentados y secuestros. Además, se interpreta como un peligroso avance de la guerrilla del ELN en la propuesta del Oriente como una zona de distensión, ante las dificultades para concretar la zona de convivencia en el Magdalena Medio.

Los alcaldes del Oriente Antioqueño sustentan su idea de policía comunitaria, y precisan que había sido discutida con la dirección nacional de la policía. “Nuestro deseo”, afirma un ex-alcalde, “no era que la policía se fuera de los cascos urbanos, lo que nos comprometimos a gestionar fue la policía comunitaria, que tenga armamento liviano y unos comandos regionales con armamento pesado” (Periódico El colombiano, Medellín, 2001: 30 de octubre).

Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la gobernación de Antioquia validan el acuerdo logrado “ante la desesperación de los alcaldes por salvar vidas de sus coterráneos y evitar la ruina económica que trae la guerra y ante la incapacidad del Estado, dadas sus limitaciones operativas y militares, de garantizar seguridad y bienestar a los habitantes del Oriente” (Periódico El Colombiano, Medellín, 2001: 5 de Noviembre).

El Asesor de Paz de la gobernación aprovecha además la ocasión para reclamar del gobierno nacional el cumplimiento de la ley 418 de Orden Público, destinada a la creación de Concejos Departamentales y Municipales de Paz², y la apertura de espacios más transparentes para hablar de diálogos regionales, contrario a lo que muchas personas venían haciendo sin contar con las autoridades, pues en Colombia “todo el mundo está metiendo las narices, todo el mundo está hablando en privado con los actores armados (...) y es ahí donde el Gobierno tiene que crear reglas al juego para que no se le disparen cuarenta procesos de paz sin control” (Periódico El Colombiano, Medellín, 2001: 5 de Noviembre).

El presidente Pastrana, ante la presión ejercida por la autoridad civil y desde una de las regiones con mayor peso en el país, flexibiliza su posición, pero sin perder del todo la posibilidades de ejercer control sobre diálogos regionales. Así, pues, autoriza “la realización de acercamientos humanitarios, no negociaciones, siempre dentro del marco de la política nacional de paz y bajo la dirección del Presidente de la República”; el nombramiento de un funcionario de enlace entre el gobierno nacional y los alcaldes, y un llamado para no incurrir en una interpretación reduccionista de los acuerdos humanitarios como un “método único, exclusivo y excluyente de buscar la paz, cuando se

² En Antioquia hay un antecedente importante con Uribe en 1995, en el desempeño de sus funciones como gobernador de Antioquia y en aplicación de un decreto del Ministerio del Interior, que constituyó la Comisión Facilitadora de Paz para facilitar diálogos regionales con los grupos armados ilegales.

necesitan escenarios concertados, de espectro nacional” (Periódico El Colombiano, Medellín, 2001: 18 de noviembre)

Superado este impasse, los alcaldes del Oriente Antioqueño hacen un nuevo movimiento en esta complicada partida, al manifestar su interés en adelantar acercamientos también con las autodefensas: “queremos hablar con las Autodefensas del Magdalena Medio y con las del Bloque Metro. Somos neutrales frente al carácter político y militar de los grupos, pero no frente a los compromisos humanitarios que pueden asumir en bien de las comunidades”, afirma el alcalde de San Luis. Pero esta propuesta es respondida con una negativa por las autodefensas del Bloque Metro, al considerar que “estos diálogos serían inconducentes y no beneficiarán en nada a las comunidades del Oriente Antioqueño”. Adicionalmente le piden a los alcaldes que “reflexionen sobre la forma en que están llevando a cabo este proceso, la publicidad, el protagonismo y la presión en beneficio de los intereses estratégicos del ELN, hacia el Gobierno Nacional que neutralizan y desvirtúan cualquier motivación humanitaria” (Periódico El Colombiano, Medellín, 2001: 5 de noviembre).

Los alcaldes replican con un pronunciamiento público que hace énfasis en la neutralidad frente al carácter político y militar de los grupos, y en el establecimiento de contactos con representantes de la ONU y con delegados de siete embajadas europeas para la obtención de respaldo político a los acercamientos humanitarios y la gestión de recursos para el desarrollo de la región del Oriente Antioqueño.

Pero la posibilidad de avanzar en los acercamientos se desvanece ante el estancamiento de las conversaciones con el ELN en Cuba, y el sabotaje de las Autodefensas Unidas de Colombia al diálogo con las guerrillas y cualquier posibilidad de extensión de pequeñas zonas desmilitarizadas al estilo de la zona de distensión en San Vicente del Caguán, bajo en control de las FARC.

Además las AUC secuestran a los alcaldes de Marinilla, San Luis, El Carmen de Viboral, Granada, Guatapé y El Peñol. En un comunicado anuncian que asumen la “responsabilidad por la integridad de estos seis alcaldes privados de la libertad (...) en momentos en que se disponían a realizar una de sus extrañas reuniones de negociación”. Le advierten al gobernador Gaviria que como “estas negociaciones son de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República (...); por esta razón y por convicción nos hemos opuesto a los diálogos regionales” (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2001: 19 de noviembre).

Los pronunciamientos de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, y por parte del candidato presidencial de la izquierda democrática Luis Eduardo Garzón, y el arzobispo de la Diócesis de Sonsón-

Rionegro Flavio Calle, operan como un factor de presión que facilita su liberación. Su regreso a la libertad se produce en medio de una ofensiva de las FARC (bloque “José María Córdoba”) en el Oriente Antioqueño, justo antes de la realización de una ronda de conversaciones con el gobierno para resolver el futuro de las negociaciones que no han podido avanzar.

En esta encrucijada vuelve a cobrar fuerza el impulso del movimiento de no violencia. El 23 de abril del 2002 el gobernador de Antioquia y su asesor de paz encabezan una marcha por la reconciliación, la no violencia, y en solidaridad con la población de Caicedo sometida a un bloqueo por parte de las FARC, que amenaza con la ruina a los propietarios de la cosecha de café³.

En la marcha, que parte de Medellín y a la que se unen mas de mil civiles, participan los alcaldes del Oriente Antioqueño y varios líderes de la filosofía de la no violencia, como el activista afroamericano Bernard LaFayette, quien fuera director nacional de la Campaña de la Gente Pobre de Martin Luther King, en 1968.

Apenas a cuatro kilómetros de llegada al pueblo, las FARC salen al paso de la movilización. Lo que en principio es apreciado por los marchantes como una retención para dialogar sobre los objetivos de la marcha, con el transcurrir de las horas se revela como un secuestro cometido por el frente treinta y cuatro de las FARC, en cumplimiento de las orientaciones del Secretariado, para presionar la “ley de canje”, mediante el secuestro de personalidades de la vida política, y para impedir otros intentos similares que podrían poner en serios aprietos sus planes⁴.

El secuestro de un gobernador que se había distinguido por su postura en contra de un escalamiento del conflicto armado y a favor de las salidas negociadas representa un gran revés para quienes venían abogando por los acuerdos humanitarios. Es el momento de poner a prueba el respaldo político a esta estrategia en el Oriente Antioqueño.

Con el apoyo de la Iglesia Católica, las instituciones, organizaciones no gubernamentales y sociales, se promueve la realización de asambleas comunitarias en las localidades, la Asamblea Provincial del Oriente, y marchas por la vida y la libertad, con el objetivo de acercamientos humanitarios para la liberación de la máxima autoridad del

3 De acuerdo con el testimonio de algunos participantes en la marcha de oriundos de Caicedo, las FARC le habían dado a todo el mundo la orden de no participar en ella (Entrevista expersonera de Marinilla, 2004).

4 Durante el tiempo que le correspondió la gobernación, Guillermo Gaviria impulsó diálogos en otras zonas del departamento, la realización de una caravana de solidaridad con Dabeiba, para llevar alimentos, lideró en el municipio de Marinilla un desfile para rechazar los actos terroristas que se cometieron contra el comando de policía de esta población y la Marcha del adobe en Granada para iniciar la reconstrucción del municipio

departamento, y del asesor de Paz, ex ministro de defensa y empresario Gilberto Echeverry.

El Secretariado de las FARC no manifiesta disposición a dialogar, pero los alcaldes no desfallecen y establecen contacto con los comandantes del noveno frente de las FARC, que opera en el municipio de San Luis. Después de varios días de incertidumbre, ante la probabilidad de que hubieran sido secuestrados, la comisión conformada por los alcaldes de Carmen de Viboral y de Sonsón regresan, pero sin haber logrado ningún resultado, aunque reconocen el buen trato recibido y la explicación que les dio el comandante Plotter de que la exigencia de renuncia a los alcaldes era, ante todo, una política nacional del Secretariado. Este jefe de las FARC, que posteriormente deserta, destaca algunos planteamientos de los alcaldes del Oriente, particularmente en el punto referido a una “solución política negociada al grave problema que vive el país” (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2002: 26 de junio).

A diferencia del las FARC, el ELN se muestra mas flexible. El 28 de mayo de 2002 se logra un acuerdo humanitario con los frentes “Carlos Alirio Buitrago” y “Bernardo López Arroyave” para desbloquear un importante tramo de la autopista Medellín-Bogotá, no obstaculizar el funcionamiento de las alcaldías de los veintitrés municipios, y el abastecimiento de alimentos a la población. En un comunicado el ELN explica que su decisión se fundamenta en:

El compromiso del gobierno departamental, los mandos militares de la IV y XIV Brigada y de la Policía de Antioquia, de permitir y garantizar el normal abastecimiento y comercialización de los productos regionales en las cabeceras y zonas rurales de los veintitrés municipios del Oriente Antioqueño y ante el compromiso de las autoridades municipales y de la Diócesis Sonsón-Rionegro de acompañar y apoyar el proceso (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2001: 28 de mayo)

Este acuerdo no se logra mantener, ante la ofensiva de las FARC y la respuesta de las autodefensas, lo que eleva la intensidad del conflicto. A consecuencia de ello se incrementan los desplazamientos, en lugares epicentros de la disputa: San Carlos, San Luis, Granada, Argelia y Puerto Nare. Durante los últimos meses del gobierno de Pastrana, las FARC llevan cabo numerosas acciones en diversas regiones del país: sabotajes a gran escala con la destrucción de trescientos cincuenta y cuatro torres eléctricas, cuarenta y cuatro redes de transmisión, voladura de puentes, bloqueos a la autopista Medellín-Bogotá, secuestros y masacres.

Como había ocurrido al finalizar el gobierno de Ernesto Samper,

se lanza una campaña de amenazas contra la dirigencia política local. Numerosos alcaldes, incluyendo los del Oriente Antioqueño, solicitan ser relevados de sus cargos; otros buscan un lugar seguro desde el cual despachar (guarniciones militares y grandes ciudades), unos mil ochocientos concejales renuncian a su cargos y se cierran los despachos judiciales en trescientos once municipios de catorce departamentos, ante el abandono de sus cargos por parte de tres mil quinientos noventa y cinco funcionarios que buscan refugio, por temor a las reiteradas amenazas de la insurgencia (Pecaut, 2003: 12-13).

En el Oriente Antioqueño la renuncia los alcaldes provoca una parálisis en la administración de los municipios, ante la dificultad para la prestación de servicios básicos. Los alcaldes promueven la movilización de la población, y la realización de una Asamblea Provincial que congrega a delegaciones provenientes de los municipios que forman parte de esta región. Al dar comienzo a las sesiones en el Carmen de Viboral, se da a conocer un video de las FARC mediante el cual hacen saber que “el gobernador Guillermo Gaviria Correa, y el Asesor de Paz para Antioquia hacían parte del grupo de canjeables”. Este anuncio genera preocupación, por considerar que ello se alejaba aún más las posibilidades de su liberación.

Para contrarrestar esta ofensiva de las FARC, el presidente Pastrana adelanta una gestión a nivel internacional para obtener una ayuda de emergencia que le permita sortear esta crisis. Con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno pone en marcha medidas especiales y un programa especial de protección para alcaldes, personeros y concejales amenazados. Como es sabido, las elecciones se realizan y Alvaro Uribe es elegido presidente.

Aunque en principio Uribe no desautoriza de plano los acuerdos humanitarios, los condiciona a una efectiva contribución a la paz, porque “si son diálogos para mantener un status quo de violencia y simplemente darle paz y salvo a los interlocutores no tiene sentido” (Periódico El Colombiano, Medellín, 2002: 25 de agosto). Sin embargo el gobernador encargado, Eugenio Prieto, y los alcaldes del Oriente Antioqueño no descartan del todo la posibilidad de un entendimiento con Uribe sobre este tema.

Pero esta posibilidad se esfuma ante el endurecimiento de la posición de Uribe en contra de este tipo de acercamientos y la pretendida neutralidad de las comunidades de paz y el llamado a la población civil para colaborar con la fuerza pública (Periódico el Colombiano, Medellín, 2002:27 de agosto).

En la misma dirección la ministra de Defensa plantea la necesidad de que los ciudadanos “entiendan que realmente el Estado es el amigo de todos, no puede ser el enemigo”, y anuncia una serie de me-

didadas de control del orden público en las ahora denominadas “zonas de consolidación y rehabilitación”, y el impulso a la conformación de redes de informantes basadas en el colaboración de la ciudadanía con la fuerza pública, y el pago de recompensas ⁵.

Ante la posibilidad de una catalogación del Oriente Antioqueño como “zona de orden público”, el movimiento de los alcaldes y la gobernación de Antioquia ponen de presente el carácter de esta región como un territorio de paz y los avances en las conversaciones con la Unión Europea para formar parte del paquete de ayuda para el impulso a experiencias piloto en desarrollo y paz.

También la guerrillas de las FARC y del ELN se hacen sentir, con una ofensiva militar que tiene como uno de sus epicentros el Oriente Antioqueño. De nuevo se procede al bloqueo de la autopista Medellín-Bogotá, y a la voladura de torres de energía que deja aislados a los municipios de San Luis, Cocorná, Granada, y sin los servicios de luz ni teléfono. El alcalde de San Luis vuelve a manifestar su repudio por estas acciones y su desconcierto por no entender la razón por la cual el ELN rompe con la tregua, cuando había logrado algunos alivios a los civiles gracias a los acercamientos humanitarios en el Oriente.

El ELN varía su posición y condiciona el desbloqueo económico de estos municipios a la conformación de una comisión humanitaria con la que se pudiera discutir algunos temas sobre la situación del Oriente Antioqueño. Con la mediación de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia y la participación de la gobernación, la Diócesis de Sonsón-Rionegro y las organizaciones cívicas del Municipio de San Luis, se logra el compromiso de cesar “por tiempo indefinido las restricciones a la libre circulación de mercancías, desde y hacia las cabeceras y zonas rurales de estos municipios, así como las acciones de sabotaje y atentados a la infraestructura vial, de transporte y servicios públicos y a la gestión de las instituciones oficiales, autoridades y organizaciones civiles del Oriente antioqueño, además del pleno respeto a la población

5 Respecto de estas medidas la oficina de las Naciones Unidas en Colombia dio a conocer un importante pronunciamiento en el cual manifiesta su preocupación porque las disposiciones adoptadas para este tipo de zonas “no son claras y dejarían ciertas dudas en cuanto a los controles judiciales, a la entrega de poderes de una institución a otra y a parecerían ser también discriminatorias”. Se refiere a los controles establecidos para el acceso a estas zonas, la situación de los extranjeros, el empleo de términos como “mimetización” y “sospechosos”; “Evidentemente sospechoso es un término muy vago, nos preocupan palabras como que los actores armados están mimetizados en la sociedad civil y nos preocupan porque faltaría al principio de la distinción, que es una regla clara en materia de derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH. Distinguir entre actores, entre combatientes y no combatientes, es clave para que así un ciudadano pueda saber cuáles son sus limitaciones, obligaciones y derechos” (Periódico El Colombiano, Medellín, 2002:2 de octubre).

no combatiente”. Esto último se refiere al trámite de denuncias de violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a las posibles irregularidades en la acción administrativa y de seguridad de las entidades del Estado, y la investigación por el asesinato de civiles por parte de las AUC en las veredas Vergel y Ortoná, de San Carlos; Faldas, de Granada; Las Playas, de Cocorná” (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2003: 12 de enero).

En respuesta a la demanda del gobernador encargado para que hagan saber su disposición o no a los acuerdos humanitarios, las FARC se muestran inclinadas a “respetar las gestiones humanitarias que adelanta la organización de los alcaldes del Oriente Antioqueño y diferentes asambleas constituyentes municipales”, pero reitera la decisión del Secretariado de hacer renunciar a los mandatarios locales (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2003: 30 de enero).

Este pronunciamiento se produce en medio de la conmoción que genera la masacre cometida por el noveno frente de las FARC contra varias personas en San Carlos. En atención a la demanda de la Oficina en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se pronuncien sobre estos hechos, las FARC dan a conocer un comunicado en el cual señalan que: “En los hechos sucedidos los días 15 y 16 de enero del año en curso en las veredas Dosquebradas, La Tupiada, Dinamarca y La Arenosa del municipio de San Carlos, fueron ajusticiados diecinueve paramilitares que hacían parte de la red de informantes voluntarios, coordinados por el Ejército acantonado en el área”. Igualmente reconocen que fueron ellos los ejecutores de la masacre de campesinos en las veredas Ortoná y El Chocó del municipio de San Carlos, el 2 de diciembre de 2002, por la misma razón. (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2003: 30 de enero).

A partir del primer semestre de 2003 el Ejército pone en marcha la “Operación Marcial” contra los llamados “santuarios” de los frentes “Carlos Alirio Buitrago” y “Bernardo López Arroyave” del ELN, y los frentes noveno y cuarenta y siete de las FARC, que operan en el Oriente Antioqueño. Apenas dos semanas después de haberse iniciado esta ofensiva, las autoridades locales reportan una ola de desplazamientos masivos de campesinos provenientes de veredas del municipio de San Francisco y del corregimiento la Danta en Sonsón, que llegan en búsqueda de refugio a las cabeceras municipales.

Esta intensificación de la confrontación a su vez repercute en los acuerdos humanitarios recientes logrados con el ELN. A partir de marzo de 2003 vuelven a someter a una situación de aislamiento al municipio de San Luis, con un paro armado. Este grupo guerrillero alega además un incumplimiento de lo pactado y una presencia de AUC en alianza con el ejército.

Los alcaldes del Oriente Antioqueño optan por hacer un llamamiento a las organizaciones internacionales para que sirvan de intermediarios, y pueda llevarse a efecto una interlocución con los actores armados. En solidaridad con el municipio de San Luis, la presidencia colegiada de la Asamblea Regional Constituyente del Oriente anuncia la realización de una plenaria para presentar una propuesta que acabe con la crisis humanitaria que allí se registra.

Ante el silencio del gobierno nacional frente a la crisis humanitaria que se presenta en la región, el gobernador encargado y el movimiento de los alcaldes demandan del Alto Comisionado para la Paz un encuentro para analizar la crisis del Oriente. La declaración del gobernador es en el sentido de que “la falta de articulación entre las políticas regionales de paz y las iniciativas del Gobierno Nacional frente a la situación del Oriente Antioqueño, han entorpecido los acercamientos humanitarios que se adelantaban en esa zona” (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2003: 20 de marzo). Esta posición es reveladora acerca de las tensiones en la relación entre las autoridades regionales y locales partidarias, de darle continuidad a una estrategia de negociación, y la “política de seguridad democrática” del presidente Uribe, que tiende a ser considerada como un obstáculo para la paz y la liberación de los secuestrados.

Después de 18 días de paro, el ELN anuncia el levantamiento del mismo y declara “que no había ningún problema, que la gente de San Luis, Cocorná, San Carlos, Granada y San Francisco se podían desplazar normalmente lo mismo que el tráfico de vehículos y el ingreso de víveres” (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2003: marzo 29). Esta decisión del ELN es interpretada por los alcaldes y por la gobernación como la resultante de la movilización de la población y de su insistencia en los acuerdos humanitarios.

Es un intento de legitimación de su postura frente el conflicto armado, la gobernación de Antioquia convoca a la realización de una Asamblea Constituyente. Según el Asesor de Paz de la gobernación, Jaime Fajardo, a esta propuesta se llega “luego de 24 meses de estar en los municipios, con los talleres, los eventos municipales y regionales del Plan Congruente de Paz, de sistematizar un proyecto de convivencia y de movilizar a más de 13.000 actores departamentales, entre ellos instituciones, alcaldes y ciudadanía en general” (Periódico *El Colombiano*, Medellín, 2003: 30 de marzo).

En medio de estos preparativos, el 6 de mayo se tiene la noticia del trágico desenlace del secuestro del gobernador y de su asesor de paz, al ser asesinados en medio de un operativo de rescate realizado por el ejército, en un área rural de difícil acceso en el municipio de Urrao. Al verse sorprendidos por la tropa el jefe de las columnas de las

FARC que los tenía retenidos desde hacía más de 13 meses dio la orden de disparar. En los numerosos pronunciamientos con motivo de este hecho se pone de presente una polarización en contra de la guerrilla de las FARC, y posturas encontradas en torno a la viabilidad o no de una solución negociada al conflicto. Sin embargo, el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, haciendo un llamamiento a los violentos “para que reflexionen sobre los efectos negativos de sus actos y en pro de una solución negociada al conflicto” ayuda a disminuir la tensión, y a respaldar la labor pastoral que desarrolla la Diócesis de Sonsón-Rionegro.

En un nuevo cambio de posición, el ELN, a través de su figura más importante en el Oriente Antioqueño, el comandante Timoleón, anuncia su disposición a realizar acuerdos humanitarios. Esto se produce después de haber cometido el secuestro y el asesinato de una maestra en Cocorná que causa gran conmoción, y un airado rechazo al conocerse el móvil de esta acción: una represalia contra el padre de la maestra por haberse negado a dar muerte a un miembro de las autodefensas⁶.

Cuando el tema de los acuerdos humanitarios en el Oriente Antioqueño parecía haber quedado relegado, el nuevo gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (hermano del fallecido gobernador) en agosto de 2004 vuelve a llamar la atención sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el Oriente⁷. En un foro realizado sobre las minas anti-personales anuncia la conformación de una comisión humanitaria que tenga como propósito un acuerdo con los actores armados ilegales para proceder al desminado de varias zonas del Oriente. También en este mismo evento se conoce un pronunciamiento del ELN a favor de diálogos de paz con gobiernos locales⁸. De igual modo las AUC, en proceso de negociación con el gobierno de Uribe, manifiestan su disposición a

6 Con motivo de esos hechos el comando central del ELN anunció una investigación para establecer si hubo o no violación de su propio código según el cual “(...) Cuando se va a realizar un ajusticiamiento se debe contar con la autorización del mando del frente correspondiente, el cual debe de contar con la información suficiente para autorizarlo a negarlo” (Periódico El Colombiano, Medellín : 2003: 5 de junio).

7 El empleo del concepto de crisis humanitaria para enfatizar las infracciones cometidas por los actores armados a normas internacionales es clave en la definición de conductas tipificables como crímenes de guerra y/o lesa humanidad, los cuales además pueden llegar a ser conocidos por tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional.

8 Un segundo elemento en este escenario frente a la crisis humanitaria, fue la presentación por parte del ELN, al gobierno nacional, el 4 de junio, de una propuesta de negociación al presidente Uribe, en la cual se contempla una propuesta humanitaria, que según la exposición de la misma por Francisco Galán en el Congreso debía considerar tres elementos: el primero, limitación al uso de las minas en las zonas donde opera esta organización armada ilegal, El segundo, una amnistía para los presos políticos del ELN en las cárceles colombianas, y el tercero, un cese bilateral del fuego.

contribuir con la remoción de minas antipersonales

El 13 de septiembre de 2004 se expide el decreto 1519 de 2004, mediante el cual se formaliza la conformación de esta comisión, cuyos objetivos se definen en los términos de:

- Propugnar por acercamientos humanitarios con todos los actores armados no estatales.
- Generar compromisos que conduzcan al restablecimiento de los derechos humanos.
- Formular recomendaciones a la Comisión Intersectorial Nacional para la acción contra las minas antipersonales.
- Apoyar las acciones formuladas por el Comité Departamental de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonales y atención integral de las víctimas.

Esta comisión se crea en el momento que el presidente de la República, Álvaro Uribe, reitera ante un grupo de congresistas del Polo Democrático que la realización de contactos y negociaciones con los actores armados al margen de la ley sólo la podía cumplir el Gobierno Nacional.

Al iniciar su trabajo esta comisión⁹ visita los municipios de San Carlos, San Francisco y Argelia para establecer un diagnóstico más preciso sobre la situación de abandono en la que se encuentran veintinueve veredas en San Francisco a raíz de la colocación de minas antipersonales por parte de la FARC, y el confinamiento por este motivo de los habitantes de las veredas Jardín y Buenos Aires, y el desplazamiento de varias familias. Luego, otra delegación de esta comisión se desplaza a Santafé de Rialito, la sede en donde se adelantan conversaciones con las autodefensas para dialogar sobre el desminado.

Ante esta perspectiva la gobernación, las directivas del naciente Laboratorio de Paz y la Iglesia Católica suman esfuerzos para revivir las asambleas comunitarias y preparar la realización de “una jornada de resistencia civil contra las acciones violentas de los actores armados”. Con este propósito se acuerda una agenda de actividades, que incluye la realización de concentraciones en los municipios, foros, y un acto central en Rionegro con la participación de delegaciones de los veintinueve municipios que forman parte del Oriente Antioqueño, y una caravana procedente de Medellín.

En el marco de estas actividades se da a conocer un manifiesto

⁹ De esta comisión forman parte los alcaldes del oriente, la gobernación de Antioquia, la academia, la asamblea de Antioquia, la Iglesia Católica y la campaña colombiana contra las minas antipersonales.

por la vida, en donde se plasma un sentimiento colectivo de rechazo al accionar violento de los actores armados, y de defensa del más vulnerable de todos los derechos, el derecho a la vida.

La comunidad del Oriente y el pueblo antioqueño pedimos a los actores del conflicto armado:

- No a la siembra de minas antipersonales.
- No a los ataques a la población civil.
- No a las muertes selectivas.
- No a la inclusión de los niños y niñas en el conflicto.
- No a los desalojos y desplazamientos forzados.
- No a los bloqueos.
- No a las amenazas a la vida.
- No a la violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
- No al desabastecimiento de las zonas rurales.
- No a las restricciones a la libre movilización.
- No a los atentados a la misión médica.
- No a los atentados a infraestructura energética y de transporte.
- Sí al respeto a la vida por encima de todo: el respeto a la vida es cuestión de humanidad.

Después de esta movilización, en la semana por la paz se efectúa la quinta plenaria regional en Marinilla, con la finalidad de promover una campaña nacional para concretar los acuerdos y compromisos humanitarios por el respeto a la vida, la dignidad y la libertad para Antioquia. Entre las conclusiones de este evento se aboga por la conformación de una comisión para la gestión de un nuevo acuerdo humanitario. Lo novedoso es la importancia que se le asigna al seguimiento de otras experiencias exitosas en el país, el diseño de una estrategia de sensibilización pedagógica y opinión pública que permita entender que “exigir el respeto por el Derecho Internacional Humanitario no es otorgar legitimidad a la guerra y sus actores, al tiempo que deslegitime la comisión de actos que infringen la normatividad humanitaria, conductas muchas veces aceptadas y avaladas por la población civil”. También lo son una campaña pedagógica ciudadana para la comprensión de la iniciativa de los acuerdos humanitarios, y una estrategia de relacionamiento con el

Estado colombiano y los grupos armados ilegales, para que entiendan el sentido de la iniciativa (Asamblea Permanente de la sociedad civil por la paz, 2004).

Después de hacer este recorrido por esta experiencia de las autoridades locales y regionales con los acuerdos humanitarios se evidencian los alcances limitados, parciales y transitorios de los acuerdos logrados.

Pero aquí lo fundamental es tener en cuenta la manera como se hace visible la reacción de una sociedad frente a la guerra, y el desempeño de los alcaldes como mediadores en una permanente búsqueda de acuerdos que mejoren la situación de la población, así ello pueda entrañar una contradicción con las responsabilidades que deben cumplir como representantes del Estado. Al mismo tiempo, pone de manifiesto las ambivalencias del gobierno nacional en el adelanto de su estrategia de negociación con las guerrillas, y de éstas últimas frente a la perspectiva de una solución política negociada al conflicto armado, lo que es particularmente evidente en la guerrilla del ELN.

Pero aún queda pendiente una consideración de la manera como se construyen formas de relación entre las acciones colectivas de resistencia y la participación. De esto me ocuparé a continuación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MEDIO DE LA GUERRA

En el Oriente Antioqueño el impulso a los procesos de descentralización contribuye a la pluralización política, y a la creación de entidades descentralizadas que buscan fortalecer la gestión pública local y articular propuestas particulares y sectoriales en proyectos de desarrollo colectivos. Es el caso de entidades tales como Corporación Cornare, las asociaciones de municipios Masora, Municipios de la zona de embalses (Maser), Municipios Unidos del Suroriente de Antioquia(Musa). Aun tratándose de entidades con problemas de burocratización y clientelismo, las mismas facilitan la construcción de redes de cooperación, especialmente entre los habitantes de municipios alejados del altiplano¹.

También la Iglesia Católica, a través de la labor desarrollada por la Pastoral Social de la diócesis de Sonsón-Rionegro² se consolida como un actor de primera línea en el acontecer local, y en el impulso de diver-

1 Para 1996 el Oriente Antioqueño contaba con una variedad de formas organizativas, 738 juntas de acción comunal, 86 grupos católicos, 86 grupos ecológicos, 44 cooperativas, 30 grupos de mujeres, 29 de economía solidaria, 74 juntas de acueducto veredales (Quiceno, 1997).

2 La Pastoral Social tiene varias ramas. Una es la beneficencia, la ayuda humanitaria en actos de beneficencia, como hacer colectas cuando hay un desplazamiento, por ejemplo, o que hay un pueblo muy pobre. Otra parte es el desarrollo rural y promoción humana, y la comisión Vida, Justicia y Paz.

sas formas organizativas: grupos apostólicos en las parroquias con la participación de madres de familia, grupos de apoyo para el desarrollo de proyectos productivos- montaje de pequeñas granjas y cultivos de pancoger-, y una red de grupos de juveniles. Además, en la figura del arzobispo Flavio Calle, y en los párrocos, las gentes encuentran un garantía de protección que se confirma en la búsqueda del sacerdote para ponerlos al tanto sobre lo que acontece, y su disposición a acatar lo que digan desde el púlpito: “si yo que soy empleado público le digo a una persona que hay que ir a la reunión, entonces no me creen mucho, pero si el Padre les dice, entonces la gente repite sí, es que el Padre dijo que había que ir a la reunión y que era muy importante y lo dijo en misa de siete” (Entrevista con un líder de Sonsón, 2004).

La Iglesia Católica no se ha limitado a promover procesos de base, también cuenta con la comisión “Vida, Justicia y Paz”, un organismo creado en el seno de la Pastoral Social, pero independiente, con vida jurídica propia. Dicha comisión, que lleva unos diez años de creada, se convierte en un organismo rector en materia de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y en acercamientos humanitarios. Ese ha uncionado como el enlace que ha tenido la Diócesis de Sonsón-Rionegro con los diferentes grupos armados para ayudar en la gestión de los acercamientos. Sin embargo, varios de sus integrantes han sido víctimas de amenazas que los han forzado a abandonar la región, empezando por el arzobispo Flavio Calle.

De otra parte, la Iglesia Católica impulsa la conformación de una importante corporación (PRODEPAZ) que representa un esfuerzo de concertación entre entidades con presencia en la región: Interconexión Electrica (ISA) e (ISAGEN), y los empresarios (Comité Empresarial del Oriente). Esta corporación cuenta también con la asesoría del Centro de Investigación y de promoción de la educación popular (CINEP), en representación del programa que sirve como modelo para el Oriente, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Entre los procesos promovidos por esta corporación están los trabajos comunitarios con líderes de veredas y de barrios organizados en núcleos zonales, que reciben capacitación en cultura ciudadana, proyectos productivos, participación democrática, y se convierten en los artífices de un sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) con su contribución al levantamiento de una información sobre sus veredas y barrios. Para mejorar el diseño de proyectos de desarrollo se diseña el programa Sistema de Maduración de Iniciativa (SIMA), formulado por los grupos de veredas con fines productivos, de seguridad alimentaria, ambientales y económicos, para mejorar su capacidad de injerencia en los planes de desarrollo local.

Por su parte, Conciudadanía y la Asamblea por la Paz, organizaciones no gubernamentales con presencia en el Oriente Antioqueño, ponen en marcha ambiciosos proyectos orientados a la construcción de ciudadanía democrática con las escuelas de liderazgo, el impulso a la organización, iniciativas por la paz y una propuesta de conformación de asambleas comunitarias, de la asamblea provincial y constituyente de Antioquia, y una propuesta de construcción de una provincia, como alternativa para enfrentar los desequilibrios generados por el centralismo y la toma de decisiones en la región, y para el desarrollo y la construcción de salidas al conflicto armado.

Esta proliferación de formas organizativas en municipios y veredas debilita al monopolio de la representación ejercido por las juntas de acción comunal, la forma de organización más extendida en áreas rurales y urbanas en Colombia, con una tradición labrada desde fines de la década de 1950 como agente de liderazgo tradicional, personalismo y caudillismo (Velásquez, 2003). Pero ésta mantiene su vigencia como un medio para la solución de necesidades básicas en materia de obras de infraestructura, equipamientos y servicios sociales, y como forma de socialización a través de la cual se recrean lazos de vecindad y compadrazgo³.

Para los años noventa, el Oriente Antioqueño se convierte en un laboratorio donde se ponen a prueba diversas experiencias de organización; desde las tradicionales juntas de acción comunal hasta grupos juveniles con objetivos disímiles. Con todo y los problemas de dispersión que ello acarrea, y la reproducción de lógicas clientelistas, en la medida que el conflicto armado se agudiza, su existencia adquiere nuevos sentidos.

Las amenazas contra entidades, funcionarios y alcaldes genera una situación de inestabilidad, parálisis o el aplazamiento de planes que se venían adelantando, la asesoría a proyectos productivos, y parálisis de las organizaciones, ante el temor de ser objeto de represalias por contrariar las órdenes de los actores armados, o por atreverse a hacer alguna denuncia sobre su presencia en la zona. La contracara de esta situación está dada por el despliegue de variadas iniciativas para la organización y movilización de la población, que va a tener en las asambleas comunitarias su más importante expresión.

Las asambleas comunitarias fueron concebidas en un principio como una estrategia para motivar la participación de la población en el

³ En 1978 ya existían 21.552 juntas de acción comunal, de las cuales el 80% se ubicaron en la zona rural. Estaban afiliadas 1.331.356 personas, el 6% de la población del país. Hoy día existen unas 40.000 juntas la mayoría en las cabeceras municipales (Velásquez, 2003).

tratamiento de temas relacionados con el desarrollo y con la veeduría a la gestión de los alcaldes; luego la atención se desplazó hacia el conflicto armado. A raíz de los bloqueos, las tomas guerrilleras, las amenazas, se produce un aumento en la participación en dichos espacios: “asistían un promedio de doscientos cincuenta a trescientas personas, pero llegamos a tener asambleas de más de mil personas, en los momentos de mayor zozobra. Aunque la gente se dividía, entre si era bueno o era riesgoso asistir, se denunciaba con mucha facilidad atropellos de la guerrilla, de las autodefensas y del ejército” (Entrevista a un líder de San Luis, 2004).

Las asambleas comunitarias se convierten lugares a los que se acude para contar lo que está pasando, para expresar los miedos y el dolor que se siente por la muerte de las personas. La participación adquiere un nuevo significado, puesto que ya no se trata tanto de formular demandas a la administración, como el hecho de sentirse acompañado, darse ánimos, y para “tomar conciencia de la realidad que estábamos viviendo, que vivimos en medio de la guerra. Cuando todo el mundo trataba de tapar, de ir escondiendo lo que está ahí, nadie quería hablar. Que es que en tal parte ocurrió esto, silencio, que no se hable nada de eso” (Entrevista a un líder de El Peñol, 2004).

La asamblea comunitaria funciona como una suerte de espacio público, en donde es posible la expresión y elaboración de los miedos e incertidumbres que se experimentan, para ponerse de acuerdo en la necesidad de brindar respaldo a la máxima autoridad del pueblo, el alcalde, y emprender acciones que demuestren su fortaleza como comunidad ante los actores armados, “que no estamos dispuestos a hacer lo que los armados manden” (Entrevista a un líder de Nariño, 2004)

No por azar estas palabras están en boca de un líder oriundo de uno de los municipios con una de las experiencias más importantes de resistencia civil no violenta, Nariño, donde es la población congregada en una asamblea comunitaria la gran protagonista, logrando una importante victoria que obliga a la guerrilla a ceder en sus pretensiones, aunque de manera transitoria.

A raíz de la intensificación de las acciones de la guerrilla, desde 1998 hay una drástica disminución del turismo y un estancamiento de las actividades económicas y sociales, con la utilización de instalaciones deportivas como sitios de detención de personas, y el reclutamiento de niños y niñas menores de edad. Pero también llega el momento en el que la población se decide a actuar.

El 15 de marzo de 2000 es el día acordado por la población del municipio de Nariño para la realización de su primera asamblea comunitaria. La tensión y el temor se sentían en el ambiente. La gente fue llegando casi sobre la hora señalada, pero en forma masiva, como movida

por una fuerza interna contenida hasta entonces. Se hacen presentes amas de casa, madres comunitarias, trabajadores, campesinos, estudiantes, docentes, funcionarios, comerciantes, deportistas, sacerdotes y religiosas, niños y niñas.

La asamblea se realiza en el mismo coliseo donde las FARC habían convocado a los pobladores, algunos meses después de una toma guerrillera, para comunicar públicamente su dominio territorial. Ahora es la población la que convoca al grupo armado para comunicarle su constitución en asamblea comunitaria permanente. En este espacio, y en presencia del grupo insurgente, el pueblo elige a sus voceros para mantener interlocución permanente con ellos y con cualquier otro que llegue a involucrarse en la vida municipal. Las FARC prometen públicamente respetar esos voceros y continuar con ellos un proceso de discusión.

Pero los comandantes guerrilleros no aparecen. Sin embargo, la población sigue adelante con su asamblea. Cuando una persona intervenía, fue llamada afuera por un guerrillero, quien le comunicó que la reunión debía interrumpirse porque “no estaba autorizada”. El pueblo reaccionó diciendo: “no necesitamos autorización de nadie para reunirnos”, y se declaró en asamblea permanente.

Fuera del coliseo y terminada la reunión, los guerrilleros buscan en sus casas a las personas que habían hecho uso de la palabra. Según ellos, los supuestos promotores de la reunión debían dar explicaciones a su comandante. La población se entera y reacciona rápidamente, reuniéndose en la plaza principal, con el propósito de evitar la retención de estas personas. Nuevamente la comunidad explica a los guerrilleros el objeto de la asamblea y solicita la presencia de un comandante con quien hacer interlocución. Al día siguiente, fueron de nuevo citados los voceros de la comunidad. Debían desplazarse a la zona rural para una entrevista con el comandante. El pueblo se entera y acude una vez más. “Ellos no son promotores ni voceros, dijeron, queremos que el comandante venga acá”; “Lo que se busca es que ellos expliquen al comandante el objeto de la reunión y se concerte un espacio de discusión y de encuentro. No hay ninguna intención de atentar contra su integridad”, dijo el guerrillero al mando (Periódico El Colombiano, Medellín, 2000: marzo 30).

Las gentes, en una demostración de solidaridad, deciden marchar pacíficamente por las calles, invitando a cerrar el comercio y paralizar todas las actividades públicas y privadas hasta tanto no regresaran la mujer y las otras tres personas llevadas por la guerrilla. La marcha llega al templo parroquial, donde la asamblea de nuevo sesionó combinando la reflexión y la oración. A las 2 pm. regresan los emisarios con la noticia de que el comandante acepta reunirse con la comunidad, que recono-

cía la legitimidad de la asamblea, y que oportunamente se avisaría el momento de la reunión.

Así se llega al día viernes 17 de marzo de 2000. La asamblea comunitaria se vuelve a reunir con uno de los comandantes del 47° Frente de las FARC. Bajo la coordinación de una mujer líder, hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones sociales se expresan con seguridad, y reiteran los perjuicios que les ha generado su presencia. Luego escuchan lo que les dice el comandante. Finalmente la población logra el objetivo de la liberación de las personas retenidas, y la euforia es general.

En Sonsón, municipio vecino a Nariño, son también sus habitantes reunidos en una asamblea comunitaria quienes logran ejercer una presión sobre la guerrilla de las FARC para la liberación del alcalde secuestrado, con el propósito de investigarlo sobre su gestión y pedirle cuentas por la incursión o la presencia de los paramilitares en el casco urbano. Es importante señalar cómo esta acción se produce en momentos en que esta administración había logrado avanzar en un proceso participativo, y en planes de desarrollo local. La asamblea comunitaria asume como bandera la liberación del alcalde. Como lo recuerda el ex-personero de Sonsón:

Se hicieron cantidad de marchas, de movilizaciones, cadenas por la vida [...] fue todo un proceso de sensibilización en torno al alcalde William Ospina, que generó una conciencia colectiva, o mejor dicho, se empezó a discutir un tema público, como era el orden público, yo creo que fue allí, donde empezó a gestarse el Laboratorio de Paz, porque era enfrentar la problemática, decirle al ciudadano: “esto nos compete a todos, esto es de todos y solamente así podemos lograr salidas o alternativas a este conflicto” (Entrevista con el ex-personero de Sonsón, 2004).

El haberse hecho público el tratamiento de un problemática que se creía era de exclusiva competencia de las autoridades de policía o del ejército y muy poco de la autoridad civil, tiene implicación en un cambio de actitud de la población, que empieza a hacer exigencias al gobierno acerca de cómo enfrentar el conflicto armado. Pero también el mismo alcalde se siente exigido a responder ante la comunidad por el manejo de un conflicto que trasciende el ámbito local. Es éste el momento en que este y otros alcaldes establecen contactos para buscar alguna salida, con los resultados ya considerados.

En otros casos ya no es la asamblea la que de manera directa enfrenta a los actores, sino quien empodera a los alcaldes para estable-

cer diálogos y poder llegar a algún acuerdo. Gracias a este respaldo es que los alcaldes consideran que tienen en sus manos la posibilidad de darle la vuelta a la condición de indefinición de la autoridad frente a los grupos armados: “es que antes los alcaldes cuando eran citados por la guerrilla o los paras se tenían que ir solos y a escondidas a rendir cuentas pero ya esto cambió, entendieron que tenían que unirse, en vez de ser llamados uno por uno, irse todos juntos a frentiar la situación, como se dice, y decirles: “bueno, aquí estamos todos, para qué nos necesitan” (Entrevista con ex-personero de Sonsón, 2004).

Aunque no siempre las asambleas logran tener continuidad, son reconocidas como una alternativa eficaz, en los momentos que cunde una sensación de alarma frente a la ocurrencia de hechos, que de no ser enfrentados colectivamente pueden llegar a tener resultados catastróficos para la población civil.

Para garantizar la posibilidad de existencia a estas asambleas, sus impulsores diseñan una estrategia para mantener un ambiente favorable al debate público, poniendo el énfasis en la necesidad de la convivencia, y en la construcción de paz. Con frecuencia se convoca a la realización de talleres, foros, campañas “la semana por la paz”, aunque este tipo actividades se llevan a cabo en las cabeceras municipales.

Otra estrategia consiste en la defensa de la neutralidad de las asambleas como un principio rector, para evitar ser encasilladas en un determinado bando, o tener que tomar partido con las estrategias promovidas por el gobierno que privilegian el uso de la fuerza, o su utilización como ámbitos propicio para la caza de votos y su manipulación por partidos y movimientos políticos. Ante lo cual se intenta establecer una regla de juego como la prohibición a los integrantes de la coordinación de participar como candidatos a los concejos.

Estas asambleas se convierten en una paraguas protector que facilita la acción de grupos que realizan actividades artísticas, de defensa del medio ambiente, comunitario, educativo, y en especial de las actividades que desarrollan una nueva generación de líderes, entre los que se destacan la participación de jóvenes y mujeres que se desplazan de un lugar a otro llevando información y promoviendo la organización, convirtiéndose así en los gestores de iniciativas que trascienden lo local. A continuación me referiré a dos de ellas.

La experiencia de mayor impacto y significación es la de las mujeres del Oriente, con la conformación de asociaciones municipales; y en el nivel regional, la Asociación de Mujeres del Oriente (AMOR), con la activa participación en Concejos Municipales, Consejos Territoriales de Planeación, Veedurías Ciudadanas y Juntas de Acción Comunal, y un proyecto de formación de Promotoras de Vida y Salud Mental (PROVI-

SAME) para la capacitación de mujeres en la atención a la población, y en la elaboración de los duelos.

Con dificultades para poder desempeñar su labor como líderes, ante el asesinato de sus familiares, la angustia de no tener noticias de sus hijos en la guerrilla o los paramilitares, o de los desaparecidos y la incertidumbre por no saber qué les pasó, varias mujeres del Oriente Antioqueño se deciden a convertirse en las gestoras de alternativas para sobreponerse a tanto sufrimiento.

Apoyadas por Conciudadanía, un grupo de unas setenta mujeres de varios municipios del Oriente Antioqueño se consagran a la tarea de levantar una información lo más precisa posible sobre la manera en que las familias han sido afectadas por la guerra. De una muestra de población de 2.226 personas recogida entre sus abuelos y abuelas, nietos y nietas, tíos y tías, primos y primas, sobrinos y sobrinas, cuñados y cuñadas, padres y madres, esposos llegan a la conclusión de que entre 1998 y 2003, el 32% de ellas (o sea, 723 personas) recibieron un impacto directo de la guerra (Conciudadanía, 2003).

Como alternativa para enfrentar esta realidad desarrollan el proyecto “Promotoras de vida y salud mental” (PROVISAME), inspirado en la experiencia de otras mujeres centroamericanas durante las guerras civiles de los años ochenta. Así se crea la figura de “primeros auxilios emocionales”, brindados por terapeutas populares: en los talleres y las tertulias informales que se llevan a cabo en los municipios se logra ganar la confianza de personas que acuden para hablar en voz alta de los horrores que daba miedo ventilar a la luz del sol, en una región “donde en los rincones menos esperados hay ojos y oídos de todos los bandos”, para curar muchos resentimientos, y para aprender a convivir entre todas las personas que se habían visto obligadas a tomar partido por uno u otro bando. Ha sido tal la acogida que en la actualidad se hacen planes para extender esta experiencia hacia otros municipios.

Esta experiencia de las mujeres del Oriente Antioqueño corrobora la importancia que, desde la década de 1990, cobra el movimiento social de las mujeres en contra de la guerra. Dicho movimiento se ha caracterizado por el impulso de acciones colectivas de gran envergadura, entre las que se destacan las protagonizadas por las madres de los soldados y policías retenidos por las FARC, encaminadas a pedir al grupo guerrillero pruebas de supervivencia de sus hijos, presionar al gobierno a favor del canje, y solicitar la solidaridad ciudadana en torno a la liberación de los secuestrados; la celebración del Día Internacional de la Mujer como el Día Internacional de la No violencia contra la Mujer, aprovechado para expresar públicamente su rechazo a toda forma de violencia y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado; las movilizaciones que se han realizado en las ciudades y en regiones

más afectadas por el conflicto bajo el lema, que se ha vuelto famoso en Colombia, de “no parir un hijo más para la guerra”, y “las mujeres pazharán”, y la exigencia al gobierno de Álvaro Uribe para abrir espacios de reconciliación basados en el cese al fuego y en acuerdos humanitarios que lleven a la liberación de secuestrados y al retorno de los desaparecidos, y en contra de la militarización de la vida civil (M. García, 2004).

La otra experiencia de particular significación en el Oriente Antioqueño es la que han protagonizado los jóvenes, con la conformación de una red de organizaciones juveniles dedicadas a actividades deportivas, artísticas, culturales, la protección del medio ambiente y en las iniciativas en pro de la convivencia y de la paz. Un ejemplo de los logros obtenidos es la labor de recuperación de la memoria y de elaboración de los duelos promovido por parte de un grupo de jóvenes en Sonsón.

En el año 2002 se empieza a hablar de una campaña para hacer visibles las personas que habían sido asesinadas sin saberse los motivos. A pesar de que ya la cuenta iba en unas doscientas setenta y cinco personas, “la población no veía a esos muertos como sus muertos”, sino como los muertos de otros. La idea era que la gente sintiera que esos también eran sus muertos, y que había que hacer un duelo colectivo del municipio para visibilizarlos como seres humanos, que eran parte de la vida integral del municipio, así hubieran podido resultar por cualquier motivo inmersos en el conflicto armado. Pero el problema era que “muchas familias sentían vergüenza de sus muertos” (Entrevista con un líder de Sonsón, 2004).

Entonces se planean visitas a las casas de la familia “para que prestaran una foto, que nos dijeran cuáles eran sus sueños, qué era lo que ellos pensaban”. De inmediato esta actividad es asumida como propia por parte de la asamblea comunitaria de Sonsón, que también contribuye con la recopilación de información. Una vez que culmina esta labor se procede a la convocatoria de una marcha que se convierte en un acto muy significativo para la población:

Eran doscientos cuarenta nombres, que iban en los carteles que se elaboraron, hacemos una marcha que le da la vuelta al pueblo, y alguna gente no quiso dar los nombres y no quiso que su muerto saliera en esa marcha, y cuando la gente ve la marcha, pasar con ese montón de nombres, la gente empieza a ver que ahí no iba el nombre de los muertos y después con esos nombres, los pegamos en una bandera de Sonsón y los fuimos izando, mientras sonaba una diana de corneta en la plaza, y les pusimos una ofrenda floral. Pasaron ocho días y la gente pasaba y miraba la lista y no estaba su muerto; entonces nos buscaban para decirnos: “y por qué mi muerto no estaba”;

entonces los chicos les decían: “acuérdense que usted me dijo que no”, pero ahora decían “ahora si”, porque la gente pasaba y veía que en los nombres, habían supuestos paramilitares, supuestos guerrilleros, algunos soldados y gente civil y muchos civiles; y los chicos siguen yendo a las casas, y ya con mucho más familiaridad (Entrevista con un líder de Sonsón, 2004).

Hay que decir que entre los jóvenes promotores de esta iniciativa ninguno de ellos había sido afectado de manera directa con la pérdida de algún ser querido, lo que pudo haber favorecido el que fueran apreciados como personas neutrales, y a que tuvieran menos miedo para indagar y hacer pública una realidad tan presente, y al mismo tiempo tan ignorada.

DE LAS ASAMBLEAS A LOS PROCESOS CONSTITUYENTES

El conocimiento de las experiencias de otras asambleas constituyentes (Mogotes, Tolima, y de Tarso) sirve de referencia para el impulso a un proceso constituyente. El 14 de septiembre de 2002 en Marinilla se lleva a cabo una asamblea regional constituyente. Luego se realizan otras ocho asambleas más, en las que se aspira a congregar a las organizaciones sociales, gremiales, de género, políticas, cívicas y territoriales, a los representantes de la comunidad ante los organismos de concertación, y a los ciudadanos y ciudadanas independientes pero interesados en la buena marcha de los asuntos públicos del municipio, a la construcción de un consenso en torno a la acercamientos humanitarios, de una cultura de paz y convivencia, la planeación participativa y la autonomía de la región, como camino para una solución integral a la guerra que azota el Oriente. Así se avanza en la articulación del proceso ya iniciado con las asambleas comunitarias.

Este proceso es coincidente con la estrategia de promoción de la participación ciudadana por parte de la gobernación de Antioquia en las subregiones que forman parte del departamento, y en la implementación de una de las líneas de acción definidas en el plan congruente de paz para el departamento. En virtud de ello se llevan unos ciento diecisiete talleres municipales y regionales, entre el segundo semestre de 2002 y el primer trimestre de 2003 (periódico El Colombiano, Medellín,

2003: 30 de marzo). Cabe anotar que la realización de estas actividades no hubiera sido posible sin la actitud asumida por la guerrilla de no obstaculizarlos, aunque en principio el ELN manifiesta su rechazo al plan congruente de paz.

Al evaluar los resultados obtenidos, el gobernador encargado y el nuevo asesor de paz de la gobernación, Jaime Fajardo, lanzan la propuesta de realización de una Asamblea Constituyente de Antioquia, entendida como “una reunión de ciudadanos, legítimamente seleccionados en forma participativa e incluyente, con el objeto de formar, componer, fundar, establecer y ordenar entre todos los sectores y subregiones unas nuevas reglas de juego ciudadanas, objetivos, propósitos y compromisos que permitan una convivencia pacífica y un mejoramiento de la calidad de vida integral de la población antioqueña” (Gobernación de Antioquia, 2004).

Como temas centrales a debatir en esta asamblea constituyente se plantearon la definición de una propuesta que sienta las bases de una política de estado para la superación del conflicto y la construcción del desarrollo, la filosofía de la no violencia como la base para una cultura y valores de convivencia entre los antioqueños, y un pacto de gobernabilidad que trascienda los periodos de gobierno, asegurando una continuidad en políticas públicas de cumplimiento obligatorio .

Con miras a la preparación de la intervención del Oriente Antioqueño en la Asamblea Constituyente de Antioquia se realiza una reunión de delegados y una asamblea provincial constituyente, en la que se ratifica la pertinencia de los acuerdos humanitarios como alternativa para avanzar en la solución del conflicto, el respaldo al proceso de negociación con las AUC, y a las gestiones para un intercambio humanitario con la guerrilla de las FARC.

Con la participación de unos ochocientos treinta y ocho delegados, y entre los meses de agosto y noviembre de 2003, se adelanta el periodo de sesiones de la Asamblea Constituyente de Antioquia. Entre las conclusiones se destaca la iniciativa de un gran pacto social por la convivencia y el desarrollo para una paz incluyente y participativa, para hacer de Antioquia un laboratorio de paz con un horizonte de reconciliación, sin renunciar al derecho legítimo de seguridad y protección de ciudadanas y ciudadanos, responsabilidad indelegable del Estado, como actor regulador, legal y constitucional, quien debe tener el monopolio legítimo de la fuerza (Gobernación de Antioquia, 2004a).

Al margen de las discusiones sobre la atribución del carácter de constituyente a este evento, lo que interesa subrayar es su significación, para muchos de los que participan, como una oportunidad para expresar sus opiniones y hacerse visibles y ser reconocidos por los poderes centrales “como hacia mucho tiempo no había ocurrido” (Entrevista

con un integrante de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, 2004).

Después de realizado este evento se empieza a producir una disminución en la participación en las asambleas comunitarias. A propósito de esta situación, indago acerca las razones a las cuales se atribuye. Para algunos líderes se debe a los cambios en las administraciones departamental y local, a los problemas que se han presentado para poner en marcha el Laboratorio de Paz, y a los pronunciamientos del gobierno nacional frente a la posibilidad de acuerdos humanitarios.

Pero también hay quienes llaman la atención acerca de la dependencia que se ha generado en las comunidades hacia los alcaldes, "cuando es la comunidad la que debe convocar a sus dirigentes", los bajos niveles de instrucción de los líderes, que los coloca en inferioridad de condiciones cuando se trata de argumentar en pro de las aspiraciones de las comunidades frente a las administraciones; la manipulación que se ha hecho de las asambleas como una forma de obtener beneficios; y el miedo que retorna y hace que la gente se vuelva a replegar sobre si misma. A veces "se siente que realmente puede más el miedo y de alguna manera, la indiferencia frente a esas situaciones, se tiene miedo de ser señalado y de que te miren que vos estás en una marcha en contra de la guerra y se prefiere quedarse en las casas, donde se supone que uno está a salvo, pero no es tal, porque a muchos, es a la casa adonde van a buscarlos precisamente "(Entrevista con una líder comunitaria de San Luis, 2004).

Por otra parte, se ha empezado a generar preocupación por el acelerado proceso de pérdida de población. Así lo considera el director del Laboratorio de Paz, Pedro Chica, para quien es necesario indagar qué ha pasado con la gente: "uno se da cuenta que para el año 1998, el 70% de la población del Oriente Antioqueño era rural, era campesina, y si hoy hablamos de municipios que han perdido el 50% de la población, por el desplazamiento forzoso, ¿entonces dónde esta la población? (Entrevista con Pedro Chica, 2004).

Vista de conjunto esta experiencia de participación, es necesario poner de relieve varios asuntos:

En la constitución de las asambleas como un espacio para hacer públicos los miedos que se experimentan y la manera de enfrentarlos. En términos de Lechner, se trataría de un ejercicio comunicativo que ayuda a la construcción de una base subjetiva, sin la cual no es posible la cohesión social y la construcción de relaciones de confianza (Lechner, 2004:54).

El arriesgado ejercicio de participación en medio de la guerra, ha contribuido al proceso de construcción de sociedad civil, que se

caracteriza por formas de relación fluidas y cambiantes entre Estado y sociedad, como lo demuestran los nexos entre los alcaldes y la población; aunque al mismo tiempo se establecen límites que están dados por la necesidad de preservar una imagen de neutralidad, para mantener la existencia de estos espacios de deliberación.

No obstante las presiones ejercidas por los actores armados para impedir o capitalizar a favor de sus intereses estos procesos participativos, las experiencias del Oriente Antioqueño demuestran los intentos de la población por no dejar escapar la posibilidad de ejercer el derecho a reunirse, a deliberar y tomar decisiones sobre los asuntos que consideran afectan sus vidas.

En las asambleas comunitarias se plasma un ejercicio de la ciudadanía desde una perspectiva de modernidad, cuando se plantea el problema de los derechos y el reclamo de presencia del Estado desde la perspectiva de la concertación con los intereses locales, mas no desde la imposición de políticas que se considera no consultan las demandas de población ni las realidades que estas afrontan, en zonas que se han convertido en epicentros de la guerra.

La experiencia de las asambleas comunitarias presenta elementos en común con procesos que han tenido lugar en otros países de América Latina. Es el caso de la experiencia asamblearia de las organizaciones piqueteras en Argentina analizada por Svampa (2004), en donde se destaca la importancia de esta dinámica como lugar de potenciación de la política, al instaurar un espacio de deliberación y de toma de decisiones más democrático y participativo, y de construcción de un sentido más colectivo de lo político.

LA INSERCIÓN EN LO GLOBAL: EL RECONOCIMIENTO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO COMO LABORATORIO DE PAZ

Con la aprobación por parte de la Unión Europea de un ambicioso proyecto, el Laboratorio de Paz, las experiencias de resistencia civil no violenta y participación del Oriente antioqueño desbordan el marco de lo local, para formar parte de un proceso más amplio tendiente a la construcción de paz y la promoción del desarrollo en regiones de alta conflictividad.

La primera experiencia de un Laboratorio de Paz se desarrolla en el Magdalena Medio (Laboratorio de Paz I) a partir del año 2002, en trece poblaciones de esta conflictiva región¹. Los logros obtenidos motivan a la Unión Europea a extenderla. Con tal fin se hacen visitas a otras regiones, y se toma la decisión de apoyar otras experiencias; así es como surge el laboratorio II, para apoyar las experiencias del Oriente de Antioquia, Norte de Santander (Catatumbo) y el Macizo Colombiano (el Alto Patía, entre Nariño y Cauca).

En el Oriente Antioqueño son los alcaldes quienes hacen las veces de intermediarios para interesar a la Unión Europea en el apoyo a los

¹ En el Informe de Desarrollo Humano 2003 “El Conflicto, callejón con salida” los laboratorios de Paz se destacan como una de las opciones más apropiadas y como expresión de la disposición de los Estados europeos a la promoción de una opción no militar, a pesar de que tienen menos interés y menos influencia que Estados Unidos.

procesos que se desarrollan en esta región. Esto contribuye a la creación de un ambiente favorable a esta iniciativa. En octubre de 2003 se realizan contactos con varias embajadas de países europeos.

En el proceso de negociación para concretar este proyecto interviene el gobierno nacional. El convenio con la Unión Europea se firma el 22 de diciembre de 2003, actuando en representación de Colombia la canciller Carolina Barco. Luego, en febrero de 2004, viene la oficialización del compromiso de la gobernación de Antioquia con el gobierno nacional y la UE con las veintitrés alcaldías del oriente, que se verán beneficiadas con una ayuda de 14 millones 490 mil euros, de los cuales 10 millones 605 mil euros, estarán destinados a reforzar los siguientes ejes estratégicos: implementación de una cultura de paz, derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y una vida digna; gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana; desarrollo socioeconómico sostenible que mejore las condiciones socioeconómicas de la población, en armonía con el medio ambiente.

A este acuerdo se llega desde perspectivas disímiles. Para la Unión Europea, por ejemplo, el apoyo a los Laboratorios de Paz representa una oportunidad para demostrar las virtudes de una estrategia que se diferencie de los planes de ayuda norteamericana orientados a la lucha antidrogas, y con énfasis en el componente militar. Si bien es cierto, como anota Reis (2004), que los Laboratorios de Paz no son una propuesta originalmente europea, al ser parte integral de una línea de desarrollo y paz compartida por el gobierno colombiano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)² y el Banco Mundial (BM), en Colombia se les asocia a las estrategias de ayuda promovidas por la UE para fortalecer opciones en pro de la convivencia y la construcción de la paz.

Pero la Unión Europea no es el único actor con interés en la marcha de este tipo de iniciativas de alcance estratégico.

Para el gobierno de Álvaro Uribe, el apoyo a los Laboratorios de Paz se plantea como un componente de su política social³. Esto explica

² Se trata de las experiencias más importantes que se han desarrollado en Colombia como la resultante de un alianza entre la Iglesia Católica (Diócesis de Barrancabermeja, El Cinep) la empresa estatal Ecopetrol, la unión sindical obrera (USO) entre otras organizaciones sociales para la construcción y puesta en práctica de una propuesta de desarrollo integral en la región del Magdalena medio, a partir de una identificación las dinámicas culturales, políticas económicas que generan exclusión y violencia y la definición de unas líneas de acción que apunten a su superación, a la construcción de un espacio público para la resolución de los conflictos y la construcción de sociedad civil. Para un conocimiento de más en detalle, ver De Roux, 1999.

³ En el plano social, la política incluye una estrategia de “Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto” basado en la articulación gobierno-sociedad civil, el control social, y la participación. Dos componentes de la estrategia son: a) El programa “Familias Guarda-

el interés en la obtención de una ayuda de la UE para la financiación de proyectos de desarrollo, especialmente en regiones que, como el Oriente Antioqueño, son objeto de especial atención por lo que representan para la marcha de la economía, y en la geopolítica de la guerra. Según la percepción de algunos líderes “tal vez en ello Uribe haya visto un campo de experimentación para la paz, dejándonos el corazón a nosotros, mientras que él continúa con la mano dura” (Entrevista con un líder de San Luis, 2004).

Ahora bien, para el gobierno departamental, la marcha del Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño representa un avance en el impulso del movimiento de no violencia. Sin embargo, el apoyo del gobierno nacional al Laboratorio de Paz implica una mayor injerencia en los destinos de la región, lo que plantea tensiones en esta relación entre poderes regionales y el poder central. Esto es lo que explica pronunciamientos desde la gobernación de “respeto a la autonomía de una experiencia que riñe con cualquier intención que se tenga de tomar el Laboratorio de Paz como un espacio para otros propósitos gubernamentales, que no por menos importantes o válidos, tengan la debilidad de carecer de la necesaria concertación con la comunidad y de interpretar los intereses de la subregión” (Prieto, 2002).

Pero tampoco la gobernación es una instancia homogénea. A su interior se expresan posturas que dan cuenta del ambiente de polarización predominante, a favor o en contra de la perspectiva de negociación política al conflicto armado, y por ende de las posiciones a asumir frente a los acuerdos humanitarios y el impulso al movimiento de no violencia. Estas diferencias se expresan en los debates de la asamblea departamental para la aprobación del plan de la gobernación (“Antioquia un lugar para la vida”), lo que dificulta la aprobación de iniciativas relacionadas con la promoción de una pedagogía de la no violencia, una cultura de la convivencia, y de experiencias de construcción de paz.

De otra parte, el Laboratorio de Paz es visto por los alcaldes del Oriente Antioqueño (ahora ex-alcaldes) como un reconocimiento a la labor desarrollada en pro de los acuerdos humanitarios, una respuesta alternativa a la declaratoria de esta región como zona de rehabilitación, y como una posibilidad para la implementación de ciertas líneas de acción definidas en el Laboratorio, como los acercamientos con los actores armados ilegales que continúan haciendo presencia, la simultánea discusión de una agenda de equidad social por tantos años aplazada, y

bosques”, el cual promueve la reforestación como herramienta de sustitución de cultivos (mediante un subsidio familiar) y b) el apoyo a los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) y los Laboratorios de Paz. Los PDP representan iniciativas regionales de la sociedad civil que han construido capital social en regiones complejas, focalizados en poblaciones vulnerables y basados en principios del desarrollo humano integral.

en la convocatoria a un debate sobre las autonomías territoriales, para responder a los retos de una nueva gobernabilidad -más participativa que “supere nuestras crisis de democracia, legitimidad del Estado y vigencia de los Derechos Humanos, del desarrollo social y económico sustentable, en sintonía con las exigencias y paradigmas del nuevo siglo y el auge por un mundo globalizado” (Periódico El Colombiano, Medellín ,2002: 2 de octubre).

Con todo, los alcaldes no son el único actor que ha contribuido a este logro del laboratorio, y con posible incidencia. En el Oriente Antioqueño, como se ha señalado, ha sido preponderante el papel de la iglesia, empresarios y ONG, entre otros sectores.

Por razones históricas, y por la importancia de la labor pastoral que ha venido desarrollando la Diócesis de Sonsón Rionegro, la Iglesia Católica ha puesto el mayor interés en la implementación de esta experiencia del Laboratorio, mediante su participación en PRODEPAZ y en la asesoría de CINEP (Centro de Investigación y educación popular), la organización no gubernamental de la Compañía de Jesús, actor de primera línea en el impulso a los Laboratorios de Paz en el país. Pero la salida forzosa por amenazas del arzobispo de la Diócesis de Sonson Rionegro, Flavio Calle, ha disminuido la capacidad de mediación de la Iglesia Católica.

Para los empresarios y las instituciones del Estado que han tenido presencia en el Oriente Antioqueño, esta región es importante no sólo por los recursos hídricos y de generación de energía, sino también como un escenario propicio para el diseño e implementación de políticas sociales que permitan superar un enfoque remedial para atenuar los perjuicios causados con la construcción de obras de infraestructura. El Laboratorio de Paz es valorado como una oportunidad para promover el desarrollo local y la autogestión de las comunidades. No obstante, la labor que desarrollan es vista con alguna reserva por parte de sectores de la población que consideran que no se ha dado el vuelco que se requiere en su compromiso con la región, y por lo que consideran una falta de respaldo a iniciativas en materia de paz y una solución negociada al conflicto armado.

En lo que concierne a las organizaciones no gubernamentales, el Laboratorio de Paz es reconocido como una gran oportunidad para avanzar en la construcción de ciudadanía y un movimiento social por la paz, y en la generación de propuestas para una solución negociada al conflicto, como ha ocurrido con los acuerdos humanitarios. Pero la presencia de estas organizaciones no deja de ser vista con desconfianza por parte de sectores que ven en ellos una caja de resonancia de las propuestas de la guerrilla, y un obstáculo para el progreso de la región.

Ahora bien, estas visiones y expectativas frente al Laboratorio

de Paz no en todos los casos coinciden con las preocupaciones y con las percepciones que se comportan por parte de líderes comunitarios y gente del Oriente. En las respuestas planteadas a la pregunta sobre la significación que se le atribuye al Laboratorio de Paz y la ayuda de la UE se vuelve a poner de presente el peso de la desconfianza y de visiones localistas que, de una forma u otra, ponen el acento en los perjuicios que podría acarrear la presencia e injerencia en los destinos de la región de actores extraños a la misma.

Igualmente son reveladoras las inquietudes planteadas con respecto a:

Pérdida de autonomía. Hay preocupación por un encuadramiento del Laboratorio de Paz en las estrategias de la seguridad democrática de Uribe, pues se aprecia que con ello se afectaría una imagen de neutralidad que se considera ha sido un signo distintivo del Oriente Antioqueño, y por consiguiente, de los acuerdos humanitarios.

El centralismo. En relación con lo anterior está el temor de bajar la guardia frente al centralismo, “de que no resultemos tragados por la gobernación de Antioquia, ni por el centralismo bogotano”. En ello se encuentra una razón más para mantener en alto la bandera de la provincia. Este tipo de preocupación se hace extensiva a la UE, por el riesgo de terminar trabajando para satisfacer sus condicionamientos para la entrega de las ayudas y el tipo de proyectos a desarrollar.

Burocratización. Se manifiesta un descontento por su institucionalización, que ha conllevado una pérdida de su base comunitaria, y ha opacado un poco la labor cotidiana desarrollada por los líderes, en beneficio de técnicos o burócratas venidos de afuera que desconocen las demandas de la población -“el sentir campesino”-, y amenazan con dejar sin trabajo a personas competentes oriundas de la región. A causa de ello se piensa que podría verse afectada la marcha de proyectos que no deberían ser evaluados con los parámetros rígidos, dado el contexto en el cual tienen lugar.

La división de las comunidades. Con la llegada de los euros se aprecia que se corre el riesgo de aumento de las competencias por la distribución de los recursos, y una pérdida de sentido de esa noción del bien común que ha sido fundamental en la experiencia del Oriente y en la construcción del Laboratorio: “es que entonces todas las organizaciones comunitarias sociales vinculadas al Oriente, también entran en esa misma dinámica, de querer tener proyectos financiados por la UE, y así se va reduciendo el norte; queda muy poca gente pensando en el Laboratorio de Paz”. A ello se suma la preocupación por “la llegada de los politiqueros que sí saben más que cualquiera de aprovecharse de los recursos las oportunidades para robar y para colocar a sus protegidos en los puestos claves del Laboratorio de Paz”.

Las amenazas de los actores armados. Aunque hasta el momento ni la guerrilla ni las autodefensa han llevado a cabo acciones de sabotaje al Laboratorio de Paz, se considera que tampoco este proyecto se podrá llevar adelante sin contar con su aprobación, o al menos su disposición a respetar los proyectos previstos. Esto conduce a algunos sectores a insistir en los acuerdos humanitarios, como una línea de acción central en el Laboratorio de Paz.

En este tipo de apreciaciones se revela el arraigo de una cultura de la desconfianza muy propia de lugares en donde se ha vivido con mayor intensidad la confrontación armada, y que se plasma en lo que De Roux (2003) ha denominado unas “sensibilidades colectivas homogéneas”, resistentes a las transformaciones en las que pueden tener alguna injerencia actores diferentes a aquellos con los que siempre se ha tenido relación. También en ello se puede leer el peso de una visión idealizada de lo local y lo comunitario como lo bueno y lo puro, en riesgo de ser contaminado.

De todas formas, la confluencia de sectores que desde la esfera de lo público, lo privado y lo comunitario han hecho del Laboratorio de Paz una causa común se constituye en una oportunidad privilegiada para superar la fragmentación, y para el reconocimiento de las diferencias frente a temas como la paz y el desarrollo.

Sin embargo, los retos que este proyecto del Laboratorio de Paz, apenas en ciernes debe encarnar no son nada fáciles. Como lo ha demostrado la experiencia del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, los proyectos a desarrollar requieren de diagnóstico detallados sobre la problemática de cada una de las subregiones, municipios y localidades, lo que demanda una combinación del saber académico y el de las propias comunidades, condición necesaria para su legitimidad.

La marcha del Laboratorio de Paz reúne las condiciones para ser considerada una práctica de paz en donde se generan y anticipan muchas de las estrategias que deberán llevarse a cabo una vez que se logre una exitosa negociación del conflicto en su conjunto. Pero también ello conlleva cambios en la labor de los mediadores, puesto que ya no se trataría tanto de facilitar acercamientos con los actores ilegales, sino del diálogo y la interacción con las comunidades y las autoridades locales, y con los grupos de poder; labor que, como lo ha demostrado la experiencia Magdalena Medio, requiere de un trabajo paciente y discreto para crear un ambiente de confianza y un manejo adecuado de las tensiones

Tampoco es fácil llegar a construir consensos en torno a propuestas viables técnicamente, y que además logren expresar “el alma de los pueblos”, como afirma De Roux . En ello es necesario un avance paulatino. Sin embargo, la experiencia acumulada que se dispone en el

Oriente en la elaboración de proyectos y planes de desarrollo constituye un factor a favor, aunque es débil su articulación en un proyecto de construcción de región en donde no se piense sólo en la autonomía, sino también en formas de articulación respecto a la nación y al mundo.

El otro gran reto es que el tiene a su interior el Laboratorio de Paz para constituirse como un espacio de deliberación en torno a las distintas visiones que se comportan frente a los temas de la paz, la convivencia y el desarrollo, y que por el imperativo de la unidad y la concertación para enfrentar los actores armados aún no han sido los suficientemente planteadas ni esclarecidas.

No obstante la importancia política que implica el aval de la UE, la intensidad de la confrontación armada en el Oriente Antioqueño le confiere fragilidad a esta propuesta. Pese a todo, el ejemplo del “Programa para el Desarrollo y la Paz” en una región igualmente estratégica como el Magdalena Medio, alienta a continuar en la labor de construir de un horizonte de futuro en tiempos difíciles.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: RESISTIR, SOBREVIVIR Y SOÑAR

Con esta mirada exploratoria a las variadas estrategias mediante las cuales la población civil intenta sobreponerse a los impactos del conflicto armado y avanzar en la construcción de formas de respuesta a los intentos de dominación basados en el uso del terror, la intimidación y la represión, espero haber contribuido a la visibilización de esta experiencia. Como se señaló en este ensayo, no se trata de una ejercicio aislado de resistencia civil no violenta, dada la existencia en otras regiones del país de experiencias no menos relevantes, aunque en el Oriente Antioqueño se presentan ciertas particularidades que es necesario no perder de vista.

El eje de las acciones colectivas de resistencia civil ha girado en torno a la búsqueda de acuerdos humanitarios con guerrillas y auto-defensas, especialmente en aquellos territorios epicentro del conflicto armado y en donde se generan acciones colectivas en torno a este objetivo por parte de sectores de la sociedad, el Estado a nivel local (los alcaldes) y la Iglesia Católica.

En las formas de respuesta a los mecanismos de control que han intentado imponer los actores armados, subyace una noción de dignidad y lucha por una autonomía regional, como una estrategia para lograr niveles de desarrollo más equitativos, explorar nuevas formas de relación con los poderes centrales, y de resarcimiento de los perjuicios

que les ha acarreado procesos de modernización no concertados con la población.

La experiencia del Oriente Antioqueño también es demostrativa de la tentativa de vindicación de la política entendida como la construcción colectiva de un orden social afincado en el diálogo en medio de la confrontación, ante la necesidad de aunar esfuerzos para la defensa de intereses comunes, sin tener que tomar partido por ninguno de los bandos en contienda. Sin la existencia de esta esfera pública no hubiera sido posible su inclusión en los proyectos de paz y desarrollo.

Si bien es cierto que la existencia del conflicto armado le asigna un nivel de complejidad a este tipo de experiencias de resistencia civil no violenta, no dejan de ser llamativos algunos elementos en común con otras modalidades similares que han tenido lugar en países de Centro y Sudamérica en contra de las violaciones a los derechos humanos, y en la perspectiva planteada por los nuevos movimientos sociales de una articulación entre la contestación y la construcción de alternativas de alcance estratégico para el mejoramiento de la defensa de los derechos y de la calidad de vida de la población.

En las inquietudes formuladas por diversos sectores sociales con respecto a las posibilidades de continuidad en los procesos de participación y frente a la viabilidad del Laboratorio de Paz, se pueden leer algunos de los dilemas planteados entre los anhelos de autonomía regional, y los costos que conlleva el amoldarse a los condicionamientos que se derivan del apoyo recibido por una instancia global, como es la Unión Europea.

Otro gran desafío tiene que ver con la superación de la dicotomía entre participación y representación, lo que plantea una resignificación de la política, y del papel de los partidos. Como nos lo recuerda Fernando Escalante, querámoslo o no, la representación política requiere de la intervención nunca transparente de los partidos, y la gestión adelantada por una maquinaria de intermediación que es obra propia de la clase política, llamada a cumplir no con el papel de intermediaria de los intereses privados, sino de las demandas sociales y de intereses comunes que puedan apuntalar la construcción de órdenes democráticos.

No menos importante para la consolidación del Laboratorio de Paz son las formas de relación entre lo local y lo global, lo que también requiere de una mirada crítica frente a los efectos negativos de una formas de globalización, pero sin colocarse de espaldas a la misma, en un repliegue excluyente hacia lo local. La defensa de lo propio requiere más que nunca articulación a procesos de orden global que faciliten la transmisión de experiencias, los aprendizajes de los fracasos y de los logros obtenidos, y también en la transformación de los sujetos sociales que encarnen los ideales democráticos.

En este plano es necesario ayudar a cerrar la brecha entre la existencia de escenarios globales alternativos, pero sin mayor proyección ni articulación con escenarios regionales, como el Foro Social Mundial. Es precisamente en este tipo de espacios donde se debe plantear la discusión de problemáticas globales, y avanzar en la construcción de consensos y formas de acción que contribuyan a delinear un futuro más esperanzador, en un claro deslinde contra toda forma de terror, violación de los derechos humanos, y la exclusión y discriminación de sectores de la población mundial.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Alfredo (2003) “Resistencia indígena ante la nueva invasión” en *Memorias del Encuentro Internacional de resistencia civil: Estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y de globalización* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).
- ACNUR (2003) *Balance a la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia. 1999-2002* (disponible en www.acnur.org). Consulta realizada el 20 de octubre de 2003.
- Aguilar, Carlos (2004) “Mesoamérica en la hora de la resistencia popular” en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO), Vol 5, N° 13
- Álvarez Sandoval, Rafael (2003) “La resistencia como forma de hacer política del Zapatismo ante la IV guerra mundial contra la humanidad” en *Nómadas* (Bogotá: Universidad Central) N°. 19.
- Amin, Samin y Houtuart, Francois (2003) *Mundialización de las resistencias. Estado de las luchas 2002* (Bogotá : Ediciones desde abajo).
- Arcila, Ramón Emilio (1986) “El movimiento cívico del Oriente Antioqueño. 1981-1985” en *Los movimientos cívicos* (Bogotá: Cinep).

- Asamblea Permanente de la sociedad civil por la paz (2004) *Declaración final del V Plenario Regional* realizado en Marinilla el 13 de noviembre de 2004 (Marinilla: documento sin publicar).
- Berrón Gonzalo y Frerire, Rafael (2004) “Los movimientos sociales del Cono Sur contra el mal llamado libre comercio” en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO), Vol. 5, N° 13.
- Bobbio, Norberto (et al) (1993) [1987] *Diccionario de política* (Bogotá: Siglo XXI).
- Caldón, José Domingo (2003) “Pueblos indígenas y resistencia a la guerra” en *Memorias del Encuentro Internacional de resistencia civil: Estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y de globalización* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).
- Calvino, Italo (1989) *Seis propuestas para el próximo milenio* (Madrid: Siruela).
- Cenics, Cornare (1989). *Determinantes sociales y culturales para la planeación en la región Rionegro-Nare* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Codhes Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (2002) *Desplazamiento, implicaciones y retos para la gobernabilidad, la democracia los derechos humanos en II Seminario Internacional sobre desplazamiento en Colombia* (disponible en: www.codhes.org.co/balance/políticas/población.htm).
- Conciudadanía- Asapaz (2003) *Promotoras de Vida y Salud Mental. Experiencia piloto de formación de mujeres lideresas sociales en territorio de conflicto armado. Sistematización de la experiencia en el oriente antioqueño* (Medellín: sin publicar).
- Corporación Programa Desarrollo para la Paz, Prodepaz (2001). *Bitácora: Hacia una incorporación de la mirada histórica al ejercicio de la planeación regional* (Medellín, sin publicar).
- Cubides, Fernando et al. (1989) *Colonización, coca y guerrilla* (Bogotá: Alianza Editorial).
- Departamento Nacional de Planeación (2002) *La paz un desafío para el desarrollo* (Bogotá: Dane).
- De Roux, Francisco José (1999) “El Magdalena Medio en el centro del conflicto y la esperanza” en *Controversia* (Bogotá: Cinep), N° 174.

- Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (2000) *El Impacto de la descentralización en los municipios del departamento de Antioquia. Subregión Oriente* (Medellín: ESAP), tomo III.
- García Durán, Mauricio (2004) “Colombia: Retos y dilemas en la búsqueda de la paz” en *Controversia* (Bogotá) Número extraordinario.
- García, Clara Inés (2004) “Resistencias: análisis comparado de la acción colectiva frente a la guerra en Urabá y en el Oriente Antioqueño” en *Nómadas* (Bogotá: Universidad Central de Colombia) N° 20.
- García, Marta Cecilia (2004) “Las luchas sociales en Colombia: resistencia frente a la guerra” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) ,Vol 10, No1.
- Giraldo, Jorge (2001) *El rastro de Caín. Una aproximación filosófica a los conceptos de guerra, paz y guerra civil* (Bogotá: Escuela Nacional Sindical)
- Gobernación de Antioquia (2004) “Proclama por un pacto social para Antioquia” (en línea) disponible en www.colombia_no violencia.gov.co/html/doc_consulta.html, consulta el 5 de agosto de 2004.
- Gobernación de Antioquia (2004a) “Informe de participación” (en línea) disponible en www.colombia_no violencia.gov.co/html/doc_consulta.html, consulta el 5 de agosto de 2004.
- Gonzáles Posso, Camilo “Negociaciones con las FARC 1982-2002” en *Controversia* (Bogotá) Número extraordinario.
- González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez Teófilo (2002) *Violencia y política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de Estado* (Bogotá: Cinep).
- Green, Abadío (2003) “Con la historia, por la historia y contra la eterna historia, seguimos siendo pueblos en resistencia” en *Memorias del Encuentro Internacional de resistencia civil: estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y de globalización* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).
- Grupo del oriente para el seguimiento a la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (2003) *Situación humanitaria del oriente antioqueño* (Medellín: sin publicar).
- Hernández Lara, Jorge (2002) “La resistencia civil en caliente: una contribución a la pacificación del conflicto en Colombia” en *Sociedad y Economía* (Cali), N° 2

- Hernández, Esperanza (2004) “Obligados a actuar. Iniciativas de paz desde la base en Colombia”, en *Controversia* (Bogotá), Número extraordinario.
- Instituto de Estudios Políticos y Secretariado Nacional de Pastoral Social (2001). *Desplazamiento forzado en Antioquia. 1985-1998* (Bogotá: Conferencia Episcopal de Colombia).
- Instituto de Estudios Regionales (INER) Dirección de Regionalización (2001). Bases para el Plan Estratégico Decenal de Inserción de la Universidad de Antioquia en las regiones. oriente antioqueño (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Isaza, Ramón (2004) Discurso leído por el Secretario de la Cámara de Representantes en nombre del comandante general de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio (Bogotá: Congreso de la República).
- Jaramillo Panesso, Jaime “Desminado y quiebrapatatas” (en línea) en Periódico *El Mundo* disponible en www.el mundo.com/2204/08/29/index/html, consulta el 5 de septiembre de 2004.
- Lazarte Rojas, Jorge (2001) “Entre dos mundos: la cultura política y democracia en Bolivia” en Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés (comp.) *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas* (Buenos Aires: Paidós).
- Lechner, Norbert (1986) *Los patios interiores de la democracia* (Santiago de Chile: Flacso).
- Lechner, Norbert “¿Cómo reconstruimos un nosotros?” en Revista *Foro* (Bogotá: 2004)
- León, Juanita (2004) *No somos machos, pero somos muchos* (Bogotá: Norma).
- López, Olga Lucía (2003) “Alianza para la reconstrucción integral de Granada Antioquia” en *Alianzas locales para la Paz en Colombia* (Bogotá: Banco Mundial/Fundación Corona).
- Marulanda García, David (1999) “Consejo de Conciliación y Fundación Rioclaro: una alianza para el desarrollo social como estrategia para afrontar el problema de la violencia en San Luis, Antioquia” en *Alianzas Locales para la superación de la pobreza* (Bogotá: Banco Mundial/Fundación Corona).

- Meertens, Donny “Género, desplazamiento, derechos” en *Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra exclusión y desarraigo* (Bogotá: ACNUR).
- Melo, Jorge Orlando (1989) “La política antioqueña 1904-1946” en *Historia de Antioquia* (Medellín: Suramericana de Seguros).
- Ortiz, Carlos Miguel (1985) *Estado y subversión en Colombia* (Bogotá: CEREC).
- Palacios, Maria Cristina (2004) *El conflicto armado y el desplazamiento en Caldas. Crisis de la institucionalidad familiar* (Manizales, Gobernación de Caldas-Universidad de Caldas).
- Pecaut, Daniel. (2001) *Guerra contra la sociedad* (Bogotá: Planeta).
- Pecaut, Daniel (2003) *Violencia y política en Colombia* (Bogotá: Universidad de Valle).
- Pecaut, Daniel (2003a) *Midiendo fuerzas* (Bogotá: Planeta).
- Pizarro León Gómez, Eduardo (2002) “Colombia guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua”, en *Análisis Político* (Bogotá), Vol. 46.
- Pizarro Len Gómez, Eduardo(1992) *Las FARC. De las autodefensas a la combinación de todas las formas de lucha. 1949-1966* (Bogotá: Tercer Mundo Editores).
- Presidencia de la República (2002) Política de seguridad democrática (en línea) disponible en <http://www.presidencia.gov.co>, consulta en julio 10 de 2004.
- Presidencia de la República (2004) Situación de desplazamiento en Antioquia (en línea) disponible en <http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio>, consulta en diciembre 13 de 2004.
- Prieto, Eugenio (2002) Discurso del gobernador de Antioquia ante la sesión de clausura del encuentro subregional del Oriente Antioqueño (Carmen de Viboral: sin publicar).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2004) Informe sobre La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, en línea. <http://www.pnud.org.co>.
- Quiceno, Francisco de Paula (1997) *Diagnóstico de las organizaciones comunitarias del Oriente Antioqueño* (Medellín: Universidad de Antioquia)

- Ramírez, Ernesto y Serna, Daniel (2003) “Una estrategia de resistencia civil no violenta frente al conflicto armado” en *Memorias del Encuentro Internacional de resistencia civil: estregias de acción y protección en los contextos de guerra y de globalización* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia).
- Ramírez, William (2000) “Violencia, Guerra civil, contrato social” en *Colombia en el cambio de siglo. Balance y perspectivas* (Bogotá: Planeta).
- Randle, Michel 1998 (1994) *Resistencia civil*. (Barcelona : Paidós)
- Rangel, Alfredo (2001) *Guerra insurgente* (Bogotá: Intermedio Editores).
- Reis, Bettina (2004) “La estrategia de cooperación de la Unión Europea en Colombia con énfasis en los Laboratorios de Paz. Objetivos, resultados, viabilidad y perspectivas” Ponencia presentada en el Seminario-Taller “*Balance y Perspectivas de las Relaciones Políticas y de Cooperación entre la UE y Colombia*”, Cataluña.
- Romero, Mauricio (2004) “ Negociaciones de paz con la guerrilla y los paramilitares” en *Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra exclusión y desarraigo* (Bogotá:ACNUR/ Universidad Nacional).
- Romero, Mauricio (2003) *Paramilitares y autodefensas 1982-2003* (Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia).
- Quijano, Aníbal (2004) “El laberinto de América Latina ¿hay otras salidas?” en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO), Vol 5, N° 13.
- Sáenz, Orlando (1986) “Desarrollo Regional y movimientos cívicos en el Oriente Antioqueño. 1960-1982” en *Los movimientos cívicos* (Bogotá: CINEP).
- Sánchez, Gonzalo (2000) “Guerra prolongada, negociaciones inciertas en Colombia” en *Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos* (en línea) disponible en [www.ifeanet.org/bulletin/29\(3\)](http://www.ifeanet.org/bulletin/29(3)).
- Solón, Pablo. 2003 “Radiografía de un febrero” en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO), N° 10.
- Svampa, Maristella (2004) “Movimientos sociales y nuevas practicas políticas en Argentina, las organizaciones piqueteras” en *Nómadas* (Bogotá: Universidad Central), No 20.

- Uribe, María Teresa. (1996) “Lo viejo y lo nuevo en la crisis política colombiana” en *Estudios Políticos* (Medellín: Instituto de Estudios Políticos) N°. 7-8.
- Uribe, María Teresa; Álvarez, Jesús María (1999) *Raíces del poder regional: el caso Antioqueño* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Uribe, María Teresa (2002) “Emancipación social en un contexto de guerra prolongada. El caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Democratizar a democracia – os caminhos da democracia participativa. (Rio de Janeiro: Civilicao Brasileira).
- Uribe, María Teresa (2003) “La negociación de los conflictos en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades” en Nación, ciudadano y soberano (Medellín: Corporación Región).
- Uribe, María Victoria y Vásquez Teófilo (1995) *Enterrar y callar. Las masacres en Colombia, 1980-1993* (Bogotá: Comité permanente para la defensa de los derechos humanos).
- Velásquez, Fabio (2003) ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? (Bogotá: Fundación Corona).
- Zuluaga, Jaime (2004) “ La guerra interna y el desplazamiento forzado” en Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra exclusión y desarraigo (Bogotá: ACNUR)

ARTÍCULOS DE PRENSA

- Periódico *El Colombiano* (2000) “FARC y el ELN enfrentados” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2000/03/04/ index/html](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2000/03/04/index/html), consulta el 5 de marzo de 2000.
- Periódico *El Colombiano* (2000) “Asamblea comunitaria de Nariño, una proeza en la construcción de lo público” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2000/03/30/ index/html](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2000/03/30/index/html), consulta el 30 de marzo de 2000.
- Periódico *El Colombiano* (2001) “Sin tropiezos recuperaron la libertad 14 militares y policías” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2001/06/18](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2001/06/18), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2001) “Gracias a acuerdo entre combatientes, libres nueve personas” en *El Colombiano* (en línea) disponible en :

[http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/200/06/21](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/200/06/21), consulta el 18 de julio de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2001) “Autodefensas reconocieron el secuestro de seis alcaldes antioqueños” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2001/11/19/index/html](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2001/11/19/index/html), consulta el 3 de diciembre de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2001) “ La nueva señal de partida” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/ 2001/11/18](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2001/11/18) , consulta en julio 30 de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2001) “Comandantes del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia rechaza contactos con los alcaldes” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2001/11/05](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2001/11/05), consulta en julio 30 de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2001) “Entre éxodos y retornos” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2001/07/08](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2001/07/08), consulta en julio 30 de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2001) “Alcaldes de Oriente niegan negociación con ELN “ en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2001/10/30](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2001/10/30), consulta en julio 30 de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2002) “Tregua del ELN en Oriente” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// El Colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2001/05/28/](http://ElColombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2001/05/28/) consulta en julio 30 de 2004

Periódico *El Colombiano* (2002) “Alcaldes de vuelta, pero con el mismo mensaje” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2002/06/26](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2002/06/26) , consulta en julio 30 de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2002) “Buen recibo a eventualidad de los diálogos regionales” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2002/08/25](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2002/08/25), consulta en julio 30 de 2004

Periódico *El Colombiano* (2002) “ONU pidió claridad sobre decretos de Connoción Interior” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2002/10/02](http://elcolombiano.terra.com/paz_y_derechos_humanos/2002/10/02), consulta en julio 30 de 2004.

- Periódico *El Colombiano* (2002) “Palabras de Peso” en *El Colombiano* (en línea) disponible en : [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2002/12/22](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2002/12/22), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2002) “Gobierno cuestiona la neutralidad” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/ paz y derechos humanos/2002/08/27](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2002/08/27), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* 2003) Editorial “El general Montoya” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/ paz y derechos humanos/2203/07/27](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2203/07/27), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2003) “El ELN dio un respiro a poblaciones de Oriente” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2003/01/12](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2003/01/12) , consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2003) “Es una posibilidad de entendimiento” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http//el colombiano.terra.com/ paz y derechos humanos/2003/01/30](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2003/01/30), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2003) “Oriente reclama a comisionado de Paz” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/ paz y derechos humanos/2003/03/20](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2003/03/20), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2003) “ELN levantó para armado en el oriente antioqueño” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2003/03/29](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2003/03/29), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2003) “Plan congruente a Constituyente” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/ paz y derechos humanos/20003/03/30](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/20003/03/30), consulta en julio 30 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2004) “Labriegos cercados por la sminas y la coca”, en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos /2004/09/24](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2004/09/24), consulta en noviembre 10 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2004) “Pedidos de la gente “, en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2004/09/13](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2004/09/13), consulta en noviembre 10 de 2004.
- Periódico *El Colombiano* (2004) “No vamos a ir a negociar nada” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2004/09/03](http://elcolombiano.terra.com/pazyderechoshumanos/2004/09/03), consulta en noviembre 10 de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2004) “ELN considera contacto con los alcaldes” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http:// el colombiano.terra.com/paz y derechos humanos/2004/06/05](http://elcolombiano.terra.com/paz-y-derechos-humanos/2004/06/05), consulta en noviembre 10 de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2005) “Mas allá de las estadísticas” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/ inicio/portada/2005/01/10](http://elcolombiano.terra.com/inicio/portada/2005/01/10), consulta en enero 20 de 2005.

Periódico *El Mundo* (2005) “Antioquia: departamento rico pero inequitativo” en *El Mundo* (en línea) disponible en: [http// el mundo.com/2005/02/04/](http://elmundo.com/2005/02/04/), consulta el 2 de febrero de 2005.

Periódico *El Tiempo* (2004) “FARC expulsaron a 900 campesinos de sus veredas y los confinó en el caserío de Aquitania (Antioquia)” en *El Tiempo* (en línea) disponible en: [http// el tiempo.terra.com/coar/ noticias/index.html](http://eltiempo.terra.com/coar/noticias/index.html) 2004/07/16, consulta el 2 de diciembre de 2004.

Periódico *El Tiempo* (2004) “Drama en San Carlos y Monterrey” en *El Tiempo* (en línea) disponible en: [http// el tiempo.terra.com/coar/ noticias/index.html](http://eltiempo.terra.com/coar/noticias/index.html) /2004/07/15, consulto del 2 de diciembre de 2004

Periódico *El Tiempo* (2004) “Las vías del Oriente antioqueño están plagadas de minas antipersonales” en *El Tiempo* (en línea) disponible en: [http// el tiempo.terra.com/coar/noticias/index.html](http://eltiempo.terra.com/coar/noticias/index.html) 2004/02/18, consulta el 30 de julio de 2004.

Periódico *El Colombiano* (2005) “Mas allá de las estadísticas” en *El Colombiano* (en línea) disponible en: [http// el colombiano.terra.com/ inicio/portada/2005/01/10](http://elcolombiano.terra.com/inicio/portada/2005/01/10), consulta en enero 20 de 2005.